

Guerrero bronco

Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande



Armando Bartra

Guerrero Bronco

Campesinos, ciudadanos
y guerrilleros en la Costa Grande

Armando Bartra

© Armando Bartra
Febrero 2015

Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ y Para Leer en Libertad A.C.

www.rosalux.org.mx
brigadaparaleerenlibertad@gmail.com
www.brigadaparaleerenlibertad.com

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez y Jorge B. Fernández.
Diseño de interiores y portada: Daniela Campero.

ÍNDICE

Introducción.....	7
Los grandes caciques de la Independencia.....	17
Los pequeños caciques de la Revolución.....	36
Reforma radical en los años veinte.....	54
Reparto agrario y corporativismo progresista.....	75
La autogestión campesina.....	101
La insurgencia cívica acorralada.....	122
De la oposición electoral a la oposición armada.....	149
La reconversión estatista de la agricultura costeña....	165
Del gremio al <i>holding</i> social.....	180
La democracia por asalato.....	198
 Bibliografía.....	 22

Actuar políticamente, cuando se pertenece al México marginado, “aparece” como pecado de soberbia, como atentado contra el principio de autoridad o intento de rebeldía.

No se conciben con claridad organizaciones de base ni protestas políticas. No sólo los gobernantes sino los gobernados miran como delincuente el acto de organizarse y protestar, de exigir.

El sistema tiene un efecto educativo; las masas aprenden que para resolver sus problemas, el mejor de todos los caminos es recurrir al intermediario o procurador oficial... Aprenden que los partidos de la oposición resuelven los problemas de la oposición, no de las masas, y sólo se les acercan... en casos de desesperación...

Pablo González Casanova, *La democracia en México*

Introducción

La ardua construcción del ciudadano

DESENTRAÑAR LA MARAÑA GUERRERENSE, esclarecer el significado profundo de los enconos en apariencia circunstanciales, descubrir el sentido oculto de las absurdas muertes cotidianas, demanda ubicarse en una perspectiva más amplia. Cuando los acontecimientos se atropellan, estallan las brújulas y nos asalta el porvenir, ilumina y reconforta echar un vistazo a la historia. Sobre todo si su trama nos resulta familiar, y propicia una más distanciada y ecuánime reflexión sobre los desafíos del presente.

Para entender la saña con que, a fines del milenio, un nuevo Figueroa manda matar a los costeños insumisos, es necesario remontarse a la insurgencia gremial que arranca en los setenta, a la rebeldía cívica que estalla a fines de los ochenta. Pero ésta es sólo la cuenta corta. El origen de las actitudes ciudadanas y la matriz de las fuerzas políticas actuantes en el Guerrero actual, remiten también a un pasado más lejano. ¿Cómo soslayar el peso que aún tiene en la memoria política regional la militarización antiguerrillera que apenas comenzó a remitir a fines de los setenta? ¿Cómo explicar el origen de los focos campesinos de autodefensa armada sin remitirse al multitudinario y reprimido movimiento cívico de los sesenta? ¿Cómo entender el encono de la lucha política en Guerrero sin remontarse a las particularidades

de la revolución en ese estado, cuya secuela insurreccional se prolonga hasta los años treinta? ¿Cómo medir, en fin, la profundidad del caciquismo sin asomarse a los grandes patriarcas costeños del siglo XIX?

Tratar de iluminar la presente coyuntura política esbozando antecedentes regionales más o menos remotos, no es lujo académico ni prurito historicista: es una reflexión de primera necesidad. En los acontecimientos recientes está haciendo crisis un añoso y perverso entreveramiento de lo político y lo social, de la propiedad y el poder, del control económico y la dominación política. Esta imbricación no es patrimonio exclusivo de Guerrero, pero resulta sumamente relevante en una región donde hasta los municipios llevan el apellido de los caudillos y caciques que nos dieron patria y se cobraron el esfuerzo, dando así fe de su condición patrimonial: Tecpan de Galeana (por don Hermenegildo), Atoyac de Álvarez (por don Juan), Coyuca de Benítez (por doña María Faustina, esposa de don Juan y prócer consorte).

La recuperación del pasado no sólo persigue fines analíticos; refrescar la memoria histórica es también indispensable para reorientar la práctica y definir los proyectos de las fuerzas político-sociales actuantes en la región. La alarmante semejanza de hechos recientes con acontecimientos de hace dos décadas, así como la analogía entre aquellos y los sucedidos en la primera mitad del siglo, será menos ominosa si los actores políticos actuales tienen muy presente su pasado. No se trata de espantar con el petate del muerto, sino de reconocer en las aparentes repeticiones históricas, la inercia de estructuras cada vez más irracionales.

EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO la acción popular ha transcurrido por dos vertientes: movilizaciones sociales reivindicativas y combates cívicos por la democracia política. Pero hasta ahora, los procesos gremiales y los despliegues ciudadanos han seguido cursos divergentes. Reconstruir el camino de las acciones reivindicativas de carácter socioeconómico y el proceso de lucha por la democracia política es hacer la historia de un desencuentro.

El último cuarto de siglo se ha caracterizado por la emergencia entre obreros, campesinos, indígenas, colonos y estudiantes, de movimientos y organizaciones sociales independientes, que rompen con el entramado político tradicional; tanto con el corporativismo del partido de Estado como con la oposición política rutinaria. Las nuevas fuerzas sociales se distancian de las centrales oficialistas, que son incapaces de representarlas, pero también de los partidos de oposición maximalistas o electoreros. Así, las agrupaciones emergentes de la sociedad civil derivan hacia un apolitismo pragmático, o si se quiere, practican una política que rehuye llamarse por su nombre.

Durante la última década, también los movimientos por la democracia política han sido una constante en la lucha popular. Al disputar con sorprendente garra la Presidencia de la República, el neocardenismo elevó estos combates al plano nacional y tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) han competido con éxito diverso por numerosas gubernaturas. Pero, quizá debido a la relevancia cotidiana del poder munici-

pal, el ámbito más frecuentado por la lucha ciudadana ha sido y sigue siendo el de las alcaldías. Y detrás del combate contra el despotismo de las autoridades locales hay, casi siempre, agravios socioeconómicos seculares. En esta perspectiva, los movimientos por la democratización del poder formal se articulan con el cuestionamiento de la injusticia económica y son la prolongación de la lucha reivindicativa por otros medios.

Pero el espacio, las reglas y los actores de la política a la mexicana, tienden a propiciar experiencias negativas; tanto fracasos por imposición, fraude o represión, como victorias pírricas que a la larga devienen retrocesos. Lógica perversa que desalienta la acción política propiamente dicha, y coadyuva a la despolitización pragmática de la lucha reivindicativa.

Este desencuentro está condicionado por el hecho de que la democracia política y la justicia socioeconómica son instancias distintas —aunque complementarias— y configuran dos caras diferentes de un mismo sujeto; en una, el pueblo aparece como contingentes de ciudadanos políticamente actuantes, y en la otra, como sectores y clases gremialmente estructurados.

Este desdoblamiento, sin embargo, sólo deviene en divergencia y aun oposición por la naturaleza del sistema mexicano posrevolucionario; una estructura de dominio basada en la simbiosis entre poder político y poder económico, cuya columna vertebral es el partido de Estado y cuyas bases se encuentran en el cacicazgo y el corporativismo. La mecánica del régimen, políticamente autoritario y económicamente injusto, desvirtúa tanto la auténtica organización

gremial como la efectiva participación político-electoral, fomentando prácticas clientelistas donde los derechos sociales y gremiales aparecen como concesiones del poder — dadivoso o mezquino, según las circunstancias — y están condicionados por la fidelidad política al partido de Estado y a sus estructuras corporativas y caciquiles.

En la marcha hacia una nueva democracia, muchos dilemas habrán de resolverse. Entre otros, las persistentes rutinas clientelistas que conducen a alienar la independencia política a cambio de dádivas sociales. Si bien los problemas a superar no están únicamente en la relación entre el Estado y la sociedad. Después de 1988 la sociedad civil no sólo se organiza, también se politiza aceleradamente, y en este proceso es indispensable resolver el viejo desencuentro entre movimiento reivindicativo y movimiento político; entre organización gremial y organización partidaria. El corporativismo de Estado no puede ser cuestionado a partir de un corporativismo de oposición y si las organizaciones gremiales deben ser independientes del poder político, deben serlo también de todos los partidos. Pero si en el pasado esta autonomía pudo entenderse como neutralidad, hoy el apoliticismo pragmático y defensivo es cada vez menos viable.

Los partidos políticos de oposición no pueden dejar de lado a los movimientos reivindicativos, y las organizaciones sociales de carácter autónomo no pueden avanzar como proyectos populares alternativos soslayando la persistente conmoción electoral; pero la politización no corporativa de la vida social es una tarea inédita que exige una profunda redefinición de las relaciones entre movimientos cívicos y movimientos gremiales, entre organizaciones sociales rei-

vindicativas y partidos políticos, entre la lucha por la democracia político-electoral y el combate por la democracia económica y social.

EL PROCESO ELECTORAL DE 1988 constituye el desdoblamiento de la crisis social en crisis política del sistema, entendida ésta como incursión masiva de los ciudadanos en la práctica electoral.

Si en los movimientos sociales anteriores a 1988 Carlos Monsiváis descubre una sociedad que se organiza, a partir de ese año tendremos que hablar de una sociedad que también se politiza. Y lo hace rompiendo los esquemas tradicionales: tanto los forjados por el partido del Estado y sus organizaciones corporativas, como los practicados de antiguo por la oposición partidista. Por primera vez en el México posrevolucionario, la lucha por la democracia económica y social comienza a enlazarse con el combate por la democracia política. Y el ruido es verdaderamente atronador. Hacer política ya no es patrimonio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus fuerzas corporativas, o pretensión frustrante de una oposición partidista rutinaria o marginal; la emergencia de las masas en la política cobra la forma de movimiento y las organizaciones no corporativas comienzan a ser protagonistas en un ámbito de la democracia que antes les estaba vedado.

Como en todo el país, en Guerrero la nueva insurgencia cívica arranca en 1988, pero en esa entidad se profundiza al año siguiente con motivo de la elección de alcaldes y diputados locales. La experiencia alienta esperanzas y deriva en frustraciones, pero la búsqueda de reglas de juego más

justas y civilizadas y la construcción de una nueva cultura ciudadana siguen pendientes. Un balance sería quizá prematuro; en cambio, puede ser productivo ubicar los acontecimientos recientes en su contexto histórico. Veremos entonces cómo, en los enconados combates de los últimos años, puede leerse un esfuerzo democrático donde confluyen, tanto la intensa historia cívico-política del estado durante los sesenta y setenta, como los amplios procesos de organización gremial de los ochenta. Pues también en Guerrero el reto de los demócratas está en reconciliar al movimiento cívico con la lucha social, a la organización económica con la organización política, a la adscripción gremial con la militancia partidaria.

En la perspectiva que nos ofrece el presente, la historia de Guerrero es un claro ejemplo del desencuentro entre la lucha por la democracia política y la reivindicación de las demandas sociales. Detrás de los movimientos cívicos del medio siglo estaban tanto el despotismo gubernamental como las injusticias socioeconómicas, pero el curso impuesto por la intransigencia y la represión bloqueó por completo la posibilidad de negociar las reivindicaciones inmediatas y empujó a la oposición política al maximalismo revolucionario de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. En la práctica, luchar por un cambio político de fondo significó posponer hasta el triunfo de la revolución las reformas de la estructura socioeconómica. Como contrapartida, las nuevas organizaciones populares surgidas en los ochenta tienen que soslayar el discurso político contestatario, evitando a toda costa que se abran las heridas apenas cicatrizadas y emerja de nuevo el Guerrero bronco.

En el fondo subyace una suerte de esquizofrenia social: la simpatía por los ideales democráticos de la oposición cívica que devino guerrilla se mantiene rigurosamente separada del activismo en las nuevas organizaciones de productores.

Este desencuentro entre el proceso democrático cívico-político y la lucha por reivindicaciones económico-sociales, comienza a modificarse en 1988 con la sorprendente eclosión del neocardenismo. En Guerrero, esta corriente posee una capacidad de convocatoria que no habían tenido los partidos tradicionales, y el movimiento cívico se extiende impetuosamente entre las bases de las organizaciones sociales, reforzado por el hecho de que el gobierno estatal, encabezado por Ruiz Massieu, se gana a pulso la animadversión popular debido a su sistemática campaña de hostigamiento a las organizaciones independientes.

El repudio a la imposición y la simpatía por el cardenismo, por una parte, y la acción reivindicativa de las organizaciones gremiales, por otra, pasan, de manera espontánea e informal, de la divergencia a la convergencia, y la paulatina configuración orgánica del Frente Democrático Nacional (FDN), primero, y del PRD, más recientemente, se entreveran inevitablemente con las estructuras y la militancia de las organizaciones gremiales preexistentes. La oposición cívica ratifica su presencia como nuevo actor social y comparte la escena con los protagonistas de aparición más antigua, aunque los papeles a representar todavía no están claramente asignados.

SIN EMBARGO EL SISTEMA SE EMPECINA en cerrar las puertas. En la última década, mientras los guerreren-

ses desempolvan su proverbial civilismo, también se afilan los reflejos defensivos del cacicazgo que gobierna la entidad. Balas y sangre son la respuesta crónica al pacífico reclamo social.

Este libro — reseña del nacimiento, auge y agonía de un sistema vicioso — quiso ser también un acta de defunción. No lo fue. En Guerrero los recurrentes rituales de la barbarie se niegan a remitir; en el fin del milenio la vida política sigue extraviada en los meandros de una historia, perezosa o perversa, que se place en posponer el fin del viejo régimen.

Capítulo primero

Los grandes caciques de la Independencia

El general Juan era el patriarca del Sur... Bajo de estatura, vivos sus ojos... cubría su cabeza con una montera de seda negra que contrastaba con sus mechones blancos... Llevaba una capa española azul... Sus soldados le adoraban y tenían con él la osadía del hijo con el padre.

Juan A. Mateos

Memorias de un guerrillero

LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, con territorios segregados a los de México, Puebla y Michoacán, resulta del circunstancial avenimiento de los caudillos insurgentes Juan y Nicolás Bravo. A mediados del siglo XIX el federalista yorkino de Atoyac y el centralista escocés de Chilpancingo suspenden temporalmente sus añejas y enconadas disputas ideológicas, políticas y militares, en las que se juega la hegemonía sobre el territorio sureño, y suman esfuerzos para hacer de la zona de influencia que comparten de tan mala manera, una nueva entidad federativa. Logrado el objetivo común, por decreto presidencial de 1849, el pleito por el control del flamante estado de Guerrero se reanuda.

Guerrero es, desde su fundación, ámbito de caudillos de origen terrateniente y vocación patriótica; hombres que al calor de las guerras de la Independencia y de los combates de la Reforma, extienden su dominio de la esfera económica a la militar y de ahí a la política. Los caciques del sur pasan de patrones de hacienda a patriarcas de extensos territorios; base y sustento de su proyección nacional, cuando las cosas pintan bien, y retaguardia segura, cuando se impone el repliegue.

POBLADO DE ANTIGUO POR MIGRACIONES tempranas de chontales, tlapanecos, mixtecos, amuzgos, mazatecos y otros grupos chichimecas, y dominado desde el siglo XI por nahuas provenientes del noroeste y por tarascos que se extienden desde el occidente, el actual territorio de Guerrero se transforma en el siglo XV en zona de influencia del imperio mexica, que para fines tributarios lo divide en siete provincias; sólo escapa a su dominio la fundación tarasca de Coyuca.

En la conquista y durante la colonia, el interés de los españoles sobre lo que hoy es Guerrero corre por dos vertientes: las expectativas mineras, fundadas en la presencia de metales preciosos en los tributos provenientes de la región, y la búsqueda de puertos viables para la conexión con las Indias. Las primeras se materializan en la riquísima zona minera de Taxco; la segunda se concreta en el establecimiento del puerto de Acapulco, que desde 1565 recibirá cada seis meses y durante doscientos años a la Nao de China, un galeón procedente de Manila por el que llegan a México los exóticos productos de Oriente.

Durante la temprana colonia, la región se mantiene tributaria y sólo cambia el destino de las exacciones: ahora las que provienen de encomiendas engordan a los conquistadores, y benefician directamente a la corona las que se originan en las villas. Con el tiempo, los encomenderos y algunos avecindados comienzan a incursionar en la producción agrícola y artesanal. Atraídos, quizá, porque la Nao de China exporta cacao proveniente de Caracas y Guayaquil¹, establecen cacaotales, y junto a ellos plantaciones de caña y algodón, así como pequeños trapiches y obrajes de hilados y tejidos. En las costas, de tenue demografía original, mermada, además, por las tribulaciones coloniales, la mano de obra pronto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de plantaciones y talleres, iniciándose el repoblamiento con esclavos africanos. Tan intenso es el tráfico humano, que para fines del siglo XVIII los negros y mestizos dominan la demografía de las costas y de las vertientes externas de la sierra.

La importancia económica de las plantaciones y los obrajes es modesta si se compara con la minería de Taxco y con las transacciones asiáticas. En estas últimas actividades se concentra el interés de los españoles, mientras que los criollos tienen que conformarse con las fábricas y los talleres de las costas, y para los mestizos queda el plebeyo negocio de la arriería. Pero con las reformas borbónicas pasan a segundo plano las diferencias de nacimiento, estatuto social y esfera económica, pues la liberación del mercado metropolitano acorrala tanto a las casas comerciales españolas como a los obrajes de los criollos y al negocio de recuas de carga de los mestizos. Así, todos a una, los sectores propietarios

hacen causa común contra España afiliándose a la lucha independentista.

Los primeros alzamientos insurgentes de la zona, que ocurren a fines de 1810 y cuentan con importante participación indígena, son rápidamente sofocados. Con mejor fortuna corre José María Morelos, enviado por Miguel Hidalgo a levantar tropas en la región del sur. En su recorrido por la cuenca del río Balsas, el cura de Carácuaro recluta a muchos de los futuros prohombres de la Independencia: en Tecpan se le suman Juan José, Antonio y Hermenegildo Galeana; en Coyuca, Juan ; y poco después, en Tixtla, Vicente Guerrero y Nicolás Catalán. Todos ellos son patriotas a carta cabal, pero también gente de razón y de no poca fortuna. Los Galeana poseen cinco haciendas: Zanjón, Ixtapa, Coyuca, Obispo y Coyuquilla; es dueño de La Providencia y los Bravo, de Chichihualco.

Estos hacendados nacionalistas se juegan en el albur de la insurgencia tanto el pellejo como la propiedad. Por la causa independentista arriesgan dinero, pertrechos, armas y monturas. Aportan también a su peonada: africanos, naturales y mestizos que a una orden del patriótico amo transitan de la condición de mano de obra a la de carne de cañón. Los negros y pintos de Galeana acompañan a Tata Gildo a la batalla como antes lo seguían a la pizca y a la zafra. Los ejércitos insurgentes reclutados en esta región no son, pues, voluntarios sino forzados; acasillados que pelean en guerra ajena como de ordinario trabajan por cuenta del patrón en tierras que no les pertenecen.

La batalla por la nación es tan prolongada como sinuosa, y los territorios del sur son escenario de hechos trascenden-

tes como la proclamación de la Independencia, formalizada en el Congreso de Anáhuac celebrado a fines de 1813 en Chilpancingo. Después de fuertes descalabros y un reflujo de casi ocho años, en el que sólo Vicente Guerrero y un puñado de insurgentes mantienen vivas las brasas de la insurrección, Agustín de Iturbide se incorpora a la causa, y bajo su circunstancial liderazgo la colonia deviene nación y la nación, imperio.

Agustín I recompensa al esforzado don Vicente con la Capitanía General del Sur, circunscripción de índole militar que abarca parte de lo que hoy es el estado que lleva por nombre su apellido. Deferencia que no impide a Guerrero y Bravo tomar las armas contra el Imperio, en 1822, y perseverar en el alzamiento hasta la caída de Iturbide. El establecimiento de la República no clausura sin embargo el conflicto, pues se inicia una nueva confrontación — ahora entre federalistas y centralistas — que opone a los dos próceres sureños: don Vicente es masón del rito yorkino y partidario del sistema federal, mientras que don Nicolás, igualmente masón pero del rito escocés, reivindica el centralismo. Guerrero se alza en 1830 y muere fusilado al año siguiente, de modo que la bandera federalista pasa a manos de Juan . Así, en los años siguientes, la confrontación política e ideológica por la condición del Estado mexicano — al igual que la rebatinga por el control de la región — correrán por cuenta del escocés de Chilpancingo y del yorkino de Atoyac.

En el curso del abigarrado proceso que a trompicones venimos narrando, la Nueva España deviene nación independiente y los jefes insurgentes de la zona sureña pasan de ser simples hacendados a líderes políticos y militares. Y

si disponer de fortuna personal les había desbrozado el camino al mando, el poder alcanzado en campañas bélicas y lides políticas se vuelve palanca de acumulación económica. Los flamantes hombres de Estado forjados al calor de la insurgencia, no distinguen demasiado entre los intereses nacionales y los personales, y así como están dispuestos a arriesgar hacienda y fortuna por la causa, les parece natural el empleo del poder para resarcirse de las pérdidas y, de ser posible, acrecentar sus haberes.

En coyunturas de gran movilidad política, los estilos patriarcales de liderazgo y las concepciones patrimoniales del Estado, propician la transformación de caciques locales o regionales en caudillos de la patria toda: Nicolás Bravo, finquero de Chilpancingo, llega a la Presidencia de la República en 1827 y repite como interino en 1839; Juan , hijo de hacendados de Atoyac, ocupa provisionalmente el mismo cargo en 1855; y si Hermenegildo Galeana no hace carrera política —aunque en el ejército llega a mariscal— es quizá porque no tuvo escuela, ni siquiera supo leer, y sobre todo porque muere en combate en 1814. Pero si el joven insurgente no vive para disfrutar de sus laureles, la familia se encarga de capitalizar su meteórica carrera, apropiándose de casi toda la Costa Grande. Llegan a ser de los Galeana más de 19 haciendas: Feliciano y Camufla, en La Unión; Iztapa de Barrio Viejo y de la Correa, en el hoy municipio de José Azueta; Potosí, Llano de la Puerta, Jolucauca y Coyuquilla, en el actual Petatlán; Del Obispo y Tecpan, en Tecpan; La Zanja, Los Arenales y Cabañas, en Benito Juárez; Zacualpan y Cacalutla, en Atoyac; Cayaco, Xocalmaní, Coyuca y Aguas Blancas, en Coyuca². La familia Galeana es la principal te-

rrateniente al noroeste de Acapulco, pero Juan es el cacique mayor. Su fortuna, nada despreciable, es sólo complemento de su dilatada base social, temible capacidad de fuego y decisivo peso político. El otro hombre fuerte de la región sureña es Nicolás Bravo, cuyos seguidores más fieles están en las zonas de Chilpancingo y Tlapa. Los dos caudillos, aunque contrapuestos en casi todo, coinciden en propugnar la autonomía política de su territorio: desde 1835 don Nicolás impulsa infructuosamente la creación de un departamento del sur; en 1841 él y Juan proclaman un efímero departamento de Acapulco, y por fin, en 1849, logran que se decrete la formación de una nueva entidad federativa. Nicolás Bravo muere en 1854, al tiempo que se encumbra gracias a su exitosa lucha contra la dictadura de Santa Anna, que lo lleva a ocupar provisionalmente la Presidencia de la República en 1855. En Guerrero, sin embargo, herederos políticos de Bravo, como Florencio Villarreal y Vicente Jiménez, siguen disputándole el mando al brazo fuerte de Atoyac.

Congruente con su concepto patrimonial del poder, don Juan no sólo deja a su hijo Diego la hacienda de La Providencia, los terrenos de Coayaco, Coyuca, Ejido Viejo y San Marcos, y los ranchos de Amatlán, Jaltianguis, El Tecomate y Tepetixtla³; también lo hace general y le hereda el mando político militar. Ambos Álvarez acaudillan a los pintos del sur, y el apellido se eterniza al frente del poder ejecutivo estatal: el padre había ocupado el puesto de 1849 a 1853 y el hijo es gobernador en tres ocasiones 1862, 1873 y 1881.

Bajo el dominio de los Álvarez, la Costa Grande se configura como una suerte de comarca feudal donde se entreveran propiedad territorial, control económico, mando militar

y poder político. Todo amalgamado por lazos ideológicos de acendrado corte patriarcal, pues don Juan y don Diego actuaron siempre como protectores de los indios, y así como apelaban a los pintos para poner en pie a su famosa División del Sur, también los respaldaban de palabra y obra propiciando salidas negociadas a las frecuentes protestas y esporádicas *jacqueries* de los naturales. “Si en lugar de que los indios sean perseguidos por los ricos hacendados — sostenía Juan Álvarez — se les protege y se les exceptúa de pensiones y gabelas, la República tendrá antes de medio siglo, unos hombres enteramente útiles y productores⁴.”

Aunque es necesario reconocer que la Pantera del Sur simpatizaba sobre todo con los alzamientos que ocurrían en tierra ajena. Si en 1842 intercede por los campesinos alzados en Quechultenango y en 1843 apoya a trasmano a los insurrectos de Chilapa, es porque estos movimientos cuestionan el poder de su antagonista político Nicolás Bravo, y si en 1849 fomenta el alzamiento del indio Domingo Santiago es precisamente para presionar por la creación del estado de Guerrero. Resulta cuando menos sospechoso que después de la constitución de la nueva entidad federativa y de la muerte de Bravo, se adormezcan durante más de medio siglo los alzamientos en Chilapa y Tlapa, dominios del escocés de Chilpancingo que en la década de los cuarenta vivieron conflictos recurrentes⁵.

En el Guerrero decimonónico la cosecha de caudillos patrióticos es tan abundante como precario el resto de la economía rural. Alejadas del centro del país por la hostilidad de los caminos, las fincas costeras se ocupan en cultivos exportables: cacao, café, tabaco, algodón, henequén y caña de

azúcar. Pero a diferencia de otros enclaves del Pacífico sur, como el Soconusco chiapaneco, que no producen héroes pero en cambio atraen cuantiosas inversiones extranjeras, los capitales norteamericanos llegan a la costa de Guerrero poco antes de la Revolución y no tienen tiempo de arraigar. La agroexportación guerrerense es apenas modesta y el grupo empresarial más fuerte aclimatado en el estado es el de los españoles que administran el añejo comercio marítimo de Acapulco. Estos han extendido paulatinamente sus actividades, primero habilitando y comprando cosechas y después estableciendo un par de fábricas textiles y una jabonera. Las vías férreas porfiristas, que irradian modernidad a lo largo y ancho del país, en Guerrero se quedan cortas: el ferrocarril proyectado para llegar a Acapulco no pasa de Iguala, de modo que las costas permanecen al margen del “progreso” impulsado por el régimen porfirista.

Juan Álvarez es el cacique por antonomasia. El Dios del Sur o Pantera del Sur, como le llaman sus paisanos, se define a sí mismo como “áspero” y “de costumbres agrestes”⁶ y quizá por ello puede alardear de ser “el soldado del pueblo”⁷, y de contar con el apoyo incondicional de las comunidades costeñas: “Una insinuación mía es una orden para ellos”⁸. Naturalmente, los políticos cultos y conservadores, como Lucas Alamán, rechazan su pretensión de ser el “apoderado de los pueblos del sur, en cuyo nombre, dice, habla”⁹. Pero la mejor descripción de la condición y responsabilidades de Juan como cacique paradigmático la encontramos en la carta que le dirige otro de los grandes caudillos decimonónicos, don Antonio López de Santa Anna:

Nuestro pueblo, por su educación, necesita todavía que se le conduzca de la mano como a un niño, bien que este conductor es preciso que sea de buena intención, hombre amante de su patria y verdaderamente republicano, para hacerlo depositario de una gran suma de poder¹⁰.

Si Juan Álvarez había enfrentado con éxito la competencia de otros caudillos locales, su hijo Diego tiene que luchar también, y sobre todo, contra los esfuerzos centralizadores del régimen porfirista, encaminados a socavar la autonomía de los cacicazgos regionales.

El combate es largo e intrincado y a la postre se impone la astucia de don Porfirio. Pero en el proceso, el centro no sólo golpea al caudillaje sureño, también atropella la autonomía del estado, agravando al pueblo guerrerense todo y no sólo a la oligarquía local. El resultado será un fuerte sentimiento regionalista, que junto a las demandas democráticas y de justicia social, alimentará la hoguera revolucionaria de 1910.

Desde su primera gubernatura, la correlación de fuerzas guerrerense había favorecido al costeño Diego Álvarez en su pugna con el heredero político de Nicolás Bravo, el tixtleño Vicente Jiménez. En 1867, en plena guerra contra la Intervención francesa, el republicano Jiménez desconoce como gobernador y comandante militar al también republicano Álvarez.

En 1868 el alzamiento es sofocado, pero en 1870 Jiménez se subleva otra vez, ahora contra el gobierno de Francisco Arce, y de nueva cuenta es vencido por Álvarez en 1871. En este mismo año, Porfirio Díaz se rebela contra la reelección de Juárez, y en Guerrero se le suma Vicente Jiménez, mientras que Álvarez toma partido por don Be-

nito. El Plan de la Noria fracasa y en 1872 Jiménez, con la cola entre las piernas, tiene que amnistiarse. Pero cuatro años después el Plan de Tuxtepec lleva a Díaz al poder, y gracias al apoyo del centro el caudillo tixtleño logra por primera vez equilibrar sus fuerzas con las del cacique de la costa. A la larga el ganancioso en este impasse no será Álvarez, ni tampoco Jiménez, sino Porfirio Díaz quien aprovecha el empate para imponer gobernadores sumisos al centro y sin respaldo en el estado. Entre ellos el comodín jalisciense Francisco Arce, quien ya había sido utilizado por Juárez para el mismo cometido, y durante el porfiriato repite en el cargo otras cuatro veces.

Arce gobierna con interrupciones y sobresaltos, pues Álvarez y Jiménez lo hostilizan de soslayo, y de frente y a plomazos se le opone el general Canuto Neri. Éste es un caudillo regional de menor talla, que había fluctuado entre el de Atoyac y el de Tixtla, y en 1883 se erige en brazo armado de todos los cacicazgos guerrerenses, contra el jalisco Arce y sus fuereños.

El motivo del alzamiento es la cuarta reelección de Arce, y Neri logra su renuncia y sustitución por un interino, entre otras cosas porque el gobernador ha caído de la gracia de Díaz. Arce es incondicional de Romero Rubio, pero a principios de los noventa don Porfirio se distancia de su suegro y secretario de Gobernación, de modo que la insurrección de Neri le resulta providencial. En sustitución de Arce entran, primero, Ortiz de Montellano —inaceptable para la oligarquía regional— y poco después un interino de conciliación, Antonio Mercenario.

Se aproxima el fin del siglo sin que Díaz haya logrado sentar definitivamente sus reales en las agrestes tierras del sur. Aunque los caciques de Guerrero no sólo están fatigados; son hombres viejos y sin herederos políticos visibles. En 1896, recién pacificado y de regreso a Chilpancingo, muere Canuto Neri posiblemente envenenado; Vicente Jiménez fallece en 1894 de muerte natural a los 76 años; y en 1899 pasa a mejor vida el longevo Diego Álvarez a los 87 años.

En una década abandonan el escenario las tres figuras señeras de Guerrero. Y siendo el cacicazgo una relación personal, su desaparición física es también el fin del poderoso caudillaje decimonónico, forjado al calor de las guerras de la Independencia, la Reforma y la Intervención.

Sin embargo, su muerte no clausura la lucha por la hegemonía. Al contrario, con la desaparición de los grandes polos de poder personalizado, la rebatanga se generaliza y la inestabilidad política deviene enfermedad crónica. A Mercenario y a su sucesor Agustín Mora, se les opone Castillo Calderón, por vía pacífica y electoral. Pero cuando el movimiento cívico es reprimido, los seguidores de Calderón se levantan en armas con el Plan del Zapote y son diezmados por las fuerzas federales comandadas por Victoriano Huerta.

Como los de Jiménez, Álvarez y Neri, el movimiento de Calderón es una lucha contra la usurpación centralista y por recuperar Guerrero para los guerrerenses de razón. Y, dado que cuestionan la imposición de gobernadores, que habitualmente repiten en el poder, estos movimientos son también, de cierta manera, combates por elecciones libres, que comienzan a esbozar el futuro lema revolucionario de "sufragio efectivo y no reelección".

La demanda de elecciones libres, esgrimida por Canuto Neri en 1893 y que también aparece en el Plan del Zapote del 11 de abril de 1901, responde más a intereses regionalistas que a una auténtica voluntad democrática. Pero no cabe duda que con el fin de los grandes caudillos —cuyo derecho a mandar no se fundaba en algo tan prosaico como los votos— se ponen en la orden del día las formas de gobierno, los procedimientos electorales, y en general los mecanismos de la democracia representativa.

Si los dinosaurios decimonónicos pudieron ejercer el poder regional por méritos propios y como apoderados de los pueblos, las fuerzas políticas emergentes en el partaguas del siglo, débiles y sin clientela preestablecida, tienen que fundar su legitimidad en la defensa de las formas democráticas. Abren así, sin querer, espacios para que el pueblo todo cuestione al despotismo y se lance a vengar sus agravios.

PESE A QUE MUCHOS CAUDILLOS decimonónicos compartían con Santa Anna la convicción de que el pueblo “necesita todavía que se le conduzca de la mano como a un niño”, la emancipación nacional conquistada por la guerra independentista es inseparable de una cierta emancipación ciudadana, y los procedimientos democráticos de gobierno son patrimonio formal y bandera política de la flamante República. Sin embargo, a lo largo de todo el siglo XIX y durante el porfiriato, la tensión entre autoritarismo y democracia cruza toda la estructura social, empezando por el municipio. Ya en la célula básica de nuestra organización política se muestra la contradicción entre las autoridades

electas y las designadas; entre el ayuntamiento que expresa la voluntad popular y el jefe político nombrado por el gobierno estatal; entre el poder que viene de arriba y del centro y el que emana de la base ciudadana.

Desde la colonia, las funciones del cabildo electo fueron absorbidas por los intendentes; y las leyes de Cádiz, si bien consagran la elección popular del ayuntamiento, también crean la autoritaria institución de las jefaturas políticas. Las principales constituciones republicanas —como la de 1824 y la de 1857— no reglamentan la organización municipal y sólo en la Constitución centralista de 1836 se establecen los jefes políticos, así como en el Estatuto Provisional del Imperio de 1865 se instituyen los prefectos imperiales. Sin embargo, en las constituciones de casi todas las entidades federativas aparece la mencionada función, con mínimas variantes en las atribuciones y el nombre: jefes políticos, directores políticos, visitadores políticos, prefectos políticos. Sólo los prefectos populares, que existieron en Sonora hasta 1892, y los jefes políticos que operaron en Zacatecas hasta 1896, eran electos; los demás son personeros directos de los gobernadores; autoridades intermedias entre los ayuntamientos y el poder ejecutivo estatal que en la práctica nulifican la libertad municipal.

Los jefes políticos se constituyen en el primer eslabón de la cadena del despotismo. Con ellos el cacicazgo deviene institución, y la función del jefe patriarcal, que desde siempre controla y representa a su clientela, se reviste de legalidad a través del nombramiento. Pero, al formalizarse, el mecanismo sufre también una inversión. Mutación definitiva, pues mientras que al antiguo cacique lo legitimaba

su clientela, al jefe político lo legitima el nombramiento del gobernador. Así, la fidelidad primordial del cacique institucionalizado ya no es hacia abajo sino hacia arriba. El jefe político será funcional si es capaz de mediar con eficacia entre las regiones y el centro, lo que supone alguna representatividad local, pero en caso de desavenencias deberá someter los intereses locales a los designios del gobernador o del presidente. En la función y persona del jefe político confluyen todas las contradicciones y enconos sociales, pues no sólo se trata de una instancia antidemocrática; el que la ocupa es un portavoz del gobierno estatal o federal, y con frecuencia es también un representante de intereses políticos foráneos que ofende al localismo lugareño y amenaza al cacicazgo regional.

En Guerrero, como en Colima, Querétaro y otros estados, se designa a estos funcionarios bajo el término de influencia francesa prefectos políticos, y su jurisdicción es distrital, aunque hay también subprefectos de incumbencia municipal¹¹. Los prefectos y subprefectos tienen entre sus funciones “cuidar [...] de la tranquilidad pública [...] y en general lo concerniente al ramo de policía”, “hacer [...] el repartimiento de tierras”, “suspender con causa justificada a alguno o algunos de los miembros del ayuntamiento”, “imponer multas y arrestos”, “disponer de la guardia nacional”, “cobrar las contribuciones”, etcétera. Otra de las funciones de esas figuras es organizar y vigilar la renovación de los cabildos, son por tanto los ejecutores de las consignas electorales del gobernador. Y por si esto no bastara, el jefe del ejecutivo estatal tiene entre sus atribuciones constitucionales la de “suspender con causa justificada a los ayuntamientos”¹².

En los prefectos y subprefectos se concentran todas las tensiones políticas, y cuando uno de los cacicazgos regionales controla la gubernatura del estado, lo habitual es que sean utilizados como cuña para socavar el poder de los otros caudillos, moviéndoles el tapete en sus propios territorios. Así, el ámbito distrital es escenario privilegiado de la lucha entre Jiménez y Álvarez, caciques regionales y reiterados gobernadores del estado. En cambio, cuando el gobernador representa los intereses del centro y carece de apoyo entre los grupos locales de poder, los prefectos y subprefectos impuestos se constituyen en instrumentos del control federal y hacia ellos se enfoca la batalla cotidiana contra el invasor.

Ejemplo de *guerrismo* a ultranza es la lucha contra Arce en 1885. Al gobernador de origen jalisciense se le echa en cara que la mayoría de los funcionarios del poder ejecutivo no son del estado, que seis de los catorce prefectos son fuereños, y que diez de los veintiocho diputados no son de Guerrero.

La última de las acusaciones contra Arce llama la atención sobre la nula autonomía del poder legislativo, pues lo que se le cuestiona no es que haya impuesto a los diputados, sino que muchos de sus legisladores provengan de otras entidades. Otro testimonio de que en la cultura política guerrerense está del todo ausente la división de poderes es una carta de Arce a Álvarez, de 1886, en la que el gobernador busca la anuencia del cacique para definir la composición del Congreso local:

[...] una lista de personas que he considerado para formar la próxima legislatura del Estado

[...] toma en cuenta la imperiosa necesidad de contar en la próxima Cámara con [...] leales partidarios de mi administración [que] apoyen decididamente mis nobles intenciones¹³.

Los candidatos de Arce fueron electos sin la anuencia de Álvarez, quien de inmediato acusó al gobernador de haberlos impuesto mediante los prefectos políticos y la fuerza pública¹⁴.

LA REIVINDICACIÓN DE LIBERTAD municipal y el combate contra el despotismo de los prefectos políticos, son ejes de la lucha popular guerrerense desde fines del siglo XIX y serán fundamentales en la revolución de 1910. Atrás de estas banderas subyace la voluntad democrática de las mayorías, pero también los afanes hegemónicos del cacicazgo regional; intereses muy distantes que sin embargo confluyen en una suerte de regionalismo libertario.

Naturalmente, la convergencia de todos los guerrerenses es sólo epidérmica. Los grandes propietarios y caciques son responsables y beneficiarios de una añeja injusticia económica que se profundiza con el inicio del nuevo siglo. La sociedad guerrerense está lejos de ser homogénea, y si los de abajo aspiran a librarse del despotismo porfirista, también quisieran deshacerse de la oligarquía local.

Como en todo el país, el panorama rural de Guerrero a comienzos de este siglo está presidido por el latifundio. La gran propiedad territorial no es ahí tan abrumadora como, por ejemplo, en Morelos pero su peso es suficien-

te como para ejercer el control sobre toda la producción rural y concentrar el excedente económico campesino en unas cuantas manos.

El latifundismo es mayor en las costas y estribaciones de la sierra, donde las expectativas de la silvicultura, la ganadería extensiva y la agricultura comercial (algodón, arroz, café, tabaco, copra), estimulan el acaparamiento. A principios de este siglo en la Costa Grande, algunas haciendas que fueron de los Galeana están ya en manos de otras familias locales, como los Soberanis, dueños de Nuxco, Papanoa y Coyuquilla, o los Romero, dueños de Potrerillos. Pero los nuevos grandes propietarios son las tres voraces casas comerciales españolas de Acapulco, fundadas a mediados del siglo XIX por el asturiano Baltasar Fernández Pando y los vascos Domingo Alzuyeta y Pedro Uruñuela. Para fines del siglo XIX las “tres casas” se han apoderado del sistema comercial de la región, a través del cual controlan, sin dejar resquicios, toda la actividad productiva costeña¹⁵.

Pero los mercaderes son también grandes terratenientes: Fernández y compañía posee cerca de 50,000 hectáreas en Tecpan, mientras que Alzuyeta y compañía es dueña de la hacienda de San Juan de Dios, hoy municipio de San Jerónimo.

En Atoyac, a principios de este siglo, el mayor latifundio es de reciente constitución y pertenece a la empresa norteamericana Roberto Silberber Sucesores, con cerca de 40,000 hectáreas de bosques; pero también hay propietarios de origen local, o avecindados de antiguo, como Canuto Reyes, Germán Gómez, Hernán Ludwig, Gavino y Andrés Pino y Eloísa García, condueños de 31,722 hectáreas; existe también en la costa una enorme concesión silvícola de 150 000

hectáreas, de la que es beneficiaria la Guerrero Land and Timber Co. que abarca partes de Tecpan, Atoyac y Coyuca.

Aunque los españoles Uruñuela, Alzuyeta y Fernández tienen hatos ganaderos —de los que explotan la carne y el cuero— y siembran algodón para sus fábricas textiles de Atoyac y de Aguas Blancas, el sistema agrícola dominante en Guerrero no es la hacienda que produce por cuenta del propietario, sino la distribución del latifundio entre pequeños agricultores que pagan una renta fija. Cuando se siembra maíz la cuota es en especie y fluctúa entre la mitad y la tercera parte de una cosecha normal. En el caso del algodón, producto importante en la costa, el sistema de renta se combina con la habilitación a cuenta de cosecha.

En Guerrero el latifundio no agravia a los campesinos debido al peonaje acasillado o al enganchamiento forzoso, sino por el cobro de rentas y el acaparamiento de cosechas; férreos mecanismos por los que el pequeño productor trabaja por cuenta del terrateniente-habilitador-comprador, pero corre con todos los riesgos agrícolas. A estas exacciones se suman las cargas impositivas, que abonan la indignación popular contra las autoridades locales, estatales y federales. Particularmente odiosa fue la capitación; impuesto personal de 12.5 centavos mensuales cobrado por las alcaldías, las que a su vez tenían que entregar anualmente una cuota de 4 000 pesos¹⁶. Sin duda algo tuvo que ver con el estallido de la revolución el que en 1908 Damián Flores, último gobernador porfirista, elevara la capitación de 12.5 a 25 centavos.

Capítulo segundo

Los pequeños caciques de la Revolución

Muchas familias de la Costa Grande y Costa Chica se fueron a refugiar [en Acapulco] huyendo de la interminable guerra de caudillos y caudillitos locales: los de Julián Blanco contra los de Mariscal; los de Pérez Vargas contra los de Gatica; los de Villegas contra Tomás Gómez; los del Ciruelo contra los del Tejón de la Cinta Baya, y los de Valente de la Cruz contra los de Pantaleón Añorve y Enrique Domínguez.

Todos eran generales, todos tenían sus propios regimientos y batallones y todos peleaban contra todos.

Luz de Guadalupe Joseph,
En el viejo Acapulco

EL NUEVO SIGLO SE INICIA EN GUERRERO en medio de oposiciones electorales suprimidas que conducen a alzamientos armados y terminan en sangrienta represión. Para 1904 se ha restablecido la calma, y pese al desfile de gobernadores provisionales o interinos, las pugnas por el poder no pasan a mayores. Sin embargo, a partir de 1907 se presentan en el país tres años agrícolas desastrosos, y aunque las cosechas guerrerenses no se pierden, el acopio forzoso que realiza el gobierno genera escasez y es recibido con hostilidad. Descontento que se agrava en 1908 por la dupli-

cación del impuesto personal. Así, al final de la década, el proselitismo antirreeleccionista no sólo es bien acogido por los regionalistas guerrerenses, tradicionalmente opuestos al centralismo de Porfirio Díaz, también encuentra el terreno abonado por un profundo descontento popular, en donde las injurias coyunturales se suman a los agravios históricos.

Como antes las guerras de la Independencia, de la Reforma y contra la Intervención, la Revolución será propicia para el caudillismo. Aunque también abrirá paso al combate contra añejas injusticias sociales. En la insurgencia guerrerense de la segunda década del siglo se ratifica la tradicional proclividad del liderazgo político-militar a institucionalizarse y acumular poder económico. Pero no todo se repite: los caciques de nuevo cuño ya no provienen de la vieja oligarquía terrateniente, sino de los rancheros y otras capas medias, y por vez primera emergen también y con sorprendente vigor, reivindicaciones y liderazgos propiamente campesinos.

Tres bandos destacan durante la revolución en el paisaje político del estado: el maderista-constitucionalista encabezado por Julián Blanco, pero sobre todo por los hermanos Ambrosio, Francisco y Rómulo Figueroa, cuyas bases están en el centro y el norte; el zapatismo, representado por Jesús H. Salgado y numerosos líderes locales, cuyo principal apoyo se encuentra en la Tierra Caliente, y una fuerza regional de base costeña y políticamente acomodaticia, que será sucesivamente maderista, huertista y carrancista, sin rechazar circunstanciales alianzas con el zapatismo. El atoyaquense Silvestre Mariscal es forjador y cabeza de esta última corriente y su predominio indisputado sobre la costa durante

toda una década marcará profundamente la historia ulterior de esa región.

LOS MADERISTAS GUERRERENSES SON TARDOS en alzarse, y la insurrección se inicia ahí hasta fines de febrero de 1911, pero en menos de tres meses toman las principales plazas e instalan a Francisco Figueroa en el palacio de gobierno. En un artículo publicado en *El País* el flamante gobernador provisional —maestro normalista e ideólogo de una familia de rancheros de Huitzucó metidos a revolucionarios— enuncia las principales reivindicaciones de la reciente insurrección: comicios democráticos, candidatos oriundos del estado, no reelección, efectiva división de poderes, supresión de las prefecturas, libertad municipal y reducción de las excesivas contribuciones y en especial de la capitación. Al nítido trazo de una revolución puramente política, hay que agregar el fuerte componente de regionalismo que aparece sin embozos en el informe de gobierno del 15 de noviembre de 1911, cuando Figueroa explica el alzamiento como una lucha de “los hijos del estado [por] el lugar que en política les habían usurpado los fuereños [...] Guerrero para los guerrerenses, ha dicho con orgullo la Revolución”¹⁷.

Consecuente con su planteamiento de reformar las instituciones, Figueroa decreta la abolición de las prefecturas, estableciendo la libertad municipal, y cancela la capitación. Se dispone, también, a organizar los comicios para gobernador y diputados locales, llamando a realizar “elecciones con [...] amplia libertad política, nunca disfrutada en nuestro Es-

tado”¹⁸. Todo marcha sobre caballo de hacienda, hasta que el candidato de los Figueroa a la gubernatura pierde, por escaso margen, frente a José Inocente Lugo, quien ocupa el cargo con el beneplácito de la federación y la indignación de los revolucionarios de Huitzucó. Airados, los Figueroa protestan ante Madero por lo que les parece la intención de “quitar(les) las consideraciones que se han ganado”¹⁹.

La rauda instauración de la democracia formal mediante una breve y relativamente incruenta revolución política, se muestra pronto como lo que en verdad es: fugaz espejismo ideológico y cortina de humo para que un grupo político emergente se haga del poder. Para mediados de 1911 el nuevo orden hace agua por todas partes, pues además de las crecientes tensiones entre Lugo y los Figueroa —quienes a través de Ambrosio conservan la jefatura militar— pronto irrumpe la incontenible revolución social, esgrimiendo banderas agraristas, y casi al mismo tiempo se desata el movimiento regionalista costeño liderado por Silvestre Mariscal.

El desdoblamiento de la revolución en un ala radical y otra moderada, se formaliza en julio de 1911 con la proclama del Plan de Ayala, que sella la ruptura de Emiliano Zapata con Francisco I. Madero. Casi al mismo tiempo, en Tierra Caliente, Jesús H. Salgado se deslinda del maderismo guerrerense representado por los Figueroa y anuncia que la revolución continuará pues sus causas profundas no han desaparecido: “Fuimos al campo de lucha para destruir el cacicazgo odioso que pisoteaba la ley (y) ultrajaba a los ciudadanos. [Además] los despojados de sus terrenos no han vuelto a recobrarlos, a pesar de que así se los ofreció el Plan de San Luis Potosí”²⁰.

De fines de 1911 a mediados de 1915, el zapatismo se gana a pulso la preponderancia social, política y militar, en vastas regiones del sur, que comprenden Morelos y Guerrero, así como partes de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México. En Guerrero, los calzonudos de Salgado se adueñan del terreno, ocasionalmente en confluencia con las columnas morelenses del propio Zapata. Los flujos y reflujos del proceso están acotados por las coyunturas nacionales y llevan el ritmo de los ciclos agrícolas, pues los ejércitos campesinos se desmovilizan parcialmente en las temporadas de siembra y en las de cosecha. La ofensiva zapatista de 1912 se interrumpe en marzo —por razones agrícolas— para reanudarse a fin de año y profundizarse durante casi todo 1913, cuando, tras el golpe de Victoriano Huerta, Figueroa y Julián Blanco se afilian al Plan de Guadalupe y convergen con el zapatista Salgado en la lucha contra la dictadura.

En dos años de combates los campos se deslindan, la voluntad de cambio social gana adeptos y el espectro político de las fuerzas revolucionarias se corre a la izquierda. Así, tras la toma de Chilpancingo en marzo de 1914, Salgado es nombrado gobernador provisional y el zapatismo, ahora hegemónico, se dispone a formalizar las reformas que antes comenzara a materializar sobre la marcha y a punta de máuser: suspensión del pago de la renta de la tierra y del alquiler de yuntas, autorización a los campesinos sin parcela para sembrar en terrenos federales baldíos y en latifundios ganaderos, confiscación e incautación de haciendas cuyos propietarios se opongan activamente a la revolución, supresión de las prefecturas políticas y remoción de los alcaldes impuestos por el cacicazgo conservador durante el

huertismo. Por un tiempo, hasta que la alianza local entre el Plan de Ayala y el de Guadalupe se rompe, todo Guerrero es zapatista. Todo, menos la Costa Grande, donde domina Silvestre G. Mariscal, y donde el alzamiento, lejos de arraigar como revolución social, va derivando cada vez más en simple bola personalista.

PROFESOR DE BANQUILLO, TENEDOR DE LIBROS de una casa comercial de Acapulco, director de la escuela primaria de Atoyac y administrador de correos de la misma población, Silvestre González Mariscal pertenece a esa pequeña burguesía rural, ilustrada pero modesta, cuyo ascenso social en tiempos de paz dependen de los servicios que sepa y quiera prestar a los verdaderos dueños de la riqueza. Al parecer a Mariscal no le iba del todo mal: el que fuera su patrón en Acapulco, Manuel Bello, era dueño de la fábrica textil La Perseverancia, de Atoyac, y hombre importante en el municipio; mientras que su tío, Inés O. Mariscal, había sido alcalde en 1894. Pero el paso más firme en su ascenso social es el matrimonio con Eloísa García, originaria de Tecpan y dueña, junto con otros cuatro copropietarios, de un latifundio de más de treinta mil hectáreas. Y en eso estaba el ya cuarentón don Silvestre, cuando se le atraviesa la revolución.

En abril de 1911, con el eco retrasado del Plan de San Luis, se alza en la Costa Grande un puñado de maderistas: Pablo Vargas, que era ranchero de Aguas Blancas y contaba con apoyo en el municipio de Coyuca; Tomás Gómez, originario de San Jerónimo y empleado de los Fernández, dueños

de la hacienda del lugar; Silvestre Mariscal, director de la escuela de Atoyac y terrateniente consorte y, como jefe reconocido de antemano por Madero —aunque en realidad no toma las armas—, Manuel Soberanis, de familia terrateniente y ganadera. En diez días los insurrectos ocupan todos los pueblos importantes, desde San Luis-San Pedro hasta Coyuca, y se suman al asedio y toma de Acapulco.

Ninguno de estos líderes improvisados alienta ideas de reforma social. Al contrario, casi todos poseen nexos más o menos estrechos con las familias pudientes de la región. En cambio sus seguidores, los pobres y humillados de siempre, no tienen compromiso alguno con el orden establecido y aprovechan la ocasión para cobrarse ofensas y agravios. En los primeros momentos la insurrección adopta la forma de *jacquerie*: en Atoyac la turba saquea la fábrica de El Ticuí, asalta dos tiendas y mata al comerciante Gonzalo García; en Aguas Blancas los exaltados fusilan al alcalde; en Tecpan, el pueblo amotinado saquea los comercios. Como escribe un testigo presencial desafecto a los alzados: “Era muy natural que se encendiera en sus negras almas de indígenas ignorantes, una sed rabiosa de venganza que ningún principio moral podía refrenar”²¹.

Alarmada por los saqueos, la clase propietaria regional ofrece dinero a los líderes a cambio de protección. Patrocinado por sus viejos empleadores, Tomás Gómez transforma su guerrilla en brazo armado de los Fernández, y Silvestre Mariscal recibe seis mil pesos de los comerciantes españoles del puerto, a cambio de garantías.

La tensión entre liderazgo popular y compromisos con la oligarquía, acota el espacio político de estos revolucionarios

de ocasión, quienes entre alharacas populistas y real defensa del orden establecido, tratarán de aprovechar el río revuelto para trepar en la escala social. Sin embargo, de todos los alzados de la Costa Grande, Mariscal será el único en consolidarse como caudillo regional, e incluso como figura política estatal, pues de 1915 a 1917 ocupará la gubernatura de Guerrero.

Sólo que el prospecto de caudillo no es finquero — como sí lo habían sido sus antecesores decimonónicos, los Galeana y los Álvarez— y para formar su ejército carece de mozos que convertir en soldados. Además, los pudientes de la costa ya no son patriotas y temerarios como los del siglo anterior y si, como medida de autodefensa, patrocinan a ciertos líderes para que les cuiden las talegas, no simpatizan en lo más mínimo con la Revolución, sobre todo a partir de 1912 cuando el alzamiento empieza a alentar reivindicaciones sociales.

Condicionado por estas circunstancias, el de Mariscal será un cacicazgo de orientación conservadora, que en la práctica impedirá que penetre en la costa el ánimo subversivo del zapatismo. Pero será también un cacicazgo emergente compelido a crear desde cero su propia base social y militar, y para ello resultará indispensable que don Silvestre aderece su discurso político con formulas justicieras y promesas agrarias. Tanto más cuanto las relaciones del líder con los terratenientes se deterioran y las bases mariscalistas impulsan tomas de tierra por su cuenta y riesgo. Y es que, si en un primer momento el alzamiento es justiciera *jacquería*, en cuanto llega la temporada de siembra la revolución deviene espontáneamente agrarista y los campesinos de Atoyac

tumban cercas y hacen milpas en terrenos nacionales ocupados por los ganaderos.

“Muchachos, vamos a la guerra; vamos a pelear hasta derrocar al gobierno [...] vamos a morir por adquirir un pedazo de tierra y nuestra libertad”²², dicen que dijo Mariscal, en una incendiaria arenga casi zapatista. Quizá lo dijo, o quizá no, pero en todo caso la fórmula era demagógica, por venir de un conservador, y a la vez indispensable dado el predicamento en que se movía.

Lo cierto es que los alzados de Atoyac —por primera vez dueños de la situación— no necesitan permiso para tumbar cercas. Como tampoco lo requieren las fuerzas vivas de la zona para desatar contra ellos toda su temerosa furia represiva, encarnada en los mercenarios de Gómez y en los contingentes maderistas. A las primeras de cambio las fuerzas del orden meten a la cárcel a Epifanio Mariscal, hermano y segundo de a bordo de Silvestre, y de inmediato trescientos hombres retoman las armas y se alzan en defensa de los *alambreros* y por la libertad de su dirigente. Todo esto sucede en ausencia de Silvestre, y posiblemente contra su voluntad, pero al ser rebasado por el agrarismo espontáneo, las relaciones del líder con los propietarios lugareños se deterioran y los personeros de la oligarquía tratan, incluso, de matarlo. Un reformista convencido hubiera defendido su causa al pie de las cercas derribadas; Mariscal, en cambio, abandona el terreno, y llevándose a los alzados marcha a Morelos donde los incipientes agraristas de Atoyac tendrán que combatir a los ya programáticos agraristas de Zapata.

A principios de 1912, Mariscal, con el grado de coronel, regresa con sus hombres a la costa dispuesto a recuperar

posiciones. Y al grito de “¡ya llegaron los bandidos, sombrerudos hijos de la tiznada!”²³, ocupa retador la plaza de Atoyac. Tras un enfrentamiento con las tropas del mayor Prefecto Juárez, el líder es llamado a la capital, y una vez más, sus hombres, encabezados por Epifanio, marchan a combatir zapatistas, ahora en Tierra Caliente. Entre tanto, los terratenientes de Tecpan y Atoyac promueven un juicio contra el veleidoso dirigente costero y don Silvestre da con sus huesos en la cárcel.

Pero meter en prisión a los Mariscal es mal negocio, y a los pocos meses Julián Radilla y Juan Salgado se alzan en armas con la bandera de don Silvestre. De septiembre de 1912 a febrero de 1913 la insurrección mariscalista se sostiene y fortalece gracias a la simpatía de la población. Apoyo abonado por los saqueos y masacres de civiles que realiza en Atoyac el ejército federal y que dan lugar a una suerte de “lucha de liberación regional” contra el “invasor extranjero”. El informe militar del capitán Ignacio M. Ruiz es una penetrante descripción de este sentimiento:

La persecución emprendida contra los alambros de Atoyac [...] la prisión de [...] Mariscal [...] el amor propio de una comunidad de indígenas [...] que miraba su territorio invadido por una fuerza extraña que los perseguía con tenacidad en sus propios lares [...] era muy natural que encendiera [...] una sed rabiosa de venganza²⁴.

En ausencia de Mariscal, la rebelión, sustentada en los alambros y contrapuesta a la oligarquía terrateniente, co-

bra un sesgo popular, establece alianzas con el zapatismo de Tierra Caliente y libera de federales las plazas de Tecpan, Atoyac, San Jerónimo y Coyuca. Finalmente, para aplacar los ánimos costeños, la federación tiene que excarcelar al líder. Mariscal llega a Atoyac el 15 de febrero de 1913, justo a tiempo para afiliarse su movimiento a la causa golpista de Victoriano Huerta. Rompe con ello la efímera alianza con los zapatistas, hombres de principios que lejos de coquetear con el enemigo de su enemigo, se deslindan tajantemente del usurpador.

El golpe militar deriva en drásticos reacomodos políticos. El bloque maderista, en el que se agrupaban todas las fuerzas opuestas al zapatismo, se fractura, y mientras los líderes más conservadores apoyan a Huerta, Julián Blanco y los Figueroa desconocen al infidente. En el otro bando se rompe la efímera alianza entre los costeños encabezados por Radilla y los calentanos de Salgado, y mientras los mariscalistas apoyan al dictador, los zapatistas lo repudian. Como era de esperar, dada la nueva coyuntura, los guerrerenses seguidores del Plan de Ayala y los adeptos al Plan de Guadalupe convergen en una alianza antihuertista. Unidad de acción que culminará con la toma campesina de Chilpancingo y con el gobierno provisional de Salgado, para romperse cuando el carrancismo, victorioso y enrachado, oriente sus baterías contra sus circunstanciales aliados zapatistas.

Entre tanto, en la Costa Grande, Mariscal consolida su cacicazgo cobijado por la dictadura. Pero sólo hasta que Huerta comienza a declinar, momento en que el líder costeño toma prudente distancia, evita la confrontación directa con las fuerzas de Julián Blanco, y para abril de 1915 se declara carrancista de hueso colorado.

El vicecónsul norteamericano en Acapulco acierta al definir la catadura política del nuevo caudillo de la costa: "Si bien el General Mariscal está de nombre a favor de Carranza, como ha estado según me consta a favor de Madero y de Huerta, está principalmente a favor de cualquier facción victoriosa que logre hacer un gobierno en la ciudad de México. Entre tanto pretende y ambiciona dominar la situación en este Estado"²⁵.

Tras la derrota del huertismo, los contingentes se reacomodan: Julián Blanco y Silvestre Mariscal coinciden ahora en el bando carrancista y quedan enfrentados al zapatismo. Interesado en sumar fuerzas contra Salgado, don Venustiano no le pone peros a la oportunista adhesión de Mariscal. Más aún, a Blanco lo nombra gobernador provisional y a Silvestre lo hace jefe de operaciones militares. Y es que si un mando único podía ser adecuado para poner orden en Guerrero, con un solo caudillo al frente del estado, el centro corría el riesgo de perder el control, mientras que dividir el poder entre líderes contrapuestos, como Blanco y Mariscal, consolidaba la supremacía del primer jefe en su calidad de fiel de la balanza.

Carranza apuesta a que, en el ríspido Guerrero, tener a dos hombres fuertes es mejor que tener a uno solo. Y efectivamente, el jefe del ejecutivo local y el jefe militar chocan, se enconan, sacan chispas, y el 6 de agosto de 1915 las fuerzas mariscalistas de Acapulco pasan por las armas a Julián Blanco. Por el momento, el gobierno federal se allana al abrupto predominio de Mariscal, permitiéndole sustituir al fusilado por Simón Díaz, un "nuevo gobernador impuesto por mí"²⁶, como dice en sus memorias el franco de don Sil-

vestre. Desde fines de 1915 el líder costeño se transforma en caudillo de todo Guerrero, sin más oposición organizada que la zapatista, que se limita a desarrollar una guerra de resistencia defensiva y poco peligrosa.

Pero si Mariscal se había deshecho de Blanco de mala manera, le esperaba un trato semejante por parte de Carranza. En diciembre de 1917 el líder sureño marcha a la capital acompañado por 600 hombres, al parecer para negociar la jefatura militar de todo el sur. Pero el tiro le sale por la culata, pues la Secretaría de Guerra comisiona su escolta al puerto de Manzanillo y cuando el jefe costeño protesta, lo mete a la cárcel acusado de asalto, secuestro, amenazas de muerte e indisciplina militar... y una vez más, el mariscalismo guerrerense se alza en armas reclamando la libertad de su caudillo.

Así, el año en que se promulga la nueva constitución —y cuando, según los manuales de historia, termina la fase armada de Revolución mexicana— Guerrero está de nueva cuenta insurrecto; pues, además de que los grupos de Julián Radilla y de Silvestre Lastro, seguidores de Mariscal, operan en la costa, al zapatismo le llega su segundo aire y retoma la ofensiva en la zona norte y en la Tierra Caliente. Para Salgado y los suyos la bandera sigue siendo el Plan de Ayala; el emblema de los costeños, en cambio, es un confuso regionalismo que identifica el derecho al autogobierno con la libertad para elegir caudillo. En el contexto del mariscalismo, “Guerrero para los guerrerenses” significa, una vez más y como en el siglo XIX, “Guerrero para los caciques de por acá”.

El envío de fuerzas federales al mando de Fortunato Maycotte, y la brutalidad de los militares fuereños contra

la población civil de la costa, sólo sirven para alimentar el fuego de la insurrección regionalista y, en franca derrota, el jefe federal se ve obligado a evacuar el puerto de Acapulco. "La llegada de las tropas ha permitido a los jefes incitar a los soldados a una rebelión abierta al grito de '¡Mariscal y el estado de Guerrero!'", escribe el siempre certero vicecónsul Edwards, y continúa: "La acción elegida promete lanzar a tropas locales y a mucha gente del estado a la oposición contra el gobierno central"²⁷. El propio Maycotte, en un parte militar, deja constancia del acendrado regionalismo de quienes lo combaten, al transcribir sus consignas: "¡Viva Zapata! ¡Viva el Cirgüelo! ¡Viva Mariscal! ¡Viva la Soberanía del Estado!"²⁸

Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, y lo que no puede lograr el norteco Maycotte lo consigue el guerrerense Rómulo Figueroa, quien transterrado desde 1914 regresa a su estado después de combatir al villismo. La campaña es sangrienta y durante casi todo el año la Costa Grande está en llamas, pues El Cirgüelo es un excelente jefe guerrillero. Pero a la postre se impone la superioridad militar y en octubre Castro tiene que amnistiarse. El 16 de diciembre de 1918 Francisco Figueroa ocupa por segunda vez el cargo de gobernador provisional de Guerrero, mientras que su hermano Rómulo queda como jefe de operaciones militares. El mariscalismo ha sido liquidado y don Silvestre morirá dos años después, paradójicamente, defendiendo a Carranza de los infidentes obregonistas.

El regreso de la familia Figueroa se explica por el desgaste de los líderes y caciques emergentes que permanecen en Guerrero, durante ocho años de enconadas pugnas por la

supremacía político-militar. Al iniciarse la tercera década del siglo, los Figueroa, que habían abandonado el estado en 1914, no sólo son la única fuerza de base regional políticamente beligerante; Rómulo y Francisco son también de los pocos líderes sobrevivientes, pues Julián Blanco había sido fusilado en 1915, a Silvestre Mariscal lo matan en 1920 y el mismo año es asesinado el irreductible zapatista Jesús H. Salgado.

Con Francisco Figueroa regresa el discurso maderista de democracia efectiva y reforma institucional. El reincidente gobernador reglamenta de nueva cuenta la libertad municipal, que ya había decretado en 1911, pero ahora respaldado por el artículo 115 constitucional que a su vez recoge la Ley del Municipio Libre expedida por Carranza el 25 de diciembre de 1914. En la nueva ley se busca “ampliar la esfera de acción de los ayuntamientos de los municipios, dándoles los recursos necesarios para que puedan ser propiamente libres”, señala el gobernador en su primer informe de gobierno. A Figueroa le toca también organizar comicios municipales, y en 1921 la elección del primer gobernador constitucional del estado.

La oportuna afiliación de los Figueroa a la causa de Obregón, en su lucha contra Carranza, y el cobijo que le otorgan al manco de Siquisiva cuando se refugia en Guerrero, fortalecen la confianza de los de Huitzucó en que, ahora sí, han llegado al poder para quedarse. El apoyo de Francisco Figueroa a la candidatura del gris Donaciano López, quien es su secretario de gobierno y fuera ayudante de su hermano Rómulo, expresa la confianza de los Figueroa en su continuidad. Pero Obregón —como antes Carranza y antes

Madero y aún antes Díaz— opta por dividir para vencer, respaldando para gobernador a Rodolfo Neri. El candidato del centro tiene una escasa trayectoria política en Guerrero: apenas ha llegado a juez de distrito, pero en compensación es hijo de su padre —el precursor y general Canuto A. Neri—, y tío de su sobrino —el líder Eduardo Neri, cabeza del poderoso Partido Liberal Constitucionalista (PLC)—. El personero de Obregón gana de calle, y una vez más el estado queda escindido en dos poderes contrapuestos: el mando militar en manos de Rómulo Figueroa, y el político ejercido por Rodolfo Neri.

Esta pugna, que se prolongará por casi tres años para estallar y resolverse a fines de 1923, cuando Rómulo Figueroa se incorpore al fracasado golpe militar delahuertista, es el marco de la primera insurgencia posrevolucionaria de base popular. Y es también la coyuntura por la que los aires de reforma llegan por fin a la Costa Grande, transformando a la zona más conservadora del estado durante la Revolución en sólido bastión del socialismo sureño y asiento privilegiado del agrarismo rojo. Pero esto sucederá en los años veinte, y antes de adentrarnos en ellos debemos tratar de ubicar, en perspectiva, la naturaleza de la revolución costeña.

CONTRA LO QUE PUDIERA PARECER, la insurgencia consciente y programática no es fenómeno generalizado en la segunda década del siglo. Lejos de ser de revolución social, en muchas zonas del país, estos años, son de caos y rapiña. Como reacción, en algunas regiones terminan por imponerse movimientos armados defensivos encabezados por viejos o

nuevos caudillos, con los que la oligarquía — pero también la población humilde — trata de protegerse del vendaval revolucionario.

La convergencia de cacicazgos regionales — como el que da forma a la triple alianza Mixteca-Sierra-Valles Centrales del soberanismo oaxaqueño o el que cohesiona a los ejércitos finqueros que combaten al carrancismo “invasor” en los Valles Centrales y los Altos de Chiapas — se expresa en movimientos con cierto respaldo popular, pero claramente conservadores y encabezados por las oligarquías regionales. Acciones coyunturales cuyo propósito es preservar el orden establecido, y de ser posible aprovechar el río revuelto para aumentar la autonomía de los poderosos locales respecto del gobierno central.

Tiburcio Fernández Ruiz y Alberto Pineda, en Chiapas, como José Inés Dávila, Guillermo Meixueiro y Enrique Breña, en Oaxaca, son miembros destacados de las oligarquías regionales. Los movimientos que encabezan son reaccionarios en sentido estricto: respuestas conservadoras a cambios que los amenazan desde el exterior. En otras regiones los movimientos conservadores no son encabezados directamente por miembros de la clase dominante, sino por elementos provenientes de las capas medias, a veces ligados a la oligarquía, quienes al tiempo que preservan el orden, acumulan poder militar y político, y eventualmente, económico. Cacicazgos revolucionarios de ese corte son el de Manuel Peláez, que empezó como contratista de las compañías petroleras en las huastecas, y el del maestro de primaria Silvestre Mariscal, en la Costa Grande²⁹.

En las regiones donde la revolución da lugar a movimientos reaccionarios encabezados por la oligarquía o a cacicazgos emergentes de naturaleza conservadora, la población vive la lucha armada a la que estos la enrolan como prolongación del orden establecido; como simple extensión, por otros medios, de las previas relaciones de sumisión. Salvo explosiones circunstanciales de tipo *jacquería*, los trabajadores de estas zonas se mantienen ajenos al espíritu de cambio social que va calando en ámbitos más abiertos.

Como hemos visto, tal es el caso de la Costa Grande, que en la segunda década del siglo vive una “revolución” mariscalista cuyo único saldo son tres o cuatro campañas militares de tierra arrasada —que destruyen pueblos y diezman a la población civil— y una radicalización del viejo y acendrado costeñismo: una identidad regional cuyo máximo emblema es el caudillo carismático. El orden y la propiedad permanecen inmutables: si en el porfiriato los que las podían eran Uruñuela, Alzuyeta y Fernández, después de la revolución las pueden Fernández, Uruñuela y Alzuyeta. Salvo saqueos y destrucciones menores, el poder económico está incólume, y al restaurarse la paz emprende el rescate del poder político. No le será fácil, pues en la Costa Grande —como en muchas otras regiones del país— la verdadera revolución comienza al término de la Revolución.

Capítulo tercero

Reformismo radical en los años veinte

A VOTAR COMPAÑEROS

Por fin hoy el pueblo ocurrirá a las casillas
electorales.

Las revoluciones... que han conmovido a nuestra patria han tenido como principio... la falta de respeto para la soberana voluntad ejercida con el voto... Por eso antes ya nadie ocurría a las urnas. Vayamos pues serenamente a cumplir con este deber, sin temores de que la votación pueda cambiarse [pues] los representantes de los partidos y candidatos vigilarán el recuento de votos.

Juan Escudero, *Regeneración*,
2 de julio de 1922

Los sacaron de su casa,
su madre lloraba triste
y en el llanto ella decía:
al que siento es a Felipe.

Corrido del fusilamiento
de los hermanos Juan, Francisco
y Felipe Escudero

EN GUERRERO —como en Michoacán, Veracruz o Yucatán— el arranque de la tercera década del siglo es tiempo de efervescencia social y radicalización política.

Paradójicamente, en muchas regiones del país, durante la temprana posrevolución no se atemperan los ánimos ni se repliegan los contingentes populares. Al contrario, concluida la lucha armada y establecido un gobierno moderado, se desata una verdadera fiebre de organización gremial. Una calentura societaria que prende tanto dentro como fuera del grupo en el poder y se despliega igual en el campo que en la ciudad. Si algunos agrupamientos resultan de iniciativas verticales y prefiguran el corporativismo a la mexicana, otros nacen —o se hacen— luchones y democráticos.

Los nuevos sindicatos y ligas agrarias asumen que la revolución ha terminado; ni siquiera los más independientes y enconados se plantean la lucha inmediata por el poder. Son, en este sentido, abiertamente reformistas. Pero con frecuencia su ideología y proyecto resultan de mayor radicalidad que los programas revolucionarios más avanzados de la década anterior. En lo tocante al campesinado, por ejemplo, el agrarismo rojo es una suerte de zapatismo gremial, propio de tiempos de paz, cuya estrategia socialista no le impide negociar con el nuevo Estado el carácter, dirección y alcance de la reforma agraria en curso. Estas fuerzas sociales incursionan también en la política electoral, creando partidos regionales o utilizando los existentes, y es común que los líderes sindicales o agrarios contiendan por alcaldías y diputaciones.

Esta confusa y abigarrada marea de reformismo avanzado y democracia popular, se beneficia de las debilidades del nuevo Estado. La rebatinga por el mando en la incipiente clase gobernante propicia la consolidación de fuerzas populares, ubicadas políticamente a la izquierda del grupo en el poder. Así sucede durante el alzamiento delahuertista, por el que Obregón se ve forzado a convocar, de nueva cuenta, el respaldo popular armado. Promete, a cambio, una política de reformas más avanzada y concede, así sea provisoriamente, ciertos espacios de poder regional.

En Guerrero, aprovechando la debilidad política del gobernador Rodolfo Neri y sus pugnas con Rómulo Figueroa, jefe de la zona militar, surgen numerosas organizaciones campesinas y obreras de carácter gremial. En la Costa Grande, donde se da la mayor efervescencia organizativa, se constituye, también, un aparato político que engloba y representa a los agrupamientos sociales del campo y la ciudad, el Partido Obrero de Acapulco (POA), cuya influencia se extiende por toda la costa y tiene “sucursales” en los municipios de Coyuca, Tecpan y otros.

El más destacado luchador social de la inmediata posrevolución, y fundador del POA, es el porteño Juan Ranulfo Escudero, quien había iniciado el trabajo organizativo regional en 1911, suspendiéndolo dos años después por el acoso mariscalista, para reanudarlo en 1919.

Como Primo Tapia en Michoacán, Úrsulo Galván en Veracruz y Carrillo Puerto en Yucatán, Escudero es un revolucionario de la posrevolución; un líder de pensamiento radical que actúa en coyunturas reformistas. La columna vertebral de la organización que funda no es un ejército,

sino comités agrarios, sindicatos, cooperativas y un partido regional; una estructura que incluye tanto a los organismos gremiales y económicos como a sus aparatos políticos, y que fue muy socorrida en los años previos a la formación del partido nacional de la revolución institucionalizada.

El POA de Escudero es un acuerpamiento combativo, incorruptible, de fuerte arraigo popular y con una ideología de avanzada donde se entreveran reminiscencias magonistas y conceptos provenientes del socialismo. Pero es también defensor ferviente del presidente Obregón y del gobernador Neri; se orienta preponderantemente a la lucha electoral, con vistas a ocupar puestos de representación, y su programa consiste en una serie de reivindicaciones agrarias, laborales y de servicios, concretas y tangibles. En la jerga izquierdista que se acuñaría poco después, el partido de Escudero resulta sospechosamente gobiernista, electorero y reformista. Pero quizá precisamente por ello, en menos de tres años puede convertirse en la mayor fuerza organizada de la costa y transformar radicalmente el perfil político de la región.

A través de su periódico *Regeneración*, Escudero había tomado partido por Obregón contra Bonillas, y poco después el incipiente POA se estrena políticamente aliándose con el Partido Liberal Constitucionalista Costeño (PLCC) —sucursal del obregonista PLC nacional— para apoyar las candidaturas de Neri a la gubernatura y de Escudero a la diputación local. Ambos vencen en los comicios de 1920, y en los años siguientes la marea electoral del POA no deja de ascender. Para 1923 los candidatos del partido ocupan prácticamente todos los puestos de elección popular, desde Acapulco hasta La Unión.

“Por fortuna, nuestro pueblo empieza a darse cuenta de lo que es el derecho de voto conferido por la Constitución, como medio pacífico de nombrar a sus representantes”, sostiene un artículo publicado en el número 100 del periódico *Regeneración* el 9 de julio de 1922. Y esta toma de conciencia constituye una auténtica revolución, en una zona y una entidad federativa estragadas por la cultura política del cacicazgo.

En 1920 Escudero gana por el POA la diputación local de Acapulco y en el mismo año contiene por la alcaldía del puerto con Juan H. Luz, candidato de la oligarquía comercial. También en los segundos comicios vence el POA, aunque la población tiene que defender el voto a garrotazos, pues la junta computadora, respaldada por la fuerza pública, trata de escamotearle el triunfo. La gestión de Escudero, interrumpida un par de veces por detenciones arbitrarias, supone una profunda renovación municipal, pues antes la comuna era un simple cascarón cuyas funciones administrativas y de seguridad servían únicamente a la oligarquía local. Mario Gil describe el dramático contraste:

La comuna acapulqueña no existía en realidad, había sido hasta entonces un instrumento de dominio de los gachupines, no había normas ni bando de policía ni policía, (pues la que existía era un grupo armado pagado por los españoles), los impuestos se fijaban caprichosamente, no había tesorero, los funcionarios del ayuntamiento no percibían sueldos; en fin, era un verdadero caos, organizado en beneficio de los amos del

Puerto. [Escudero] fijó sueldos de cinco pesos a los regidores y de ocho al presidente municipal; nombró policía pagada por el ayuntamiento, designó a su hermano Felipe, Tesorero municipal, para lo cual exigió una fianza que garantizara sus manejos. Redujo los cobros que se hacían en el mercado [...], creó las juntas municipales para evitar a los residentes de los pueblos el hacer viajes a la cabecera para tratar sus asuntos, emprendió una batida contra la insalubridad³⁰.

Además, en el bando de buen gobierno y policía que da a conocer la nueva comuna, se programan actividades de fomento, como “talleres para elaborar objetos baratos”, “cooperativas de explotación y consumo”, “colonias agrícolas”, y la demanda estratégica: “hacer las gestiones para que se abra una carretera de México a Acapulco”³¹. Una cuestión final, pero no menos importante, en 1923, con el POA en la alcaldía, *Regeneración* comienza a publicar sistemáticamente los informes de ingresos y egresos municipales.

En ese tiempo el ejercicio del cabildo era de sólo un año, de modo que a fines de 1921 otra vez hay elecciones, y de nuevo vence Escudero. El acoso de las fuerzas vivas sobre el reincidente se radicaliza; en marzo de 1922 Juan salva la vida milagrosamente, en un atentado que lo deja sin un brazo, con medio cuerpo paralizado y casi mudo. Vano intento de la oligarquía, pues en las elecciones de fin de año para el ejercicio de 1923, Escudero es electo de nuevo y toma posesión en silla de ruedas.

Entre tanto, la organización se extiende por toda la Costa Grande: en Coyuca y en Tecpan surgen partidos obreros a

imagen y semejanza del POA, y también en Atoyac y en La Unión hay grupos de militantes. Así, en las elecciones municipales de diciembre de 1922, no solamente gana Escudero en Acapulco; también triunfa Amadeo Vidales, por el Partido Obrero de Tecpan; el simpatizante escuderista Andrés G. Galeana, en Atoyac, y Rosendo Cárdenas por el Partido Obrero de Coyuca. Valente de la Cruz, que había competido para diputado federal, al parecer también gana la elección, pero le escamotean el triunfo.

Paralelamente, y cobijado por la política agrarista de Neri, el POA impulsa la lucha por la tierra: difunde la ley agraria, forma comités de solicitantes, asesora la gestión, y en algunos casos promueve la acción directa: Vidales, alcalde de Tecpan, autoriza a los campesinos a sembrar terrenos federales ocupados por los ganaderos, reeditando la efímera experiencia de los alambrreros de Atoyac, doce años antes. Se impulsan, también, proyectos de desarrollo regional, como el ambicioso sistema de riego, aprovechando los ríos San Luis, Tecpan, Atoyac y Coyuca, que promueve Valente de la Cruz³².

Urgido de base social y contrapunteando con el jefe de operaciones militares, el gobernador deja hacer y si no ayuda, tampoco estorba.

Por un tiempo las relaciones sociales imperantes en la región parecen haber cambiado milagrosamente. Comienzan a operar reglas inéditas en el juego político: los trabajadores gozan de libertad para organizarse en gremios, la ciudadanía milita multitudinariamente en partidos políticos y participa en concurridas elecciones con programas y candidatos propios, y por primera vez el liderazgo político

social de las mayorías proviene, en casi todos los casos, de sus propias filas.

Se trata, sin embargo, de una ilusión fugaz. Presionada por un movimiento agrarista, laboral y cívico, que no sólo cuestiona su añeja prepotencia económica sino que también le disputa el poder político, la oligarquía se defiende. Obligados a competir en comicios que antes ganaban sin oposición, los politiquillos locales se hacen mañosos: en una circular firmada por miembros del caciquil ayuntamiento saliente de Coyuca, se llama a votar por “Andrés Pino [que] ayudará al pueblo a reorganizar su banda de música regalando los instrumentos”. En Tecpan los candidatos del cacicazgo regalan “pañuelitos de a dos reales y sombreros de palma”, y a la hora de votar “no llegan a instalar las mesas [...] las autoridades compradas, dizque porque no hubo con quienes [...]”, o si llegan las “arrebatan [...] instalándolas por su cuenta”. Denuncias provenientes de los artículos “Hablando de las elecciones” y “Siguiendo las huellas de la elección”, publicados en *Regeneración* el 9 y el 30 de julio de 1922³³.

En el mismo periódico, el POA, que había impulsado con entusiasmo la lucha comicial, se lamenta de la creciente tendencia al fraude:

[...] después de tantos años de guerra intestina [...] sosteniéndose la defenza [sic] del SUFRAGIO EFECTIVO, sería sembrar el desprestigio de nuestros gobernantes, ante propios y extraños, si, por imposición de partidos, burlándose esa VOLUNTAD POPULAR, se colocara como representantes a individuos que no hayan obtenido la mayoría de votos³⁴.

Pero el intento de comprar conciencias durante las campañas, las irregularidades en la votación, la manipulación del recuento y el desconocimiento de resultados por el Congreso estatal, no son suficientes para aplacar al escuderismo, de modo que en 1923 las fuerzas vivas, apoyándose en el jefe de la zona militar, desatan una feroz campaña represiva tendiente a liquidar las *alcaldías* populares y a desmembrar al movimiento costeño.

Encabezados por el jefe militar de la plaza de Acapulco —el mayor Juan S. Flores, responsable del atentado contra Escudero— los soldados federales apoyados por las defensas sociales al mando de Ramón Solís, se lanzan a desmantelar las comunas democráticas y a encarcelar y matar dirigentes. Cae, así, el alcalde de Atoyac, Andrés G. Galeana; es destituido y encarcelado Amadeo Vidales, presidente municipal de Tecpan; en Atoyac son asesinados Pablo y Simón Hernández; en San Luis y anexas matan a Francisco Mendoza y a Fidel Agüero; en El Humo sacrifican a Santiago Merinos, en Petatlán a Luis Lluck, en San Jerónimo a Justino Piedra... Acosado por las “guardias blancas” de Ramón Solís, Valente de la Cruz tiene que remontarse:

El día 18 [de marzo de 1923] se hizo insoportable la tiranía, y por la noche salí de mi hogar protegido por el Partido Obrero, que se puso en pie de guerra armándose como pudieron [...] pues el enemigo ya se dirigía a atacarme³⁵.

Por el momento, De la Cruz no se alza en armas sino que trata de entrevistarse con el presidente de la Repú-

blica en la Ciudad de México. Su intento fracasa. Como fracasan todas las apelaciones del POA a Obregón, quien por única respuesta les dice que la persecución y los asesinatos “son delitos del orden común que deben tratar con autoridades locales”³⁶.

Pero si los de Tecpan se remontan sin alzarse, en Atoyac sí surge una guerrilla de autodefensa. No es para menos: el 8 de julio de 1923 un grupo de agraristas del municipio había formado la Liga Local Campesina, presidida por Manuel Téllez y David Flores Reynada; cuatro meses después policías a las órdenes del alcalde Rosalío Radilla, que había depuesto al electo Andrés G. Galeana, asesinan a Manuel Téllez. En pocos días su hermano Alberto, apoyado por Feliciano Radilla, Pilar Hernández y otros agraristas, logra reunir alrededor de 200 hombres, “mal armados si se quiere pero elementos fogueados en la lucha social y en las armas”³⁷. Sintomáticamente, a la guerrilla agrarista nacida en Atoyac se suman los contados zapatistas de la región, como Pedro Cabañas —hermano del general Pablo Cabañas, que había operado en Michoacán— y poco después, en enero de 1924, se incorpora Silvestre Castro *El Cirguelo*, brillante jefe militar mariscalista.

La convicción de que había que pasar de la acción política y el trámite agrario a la lucha armada, o cuando menos que era necesario proteger a las organizaciones pacíficas y a sus gestiones legales con el poder disuasorio del máuser, no nace sólo en la costa. En otras regiones del estado, el acoso del ejército y de las guardias blancas lleva a los solicitantes de tierra a la misma conclusión, que se expresa en el primer Congreso Campesino de Guerrero, realizado en Iguala a

partir del 11 de enero de 1923. En la reunión se decide constituir la Liga de Comunidades Agrarias del estado, pero ante las abundantes denuncias de represión, no faltan propuestas como la siguiente: "Es necesario que todos y cada uno de los agraristas se compren un rifle, que deben cuidar más que a su mujer, sus hijos y aun que su propia madre, porque con él [...] se harán respetar contra el poder de los ricos"³⁸. La corta primavera civilista costeña ha durado menos de dos años. En 1923 la represión promovida por la oligarquía y ejecutada por el ejército y las guardias blancas, amenaza con transformar la lucha reivindicativa pacífica y la contienda electoral, en un nuevo combate guerrillero. La intransigencia conservadora ratifica a los luchadores populares en la ancestral convicción de que "el poder nace del fusil", y quien controla las armas controla también la sociedad y la política.

En el plano nacional el golpe delahuertista de diciembre de 1923 comparte esta idea: se la juega al apoyo del generalato y de numerosas jefaturas militares, entre ellas la de Guerrero. La apuesta no es descabellada, y al comienzo, la balanza se inclina a favor de los alzados. En Guerrero el gobernador Rodolfo Neri tiene que salir por piernas, y se habría quedado completamente solo si los radicales vinculados con el POA no hubieran optado por respaldar a Obregón. Decisión que lleva a las incipientes guerrillas de Autodefensa de la subversión a la institucionalidad, pues al refugiarse el gobernador entre los agraristas armados, Vidales, Radilla, De la Cruz y sus compañeros, devienen flamantes defensores del orden y pilares del régimen establecido.

A la derrota de los delahuertistas, las fuerzas irregulares, que habían inclinado la balanza a favor del régimen, le pasan la cuenta. En estados como Veracruz, Michoacán o Guerrero, entre otros, los movimientos agraristas radicales, que poco antes estaban en la oposición extrema y hasta en la ilegalidad, pero que habían elegido jugársela con el régimen establecido y contra los militares, quedan dueños de importantes espacios políticos y sociales.

En Guerrero hay que lamentar la segunda y definitiva muerte de Escudero, en las primeras horas de la insurrección, pero los demás líderes del POA regresan de la campaña como vencedores y al frente de grupos campesinos armados. Valente de la Cruz —después de un corto paréntesis como burócrata en Acapulco— reanuda su acción política civilista, y en 1925 llega a la Presidencia municipal de Tecpan, de donde un año antes había tenido que escapar a salto de mata. Desaparecido Escudero, la figura más destacada del POA y del agrarismo costeño es Amadeo Vidales, ahora flamante general de brigada, quien impulsa la creación de la Sociedad Cooperativa Agrícola, Unión de Ambas Costas, en la zona de La Sabana y sobre terrenos que habían sido de las haciendas La Unión y El Mirador.

La cooperativa, una “colonia agrícola militar” formada por los que habían combatido a las órdenes de Vidales, es cristalización y símbolo de un concepto del poder, perverso pero pragmático, y legitimado por la historia regional, tanto la más remota como la reciente. Después del frustrado golpe delahuertista, el incipiente liderazgo cívico-gremial de los años anteriores, retomado ahora por Vidales, se va transformando paulatinamente en un caudillismo de base

económico-militar, que recuerda al de Juan y Diego Álvarez. Como los hacendados decimonónicos, Amadeo Vidales sustenta su poder en un pequeño ejército territorializado —o hacienda militarizada— y en su jefatura se combinan las condiciones de general y gerente, representante gremial agrarista y líder político del POA, patriarca regional y mediador con el centro.

Las colonias agrícolas militares no son exclusivas de Guerrero; en Chihuahua fueron la fórmula elegida por Villa para pacificarse y en San Luis Potosí se convirtieron en el sustento socioeconómico y político-militar del poderoso cacicazgo cedillista. En ellas se reproduce la lógica de los ejércitos revolucionarios campesinos: el poder radica en el máuser y las transformaciones agrarias deben hacerse —y sostenerse— con las armas en la mano. Pero al prolongarse e institucionalizarse, reglas de juego que pudieron ser legítimas durante la etapa armada, se pervierten, transformándose en sustento de cacicazgos posrevolucionarios más o menos populistas.

ASÍ COMO EL FRACASADO GOLPE de los militares favorece al movimiento popular —pues Rómulo Figueroa, principal respaldo de la oligarquía, se defenestra políticamente al afiliarse al delahuertismo— también la rebatinga entre agrupaciones políticas nacionales beneficia a las organizaciones sociales guerrerenses. Desde 1921 el PLC de Eduardo Neri se distancia de Obregón y pierde posiciones frente al Partido Cooperativista Nacional (PCN) que encabeza Prieto Laurens. En Guerrero esto se refleja en el debili-

tamiento del gobernador, cuyo derecho a nombrar sucesor se pone en duda. El candidato de Neri es Héctor F. López, compañero de camada política y hombre de su plena confianza, pero el plan continuista está a punto de frustrarse por la oposición del centro, y también por las maniobras de un grupo de diputados traidores que habían pactado reelegirse”, impidiendo que para los comicios de 1924 “la legislatura estuviera formada por hombres LEALES que supieran hacer honor a su obligación”, según una carta del diputado nerista Héctor F. López³⁹.

Además de poner en evidencia un concepto patrimonial de la gubernatura, así como una visión instrumental y subordinada del “poder” legislativo, estas preocupaciones indican que el nerismo dependía cada vez más de sus apoyos locales; ya no sólo frente a Figueroa sino también para capotear su pérdida de respaldo nacional. A la postre, y posiblemente preocupado por la amenaza delahuertista, Obregón apoya a Neri contra los diputados cooperativistas que tratan de deponerlo en febrero de 1923; en la misma tónica en 1924 da el visto bueno a la candidatura de Héctor F. López. No sorprende, pues, que éste gane las elecciones, y en abril de 1925 tome posesión de la gubernatura.

Sí sorprende, en cambio, que el hombre que representa la continuidad política, hostilice casi de inmediato a las fuerzas agraristas, sustento de su antecesor, y que lo haga a menos de un año de que estas mismas fuerzas se hubiesen legitimado como “heroicas” defensoras de las instituciones.

Aunque en verdad no hay de qué extrañarse, la postura del gobierno de Obregón frente a los agraristas es fluctuante hasta el rubor, pero no caprichosa sino pragmática

y oportunista. Para 1922, después de dos años de euforia reformista durante los cuales se institucionaliza y aplaca a los rescoldos del zapatismo, Obregón comienza a meter freno, y entre otras cosas exceptúa del reparto las tierras con cultivos de plantación e invalida las solicitudes ejidales de los peones acasillados. Sin embargo, apenas unos meses después, a fines de 1923, el gobierno está urgido de apoyos sociales y tiene que abanicar de nueva cuenta las brasas del agrarismo.

La circular de la Comisión Nacional Agraria (CNA) de Diciembre de 1923, hace un llamamiento a todos los pueblos y los trabajadores aún esclavizados en las haciendas para que cooperen al triunfo definitivo de nuestra causa organizándose sin pérdida de tiempo en grupos regionales armados y tomando posesión inmediata y definitiva de sus ejidos.

Esta consigna incendiaria, por la que la lucha contra De la Huerta se transforma en acción directa agrarista, es flor de un día. Obregón, ya seguro del triunfo contra los sublevados, desautoriza la circular, ordena quemar el tiro de imprenta y destituye a Mendoza López (titular de la CNA) que “la había hecho llegar clandestinamente a los campesinos”⁴⁰.

En Guerrero sucede algo semejante: apenas se han rendido los últimos delahuertistas, cuando el general Rafael Sánchez ya está tratando de desarmar a los agraristas costeños —con pobres resultados, por cierto— y a mediados de 1925 el nuevo gobernador se lanza abiertamente contra los supuestos excesos de la reforma agraria. En particular contra el notable poder político que han adquirido en la costa los líderes agraristas del POA. El primer informe de gobierno

de Héctor H. López, rendido en septiembre, deja constancia de que en 1925 se está reeditando el incendiario encono social de 1923:

Grupos de llamados agraristas, azuzados por políticos que tenían interés en provocar un estado latente de agitación en la entidad para satisfacer sus bastardas intenciones, depusieron [...] ayuntamientos legalmente constituidos [...] El mismo mes [...] quedaron reinstalados los [...] legítimos [...], habiendo sido necesario para el efecto el uso de medidas enérgicas de represión⁴¹.

Esto sucedía en Tierra Caliente. En cuanto a la Costa Grande, el informe da cuenta de una acción del ejecutivo estatal, para la que, sin embargo, el gobernador no tenía atribuciones: "El ejecutivo suspendió en sus funciones al presidente municipal de Tecpan de Galeana, Valente de la Cruz, quien asumió una actitud rebelde en contra de la Federación y del gobierno del Estado"⁴². Al parecer, De la Cruz se había negado a entregar las armas y, al ser depuesto, por segunda vez se remonta a la sierra, ahora con alrededor de cien hombres. Después de un combate con los federales, y siguiendo su costumbre, el líder costeño se encamina a la Ciudad de México a negociar con la Federación. De la Cruz regresa a Tecpan en marzo de 1926 indultado y con garantías. Ni en cuenta, apenas llega al municipio lo meten a la cárcel. En abril queda libre bajo caución y marcha de nuevo a la capital. Pero esta vez no llegará: el 15 de diciembre, en Pátzcua-

ro, Michoacán, lo detiene el ejército y al día siguiente muere en el paredón de fusilamiento. Abrupto final para un líder civilista y negociador como pocos, que en algunos de sus escritos parece extraer por anticipado la lección de su propio sacrificio: "Lograrán los señores del oro, acabar con los jefes agraristas actuales, así como acabaron con los anteriores, y tal vez hacer una fingida paz a base de la futura guerra"⁴³.

En realidad "la futura guerra" ya había estallado, pues el 6 de mayo de 1926 Amadeo Vidales y los suyos se habían alzado en armas en un Movimiento Libertario de Reintegración Económica Mexicana cuyas reivindicaciones constan en el Manifiesto de Veladero.

A primera vista, el levantamiento resulta inesperado, pues los planes de modernización costera promovidos por Amadeo Vidales eran acordes con el proyecto desarrollista de Calles. Después de todo, antes de llegar a general revolucionario, Vidales había sido hombre de empresa: "un comerciante honorable que paga los mejores precios de ajonjolí [y] de algodón y lo odian los españoles porque dicen que les ha ido a descomponer el negocio"⁴⁴. Y su padre, un importante mercader, había tenido dos embarcaciones de cabotaje y representantes en más de diez poblaciones costeras de México y Centroamérica. En congruencia con su origen familiar y con su trayectoria después de 1924, las acciones de Amadeo se enfilan hacia el desarrollo productivo de la costa. Así, por ejemplo, la colonia agrícola es una explotación asociativa privada que aspira a capitalizarse y cobrar un carácter empresarial. En el otro gran proyecto, la carretera México-Acapulco, Vidales cumple tanto la función de promotor político, como la de gestor de la cons-

trucción, pues en 1924 se le encarga el tramo de Guerrero y durante dos años actúa como contratista. Por otra parte, es cierto que el grupo de Vidales tiene problemas políticos con el resto del POA y que el partido se divide, pero si bien los vidalistas pierden influencia en Acapulco, la conservan en el resto de la Costa Grande, y a través del club J. R. Escudero lanzan candidatos a todos los puestos de elección. Por si fuera poco, en el conflicto interno del POA el grupo de Vidales cuenta, al parecer, con el respaldo del gobernador.

Sin embargo, en una perspectiva más profunda, hay que reconocer que Vidales —como De la Cruz y los demás reformistas radicales costeños— ha fracasado en su intento de subvertir la estructura socioeconómica de la zona. Las denuncias formuladas por De la Cruz, al pardear la tercera década del siglo, describen una situación idéntica a la que privaba en la Costa Grande treinta o cuarenta años antes:

Desde el puerto de Acapulco [las empresas españolas] tienen monopolizado el comercio, la política y la justicia [...] por medio de los patrones lugareños [los cuales] son caciques, terratenientes, autoridades antiguas, comerciantes y políticos, así como directores de la cosa pública⁴⁵.

Pese al fracaso de su aventura delahuertista, esta oligarquía regional sale incólume de la derrota, se acomoda a la situación y, con el apoyo del general Sánchez Tapia, nuevo jefe de operaciones militares, emprende por el terror el restablecimiento de sus añejas formas de dominación. El vate De la Cruz expone la situación y extrae las conclusiones:

No los corrigió la guerra, ni las leyes ni el gobierno. Ni con lágrimas ni ruegos el lobo suelta al carnero. Sólo con el 30-30 soltarán lo que no es de ellos⁴⁶.

Con todo, las circunstancias personales por las que Vidales se alza en armas son oscuras. Es evidente, en cambio, que la furibunda proclama antigachupina del Plan de Veladero, concita un amplio respaldo popular, indicador de que en 1926 el encono social costeño es tanto o más profundo que el existente dieciséis años antes, al filo de la Revolución.

Frente a un pequeño ejército de 300 hombres los alzados tratan de tomar el puerto de Acapulco, y aunque fracasan, la amenaza obliga al propio secretario de Guerra, Joaquín Amaro, a apersonarse en Guerrero con un refuerzo de 1,500 soldados. Acosados por el Ejército Federal, los vidalistas se dispersan por la sierra de Atoyac en pequeños pero imbatibles grupos guerrilleros. En septiembre de 1926 se reúnen otra vez cerca de Acapulco, y de nueva cuenta amenazan el puerto. En 1927, establecen al parecer relaciones con los cristeros de Guerrero. Por más de tres años el Movimiento Libertario se mueve como pez en el agua en la Costa Grande y si no es una real amenaza militar, tampoco puede ser erradicado con las armas.

Silvestre Castro, el exmariscalista que había participado también en los alzamientos de 1923, se mantiene ahora en las filas federales y por unos meses la Federación cree que el prestigio costeño del astuto militar permitirá aislar políticamente a los vidalistas. Pero la cuña del mismo palo no

llega a probarse, pues El Círgüelo muere el 9 de diciembre de 1926 en una confusa emboscada, planeada quizá por los propios federales, temerosos de que la fidelidad costeñista de Castro se impusiera sobre su endeble disciplina militar⁴⁷.

Pero si la guerrilla no sufre grave daño, la presencia del Ejército, con sus prácticas de tierra arrasada, reedita en la costa la situación de estado de sitio, padecida reiteradamente por sus pobladores desde los alzamientos de 1911. En su campaña antividalista, el mayor Lázaro Candelario quema los pueblos de San Andrés y del Rincón de las Parotas, y pasa por las armas, sin juicio, a varios civiles. Bajo las órdenes del general Claudio Fox y el mando local de Jesús Villa, sigue el baño de sangre: al amparo de la suspensión de garantías hay más de una decena de fusilamientos sin juicio, pueblos incendiados, allanamientos, saqueos y violaciones. En 1928 el coronel Henríquez Guzmán se hace cargo de la campaña y de la brutalidad militar. Durante su mando, a los fusilamientos, incendios y saqueos se agregan las exacciones de cinco mil pesos a los costeños acomodados, que así se libran de ser acusados de vidalistas y pasados por las armas. Es también aportación de Henríquez la costumbre de pasar a cuchillo las trenzas de las campesinas sospechosas de colaboracionismo.

Pese a la barbarie militar, la guerrilla le disputa a los federales el control de la región. Tan es así que en las temporadas de cosecha de café se suspenden las hostilidades para que ambas fuerzas puedan dedicarse a cobrar tributo: los federales extienden salvoconductos y exigen cinco pesos semanales; los guerrilleros ofrecen garantías a cambio de un diez por ciento del valor de la cosecha.

Finalmente, dado que el Ejército no acaba con los alzados ni ofrece verdadera seguridad, los “patrones lugareños” organizan guardias blancas antiguerrilleras, como el Cuerpo de Voluntarios formado por los comerciantes Urioste y Ludwig, de Atoyac.

A principios de 1929 Vidales y sus hombres deponen las armas y amnistiados por el presidente Portes Gil se reincorporan a la vida civil. Pero como veremos, la pacificación de los alzados no clausura la sangrienta guerra social costeña. Aunque en la nueva etapa la coyuntura estatal favorece a los agraristas, pues desde 1928 el exzapatista Adrián Castrejón gobierna Guerrero.

Capítulo cuarto

Reparto agrario y corporativismo progresista

Si llego al poder pagaremos a Guerrero
la deuda que la nación tiene con el estado.

Lázaro Cárdenas, *Apuntes*, 1934

EL LEVANTAMIENTO DE VIDALES le cuesta la chamba al gobernador Héctor F. López. No porque lo hayan depuesto los alzados, sino porque el general Claudio Fox, enviado a Guerrero para combatir a los insurrectos costeños y después a los cristeros, asume de hecho el poder político junto con el militar. Fox no sólo fuerza la renuncia del gobernador, también impone al suplente y finalmente designa al sucesor, el general Adrián Castrejón.

López no era ni remotamente un demócrata. Castrejón, en cambio, es un político francamente progresista. Paradójicamente, el viraje a la izquierda en el curso de los gobiernos guerrerenses resulta de la más descarada prepotencia militar. El general Fox presiona sobre las presidencias municipales, manipula las elecciones legislativas y obliga a renunciar a cuatro diputados para lograr el control de la Cámara. Gracias a esto llega un agrarista a la gubernatura, pero en el proceso se pisotean de nueva cuenta las más elementales normas democráticas: la preeminencia del gobierno civil sobre la jefatura militar, la autonomía de los estados respecto

de la federación, la división de poderes, la libertad municipal, el respeto al voto...

Entre otras cosas, se echa para atrás una reforma a la ley, que de haberse aplicado, hubiera transformado a Guerrero en un adelantado de la pluralidad política y del cogobierno municipal. En 1925, y quizá como una maniobra para romper el monopolio de los agraristas sobre algunos municipios, el gobernador Héctor F. López había promovido una iniciativa de ley orientada a adoptar el principio de representación proporcional en las elecciones de ayuntamientos. La intención era oscura, pero la exposición de motivos sorprende por su justeza y actualidad:

[...] el sistema mayoritario entrega los servicios municipales a un grupo compuesto de amigos y correligionarios, cuyos compromisos recientes los obligan a emplear en la administración a quienes más activos fueron en la campaña electoral, sin atender a su competencia y honorabilidad. Por otra parte esta política conocida popularmente con el expresivo nombre de “carro completo”, propicia la corrupción municipal, pues en muchos casos los regidores que deben su exaltación a los esfuerzos de un solo grupo, permanecen unidos y se sienten solidarios de todo, hasta en las faltas y crímenes que cometen sus compañeros, sin que la voz de la minoría se pueda escuchar en el seno de las comunas [...] Y la consecuencia de esta absorción de funciones por parte de ediles y empleados municipales

de la misma filiación política, que ni escuchan ni atienden otras voces que las de su grupo, no puede ser otra que la deficiencia y el abandono de los servicios públicos. El sistema mayoritario entraña, además, una injusticia social [...] Teniendo todos el derecho de intervenir en los asuntos públicos que a todos afectan, solamente la mayoría, por medio de sus representantes, es la que en realidad disfruta de ese derecho⁴⁸.

La iniciativa se aprueba, pero en 1928, ya sin López al frente del gobierno, la misma obediente legislatura que le diera curso, deroga la precursora ley⁴⁹.

Pese a que es impuesto de mala manera por el general Fox, el gobierno del exzapatista Castrejón le franquea el paso de nueva cuenta al reformismo radical costeño, inaugurado en los primeros veinte y bloqueado poco después. Pero si durante el primer auge del reformismo social, el gobernador Rodolfo Neri había dependido de los agraristas organizados —al extremo de ser su fraternal rehén durante el golpe de 1923— la iniciativa personal y la fuerza política de Adrián Castrejón son sensiblemente mayores. Tanto así, que muchas de las nuevas organizaciones gremiales y partidistas que surgen durante su gobierno son inducidas y cobijadas por el jefe del ejecutivo.

De este perverso pero productivo maridaje, por el que el Estado reformador se atribuye la responsabilidad de organizar a la sociedad civil, nace el corporativismo progresista a la mexicana. Gremialismo de Estado que en Guerrero se inicia en 1928 y en menos de una década es una generalizada realidad nacional.

La fiebre organizativa hace presa de Castrejón desde su campaña electoral, para la que establece el Partido Socialista de Guerrero (PSG), conforme al modelo del Socialista del Sureste, fundado por Salvador Alvarado y promovido por Carrillo Puerto, que opera en toda la península de Yucatán; del Radical Socialista de Tabasco impulsado por Garrido Canabal; del Socialista Fronterizo de Tamaulipas apadrinado por Portes Gil, entre otros partidos regionales de exaltado radicalismo proclamativo. El nuevo instituto político de cobertura estatal, trasciende por su amplitud de miras a los partidos municipales nacidos durante los primeros veinte en Iguala, Acapulco, Tecpan y Coyuca, tiene también más arraigo que organismos nacionales como el Partido Liberal Constitucionalista, el Cooperativista o el Agrarista, mal avenidos con el acendrado regionalismo guerrerense.

También a la sombra del gobernador se realiza en 1929 el Primer Congreso Agrario, donde alrededor de 400 delegados fundan la Liga de Resistencia Obrero Campesina de Guerrero, más tarde rebautizada como Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, e incorporada desde 1933 a la nacional Confederación Campesina Mexicana. Finalmente, en 1931 y con excompañeros de armas de Castrejón, se constituye en Iguala el Frente Zapatista.

Aunque inducidos por el gobernador, estos organismos no son cascarones vacíos sino instancias de combate, con membresía entrona y participativa. Y es que las iniciativas de organización gremial y política del jefe del ejecutivo guerrerense no son simples maniobras de legitimación; van acompañadas de una efectiva acción reformista, que se inicia a tambor batiente en 1929 con la distribución en ejidos

de cerca de 13,000 hectáreas. El ritmo del reparto disminuye notablemente en los años siguientes, pero no deja de ser meritorio, sobre todo tomando en cuenta que la administración castrejonista coincide con la involución nacional de la reforma agraria, impuesta por Calles a partir de 1929.

Si bien don Adrián es de Apaxtla y sus raíces políticas están en el zapatismo calentano, los mayores líderes agrarios del castrejonismo provienen de la costa y tienen su matriz política en el reformismo radical de Escudero. Paradójicamente, aunque él es excombatiente zapatista, el reformismo rural de Castrejón se inspira más en el agrarismo rojo de los años veinte que directamente en el Plan de Ayala.

Y es que los agraristas radicales de Guerrero, los rebeldes de la sierra de Atoyac, no se amnistían con la cola entre las piernas; en 1929 regresan a la vida pacífica en son de triunfo y dispuestos a reconstruir el liderazgo civil perdido en cuatro años de andar a salto de mata. Amadeo Vidales ratifica su consabida predilección por el modelo de las colonias agrícolas militares y, en 1930, en tierras de Cacalutla, municipio de Atoyac, que fueran de la familia Cortés, funda la colonia Juan R. Escudero. La empresa asociativa, clientelar y formada por excombatientes del Movimiento Libertario y por simpatizantes del Plan de Veladero, es apoyada por el gobierno federal de Portes Gil con tierra en propiedad privada, maquinaria y crédito. Parece inminente el establecimiento de un neocacicazgo populista, que sin embargo no termina de cuajar, pues dos años más tarde Amadeo Vidales muere asesinado, y en 1938, aquejada de insuperables desavenencias internas, se disuelve la sociedad agrícola.

Toman el relevo agrarista líderes costeños como Feliciano Radilla, de Atoyac, y Nabor Ojeda, de Ometepepec, quienes con el apoyo del gobernador y la cobertura del PSG y de la Liga de Resistencia, impulsan el reparto agrario y la democracia municipal.

En la Costa Grande, la expropiación de la oligarquía porteña y de su red de patrones lugareños, avanza antes y más en el ámbito político que en el territorial. Por el momento los grandes latifundios no se reparten, pero desde 1929 se reanuda la lucha por expulsar de las alcaldías al cacicazgo reinstalado ahí desde 1926. Ahora el sustento político de los reformistas ya no es el POA sino el PSG, pero los enemigos son los mismos.

En Atoyac, el comité local del PSG encabezado por David Flores Reynada, lanza a José Radilla para la Presidencia municipal. Se le opone Juan Francisco Pino, candidato de las fuerzas vivas con el respaldo del flamante Partido Pro-Atoyac, constituido en julio de 1929. Entre los impulsores del nuevo instituto político, destacan Luis Urioste y el comerciante de origen alemán Obdulio Ludwig, quienes dos años antes habían creado un cuerpo armado de voluntarios para combatir al vidalismo y ahora confrontan al mismo antagonista pero en la lid electoral.

Radilla obtiene mayoría de votos y gobierna el municipio durante 1930. Como a principios de los veinte, pareciera que la democracia electoral y los métodos pacíficos y civilizados para dirimir las controversias cívicas han llegado al fin para quedarse. Pero, como diez años antes, la expectativa resulta ilusoria. Para el ejercicio municipal de 1931 contienden de nuevo los dos partidos y aunque otra

vez gana el PSG con la candidatura de Marcos Martínez, la oposición se da por defraudada, le pone sitio al palacio municipal y el alcalde tiene que tomar posesión con resguardo militar. Meses después, Martínez es asesinado. En 1932 no hay más candidato que Genaro Reyes del PSG, pero tampoco él pudo terminar su período en la alcaldía, pues acusado de complicidad en la secuela de venganzas que origina el asesinato de Amadeo Vidales, tiene que renunciar. La democracia formal costeña comienza a trastabillar y se desplomará del todo cuando los conflictos regionales se entreveren con pugnas de más alto nivel.

Fiel al gobierno federal mientras éste no interfiere en los asuntos guerrerenses, Castrejón se insubordina en 1932 cuando Ezequiel Padilla, a quien ha elegido como su sucesor en la gubernatura, es rechazado por el centro y el flamante instituto político nacional creado por Calles lanza la candidatura del general Gabriel Guevara. A partir de ese momento todos los antagonismos políticos del estado se traducen a los términos de la confrontación entre el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el Partido Socialista de Guerrero (PSG), o lo que es lo mismo en un país personalista como el nuestro, en la pugna entre el jefe máximo y el gobernador. Así, en la Costa Grande, la reacción anticastrejonista — antes descubijada y perdidosa — se afilia a la causa del centro y el modesto y localista Partido Pro-Atoyac deviene comité municipal del poderoso PNR. Para los comicios de 1932 se manejan en Atoyac dos listas de candidatos; el PNR apoya al general Gabriel Guevara para gobernador, a Octavio Iturburo para diputado local y a Juan Laurel para alcalde; el PSG, por su parte, respalda a Ezequiel Padilla

para la gubernatura, a Feliciano Radilla para la diputación y a Ríos Villegas para la alcaldía.

Avorazado desde pequeño, el PNR gana la gubernatura y la diputación. Quizá también gana la alcaldía, pero como Castrejón aún es gobernador y controla a los diputados salientes, el Congreso local declara presidente municipal electo al candidato del PSG. Poco tiempo dura en palacio Ríos Villegas, pues un zafarrancho en la toma de posesión de los nuevos diputados ocasiona el desaforo de Castrejón. Hostigado en el estado y sin respaldo nacional, el alcalde electo de Atoyac prefiere dejarle el puesto, por las buenas, a Juan Laurel, excandidato del PNR.

El aparente triunfo de los candidatos a alcaldes del PSG, pese a la supuesta derrota del partido en la gubernatura y en las diputaciones, no es caso específico de la Costa Grande, sino un fenómeno generalizado en todo el estado. Como lo es que a la caída de Castrejón siga en todas partes la defenestración de sus presidentes municipales. La purga de alcaldes del PSG se intensifica en 1933, después de la toma de posesión del gobernador Guevara, quien justifica la siega de cabildos con el peregrino alegato de que los ayuntamientos castrejonistas se “han unido [...] para emprender una abierta oposición” a su régimen⁵⁰.

Si es que durante el gobierno de Castrejón hubo alguna vez respeto al voto, libertad municipal y separación de poderes, estos principios de convivencia democrática fueron cancelados en 1932 con la política de carro completo a toda costa impulsada por el PNR. Pero en verdad es muy dudoso que durante el mandato del PSG imperara el sufragio efectivo. Sin duda Castrejón tenía favorable consenso

popular, pero de ahí a que las elecciones fueran concurridas y transparentes hay un largo trecho. La mecánica parece haber sido otra y perversa: tener el poder era ejercerlo monopólicamente, tratar de extenderlo a todos los niveles y usarlo para perpetuarse en él. Y en el arte de mantenerse arriba, los comicios no son más que una formalidad vacía; una representación que puede ser aplaudida, abucheada o ignorada por el respetable, dependiendo de si el régimen que se ratifica a sí mismo tiene consenso favorable, adverso o indiferente.

El hecho es, que en 1932 el PSG pasa de ganarlas todas a perderlas todas. Por su parte, el PNR debuta en el estado como partido aplanadora. Milagro cívico que no se explica por un súbito vuelco del electorado, pues ni el ánimo popular ni la política de Castrejón se modifican sensiblemente en el último año de su gobierno. Y si bien es cierto que Padilla no es un candidato atractivo para las mayorías, aún lo es menos el general Guevara, antiagrarista confeso y connotado terrateniente.

Que Castrejón respetara las formas democráticas es dudoso, aunque la popularidad de su gobierno reformista resulta incuestionable. Con Guevara, en cambio, no hay ninguna duda: su administración es tan impopular como antidemocrática. No conforme con la gubernatura, el control del Congreso local y, a través de los consabidos camarazos, la imposición de incondicionales en todas las alcaldías, Guevara extiende también su dominio a los comisariados ejidales. Un informe al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) da cuenta de sus expeditos métodos:

El jefe de la Zona [militar de Iguala] José Luis Domínguez [...] llamó a los que estuvieron al frente de la campaña política en favor de la candidatura del C. General Guevara, actual gobernador del Estado, y les pidió la lista de los individuos que en sus respectivos poblados les hubieran ayudado para dicha campaña, con cuyos elementos formó las directivas de los Comisariados, no obstante la rotunda oposición de las mayorías de los ejidatarios⁵¹.

Diversos informes al DAAC reclaman, entre otras cosas, por los acarreos y amenazas para forzar el voto y la manipulación de los ejidatarios como carne de cañón electoral. Pero la crítica de los métodos atrabancados en la designación de autoridades agrarias, que a la larga determina la caída de Guevara, es la que registra en sus apuntes el candidato a la Presidencia de la República, general Lázaro Cárdenas, en mayo de 1934 cuando visita la entidad como parte de su campaña electoral:

El general Guevara [debe dejar] que la federación resuelva lo que a ella corresponde, sin pretender hacer los cambios de los comités administrativos de los ejidos, que se sienten lesionados porque estiman que quiere aplicarse el criterio político del estado y lograr de parte del grupo afectado que reconozca el derecho de autoridad del general Guevara⁵².

El empleo de los recursos de las instituciones estatales para los fines del partido en el poder y el uso de la reforma agraria para establecer controles corporativos sobre los campesinos, se manifiestan con nitidez en la curiosa Circular 116, por la que se obliga a los ayuntamientos a cubrir el sueldo de un militante del PNR encargado de atender problemas agrarios. Es obvio que la función de estos comisionados del PNR —por cuenta del erario público— era suplantar la gestoría de los agraristas de la Liga, vinculados al PSG, socavando así la base social, excorporativa y ahora opositorista, de don Adrián.

Pese a la campaña descastrejonizadora emprendida por Guevara y el PNR, las organizaciones sociales nacidas durante el cuatrienio anterior no sólo sobreviven sino que preservan su liderazgo radical. En 1933 la Liga de Resistencia realiza un nuevo congreso en Iguala, donde cambia a Liga de Comunidades Agrarias, se incorpora a la Confederación Campesina de México y se afilia al naciente cardenismo. Nabor Ojeda y Feliciano Radilla son ratificados en la dirección, y al segundo se le comisiona para recorrer al estado organizando a los solicitantes de tierra y buscando apoyo para la precandidatura de Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República.

El choque entre el reformismo de Castrejón y la reacción guevarista —que prefigura la futura confrontación entre cardenismo y callismo— deja también un rastro de sangre. Como de costumbre, es en la costa donde se contiene con mayor encono. La burguesía lugareña de Atoyac, que ha recobrado el poder municipal, se ensaña con los socialistas y agraristas de Flores Reynada, con la complacencia del jefe

de la zona militar. Para 1934 los muertos ya pasan de seis, pero en marzo son asesinados el beligerante Obdulio Ludwig y su socio comercial. Ante las bajas en el bando de los caciques las fuerzas federales desatan el terror y el Ejército ocupa la población disparando en la calle contra los “sospechosos”. El saldo es de un muerto y dos heridos. Otras dos personas son detenidas y pasadas por las armas sin juicio y se apresura a todos los líderes locales del PSG, menos a Pedro Clavel quien se atrinchera en su casa y termina acribillado a tiros. Flores Reynada es detenido y fusilado en Acapulco, Apolonio Pino también es fusilado sin juicio. La represión corre por cuenta del coronel Hernández, jefe de la zona y sospechoso del asesinato de Ludwig, pues los ejecutores del comerciante vestían como militares.

Sin embargo, los tiempos nacionales marchan a favor de los reformistas guerrerenses afiliados al cardenismo. De hecho, Guevara está muerto políticamente desde el momento en que Lázaro Cárdenas — amigo de Castrejón — es designado candidato a la Presidencia de la República por el PNR. Ya en febrero de 1934, el gobernador de Guerrero debe haber escuchado pasos en la azotea, cuando su adversario político es invitado por Cárdenas a su gira de campaña por Chiapas, estado en donde el general Castrejón había derrotado a los infidentes delahuertistas encabezados por Cándido Aguilar. Y los pasos se hubieran tornado atronador galope, si Guevara hubiese podido leer el lapidario diagnóstico que garabatea en sus apuntes el futuro presidente, durante su gira electoral por la entidad en mayo de ese mismo año:

La mayoría de los campesinos manifestantes partidarios del señor gobernador [...] no están

organizados socialmente; son contingentes que se utilizan para las manifestaciones. El señor general Guevara no entiende la organización social [...] hará poca obra [...] por que le falta la fuerza organizada de los trabajadores. Prevalece en el estado de Guerrero honda división nacida al calor de la campaña política que trajo la llegada al gobierno del general Gabriel Guevara, que jugó en contra de [Ezequiel Padilla] candidato amigo del General Adrián Castrejón, entonces gobernador de esta entidad. Guevara llegó al gobierno en condiciones difíciles; poco conocimiento de la administración pública, un fuerte contingente amigo de Castrejón prevenido contra su designación, desconectado de las nacientes organizaciones obreras y campesinas del estado y poco o nada empapado en cuestiones sociales, [condiciones que] le han acarreado una serie de dificultades que se han traducido en falta de ingresos, división honda en los pueblos, saldos numerosos de sangre y persecuciones de un lado y represalias del otro [lo que] mantiene al estado en una situación que impide las actividades económicas⁵³.

En 1935 se apaga definitivamente la estrella del gobernador, destituido después de un tiroteo en Coyuca de Catalán. En una suerte de repetición de la historia —o de justicia poética— el interino José Inocente Lugo procede a destituir a los alcaldes y consejos municipales impuestos

por Guevara tras la purga de castrejonistas. Treinta y siete autoridades son separadas de sus cargos y otros tres alcaldes renuncian solos.

Cárdenas sigue de cerca la política guerrerense y todo hace pensar que cuenta con su simpatía la designación de Alfredo F. Berber como candidato del partido de Estado y futuro gobernador de la entidad. En todo caso, poco antes de la transmisión de poderes, el presidente pasa diez días en el puerto de Acapulco y al término de su estancia, el tres de febrero de 1937, dirige al pueblo de Guerrero un optimista manifiesto: “Próxima la transmisión de poderes locales, la iniciación de un nuevo período gubernamental, debe significar el comienzo de una etapa de fecundo trabajo social dentro de un ambiente de armonía y serenidad”⁵⁴.

La “armonía” y la “serenidad” brillan por su ausencia. Pese a haber sido electo durante el gobierno de Cárdenas, Alberto F. Berber no comparte su espíritu reformista, y pronto entra en conflicto con el centro representado por el PNR, ahora rebautizado como Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Como consecuencia de estas tensiones Berber es investigado por una comisión de la Cámara de Diputados, “con motivo de [...] acusaciones [...] por haber violado el voto [...] haciendo que se reconociera el triunfo de planillas [...] formadas expreso por el régimen local para enfrentar a las sostenidas por el PNR”⁵⁵.

No hace falta mucha imaginación para suponer que, a estas alturas, el electorado municipal guerrerense está harto de concurrir a comicios en los que no se decide nada, pues la verdadera lucha por el poder se da en otros niveles y con métodos que poco tienen que ver con el voto. Y más si

tomamos en cuenta que, en ese entonces, el ejercicio de la autoridad municipal era de doce meses; de modo que para fines de los treinta en cada comunidad se habían realizado cerca de veinticinco campañas electorales por las alcaldías, desde que el decreto de 1915 y la Constitución de 1917 establecieran el municipio libre. Si los comicios de la inmediata posrevolución parecen haber generado expectativas democráticas, las dos décadas siguientes, repletas de imposiciones y camarazos, sin duda embotaron la incipiente conciencia cívica de los guerrerenses.

Pero si el espíritu cívico estuviere de capa caída, sigue boyante, en cambio, la lucha reivindicativa gremial, pues además de responder a profundas urgencias populares, es alentada en el plano federal por el gobierno cardenista. Siendo Guevara y Berber hostiles a la política reformista del centro, el agrarismo social se transforma en contrapezo de los gobiernos locales conservadores. Así, la Liga de Comunidades Agrarias y sus líderes, apadrinados políticamente por el gobierno federal, sirven de cuña cardenista en Guerrero.

El Congreso Estatal de Unificación Campesina de 1938, en el que se conforma la sección guerrerense de la Confederación Nacional Campesina (CNC) —nueva central agraria alentada por Cárdenas— es escenario de una enconada lucha por el poder. Pugna que gana la mancuerna Radilla-Ojeda, apoyada por el centro, y pierden los personeros del gobernador. Complemento del renovado aparato político agrarista, son las Defensas Rurales: milicias campesinas creadas por Cárdenas en 1936, que deben impedir o contrarrestar la represión antiagrarista de las guardias blancas a sueldo de los terratenientes.

Apoyada en esta combinación de fuerza social organizada y disuasoria capacidad de fuego, avanza en Guerrero la reforma agraria cardenista, pese a la resistencia de los gobiernos locales. Y avanza incluso en la costa, cuna del agrarismo rojo, que había permanecido al margen del reparto ejidal donde la añeja oligarquía porteña conservaba íntegra su propiedad.

CULTIVOS NETAMENTE COMERCIALES, como el ajonjolí, la copra, el algodón —que para los años treinta estaba en franco repliegue— y el café —que iniciaba en firme su ascenso—, se articulaban con una modesta industria de transformación primaria: seis aceiteras, una en Atoyac, otra en Coyuca, el resto en Acapulco y un par de fábricas textiles en decadencia. Y junto a esto, un hato ganadero que se repónía de las pérdidas acarreadas por el alzamiento vidalista, y una creciente explotación silvícola, que alimentaba cinco aserraderos en Acapulco y uno en Zihuatanejo; respaldado, todo, por una producción de maíz y frijol, no abundante pero suficiente para el autoconsumo regional.

Tal era el panorama agroindustrial de la costa a mediados de la década de los treinta. Peculiar conformación que explica, en parte, los pobres avances regionales de la reforma agraria, pues durante los gobiernos de Obregón y Calles privó el criterio de que el ejido era incapaz de manejar explotaciones comerciales y agroindustriales, precisamente como las que existían en la costa guerrerense. De ahí que, en la inmediata posrevolución, fueran mayores los progresos de la reforma en la propiedad territorial en las zonas mai-

ceras del estado. Además, antes de que Cárdenas llegara a la Presidencia, las tierras con cultivos de plantación no eran susceptibles de reparto. Así, hasta 1936 los campesinos costeños no habían podido instaurar expedientes de dotación ejidal, pese a la existencia de latifundios evidentes, pero ocupados por inafectables huertas de copra, café, algodón o frutales.

El vuelco más dramático de la propiedad agraria costeña ocurre precisamente en Atoyac. Ya en 1936, y pese a la fuerte ofensiva de la reacción local y del estado, se organiza en este municipio un Congreso Agrario Regional, donde una nutrida concurrencia campesina demanda la expropiación de los latifundios con huertas cafetaleras de las familias Pino, Gálvez y Gómez, entre otras. El Congreso demanda también la transformación en cooperativa de la fábrica de hilados y tejidos Progreso del Sur Ticuí, parada por la patronal desde 1932, así como la construcción de caminos, escuelas, y otros servicios públicos. Como fin de fiesta los cinco mil asistentes, encabezados por el líder José Delgado, marchan al Palacio municipal, y lo hubieran tomado si no los frena el Ejército. En 1937 el agrarismo local se arma, al formarse en Costa Grande un batallón de defensas rurales, con compañías en Coyuca, Atoyac, Tecpan, Petatlán y La Unión. El mismo año, el atoyaquense Feliciano Radilla, líder agrarista estatal y cabeza de la costeña Liga Regional de Obreros y Campesinos J. R. Escudero, es electo diputado federal por el cuarto distrito. No es pues de extrañar que el 20 de noviembre Cárdenas cumpla una promesa hecha en campaña, al constituir con los miembros del que fuera el sindicato de trabajadores de la textilera del Ticuí, la coo-

perativa David Flores Reynada, que de inicio cuenta con apoyo del Banco Obrero. Un año después, el 8 de noviembre de 1939, una resolución presidencial entrega 80,436 hectáreas ubicadas en la sierra de Atoyac, a los solicitantes de veintiún poblados, que dada su “comunidad de intereses”, constituirán una “Unidad Agraria, cuyas necesidades individuales y colectivas se resuelvan [de manera] conjunta”⁵⁶. El latifundio afectado pertenecía, entre otros, a la esposa de Mariscal, caudillo que al hacer su propia revolución en la costa, le había cerrado el paso al fermento agrario zapatista.

Cárdenas estaba pensando, sin duda, en un ejido agroindustrial y plenamente mercantil; en una reconversión campesina pero productivamente intensiva del latifundio privado. Ya en 1937, en un manifiesto al pueblo de Guerrero, había dicho que “en esta época los campesinos requieren se extienda o intensifique la producción, ya que para ello cuentan con climas propios para cultivos industriales”, y antes, durante su campaña electoral, había anotado la necesidad de una carretera que, recorriendo toda la Costa Grande, uniera a Acapulco con Zihuatanejo.

No hay que sobreestimar, sin embargo, el valor económico efectivo de las ochenta mil hectáreas dotadas en ejido, pues las más son tierras incultas y serranas de difícil acceso. De hecho, en el Distrito 104, que conforman los municipios de Atoyac y Tecpan, a mediados de la década de los treinta hay poco más de diez mil hectáreas cultivadas, de las cuales unas ocho mil son milpas de autoconsumo, con maíz solo o maíz y frijol entreverados. Los cultivos comerciales más importantes son el ajonjolí, que rebasa las mil hectáreas, y la copra, con un cuarto de millón de palmas sobre

unas ciento setenta hectáreas. Hay también unas veinticuatro mil cabezas de ganado mayor. El algodón y el arroz, que habían sido importantes, están en franco repliegue con menos de cuatrocientas hectáreas cada uno. El café sólo se cultiva en Atoyac y sobre una superficie de no más de seiscientas hectáreas⁵⁷.

Los Gálvez, los Pino y los Gómez, que fueron expropiados para la dotación ejidal, eran sin duda grandes latifundistas, pero difícilmente enjundiosos cafetaleros. En otras zonas del país, la situación fue distinta. Las dotaciones agrarias en el Soconusco chiapaneco, por ejemplo, pusieron en manos campesinas numerosos cafetales establecidos. En Guerrero, en cambio, el café ejidal es una posibilidad —pues las tierras dotadas son propicias a este cultivo— pero de ninguna manera una realidad. Para que lo sea hará falta adentrarse en la sierra, deslindar a punta de machete la Agreste unidad agraria y establecer huertas en pleno monte. La ardua tarea colonizadora se inicia en los cuarenta, pero no culminará sino hasta bien entrados los cincuenta al calor del *boom* cafetalero de la posguerra.

Las reformas agrarias e industriales, por las que los trabajadores costeños acceden colectivamente a la propiedad fabril y agraria, son tan justas como necesarias. Y aunque algunos autores las vean como concesiones gubernamentales dissociadas de la movilización popular —pues se realizan cuando el agrarismo está en reflujo—⁵⁸ es indudable que responden a necesidades sentidas y por las que los costeños han luchado larga y denodadamente. Pero sí hay un lado oscuro en estos cambios progresistas, pues además de ir acompañados de una profunda descomposición de la

vida cívica y de las formas democráticas de convivencia, en su ejecución se sientan las bases corporativas del nuevo cacicazgo rural de origen agrarista. Así, reformas orientadas contra la injusticia económica, que gozan de indudable respaldo popular, se vinculan a procesos autoritarios, tanto en el ámbito cívico como en el gremial. Paradójicamente, al buscar la democracia económica se sacrifica y pervierte la democracia política y social.

Una somera reseña de las desventuras municipales de Atoyac en 1937, bastará para ilustrar el acelerado deterioro de la convivencia ciudadana. En enero, poderosos comerciantes y productores de café que apoyaron la candidatura de Rosendo Galeana, tratan de impedir por la fuerza, y sin éxito, que el alcalde electo, Isidro Cortés, tome posesión. Ya en el cargo, el atrabiliario Cortés, quien tampoco simpatiza con los agraristas, lanza su policía municipal a una auténtica guerra contra las defensas rurales. El saldo son dos muertos, varios heridos y un asalto de la milicia campesina al Palacio municipal, del que el alcalde tiene que ser rescatado por el Ejército. Cortés es sustituido por Feliciano Fierro, a quien pronto cesan sus compañeros de comuna para poner en su lugar a Ángel Torres, sustituido un mes después por Genaro Rosas, quien tampoco consigue llegar al final del período. Al término del ejercicio anual han pasado por el municipio nada menos que cinco presidentes. En un estado donde es excepcional que un gobernador pueda terminar su período, es quizá natural que los presidentes municipales cambien mes a mes, por renuncia, camarazo o muerte. Pero el saldo de estos gobiernos efímeros es una cultura política que desvaloriza a los comicios y privilegia la fuerza y las “influencias” como vías de acceso al poder.

El correlato de la degradación cívica es un creciente corporativismo gremial. En las organizaciones agrarias, los cardenistas Radilla y Ojeda tienen que disputarle el poder a los hombres de Berber. Y si es plausible el triunfo de los primeros en coyunturas decisivas, como el Congreso de Unificación Campesina de 1938, pues representan los intereses populares, en cuanto a los métodos, tan dudosos son los de un bando como los del otro. Así, mientras los reaccionarios personeros del gobernador manipulan la elección de delegados, apoyándose en el control que ejercen sobre la Comisión Agraria Mixta y mediante sobornos a los comisariados ejidales, el bando progresista respaldado por el gobierno federal, se sirve para los mismos propósitos de la Delegación Agraria y del Banco de Crédito Ejidal.

Si las instituciones y recursos gubernamentales se emplean para hacer política gremial, a su vez el control de las organizaciones sociales es una mercancía electoral con la que se negocia la distribución del poder político. La percepción del partido de Estado como una agencia que reparte por sectores los puestos de elección, y la idea de que cada agrupamiento gremial representa un paquete de votos cautivos canjeable por cuotas de poder, son ya lugares comunes a fines de los treinta. En una carta de 1937 al presidente Cárdenas, los líderes agrarios de Guerrero exponen sin ambages sus pretensiones políticas:

Tiene [la Liga] el 85% del volumen electoral de dicho Estado, por disponer con un efectivo de socios de más de noventa mil votantes [...] En atención a la fuerza cívica de que dispone la Liga de Comunidades Agrarias, le corresponde elegir a los nueve diputados que forman el total del

poder legislativo local y 64 municipalidades, integrándose la totalidad de Regidores de los ayuntamientos con el sector campesino, de las 71 que tiene el Estado, y un regidor popular en los municipios de Iguala, Acapulco, Chilapa, Taxco, Ometepepec, Huitzucó, concediéndole la mayoría al sector popular en el municipio de Chilpancingo⁵⁹.

Para los agraristas guerrerenses, que pretenden servirse con la cuchara grande las diputaciones y alcaldías del estado, no hay duda de que están negociando los puestos y no sólo las candidaturas, pues una vez definidas las nominaciones del tricolor, los comicios son un simple trámite. Se sobreentiende, también, que la nominación depende, a su vez, de que en las alturas se palomee una lista de presuntos, debidamente ponderada por sectores y grupos de poder. Los ciudadanos guerrerenses nada tienen que hacer en todo esto, pues aunque no lo sepan, su voto ya ha sido debidamente contabilizado. La sustitución del engorro comicial por trámites más expeditos es sencilla: un campesino ejidatario, por ejemplo, pertenece automáticamente a la Liga de Comunidades Agrarias (LCA), la cual a su vez forma parte de una confederación nacional, que constituye el sector campesino del PNR, y en esta calidad los líderes agraristas estatales pondrán en juego el peso electoral de todos los agremiados al negociar los puestos públicos con base en el principio de: un socio, un voto, evidente en la carta citada más arriba donde se habla de “un efectivo de socios de más de noventa mil votantes”.

Así, el poder gremial se canjea por poder político, que a su vez se emplea para legitimar al cacicazgo gremial, en un círculo de complicidades que excluye del todo la consulta

real a la voluntad popular, tanto en las organizaciones sociales como en las instancias cívicas. La democracia gremial sale sobrando, cuando para tener acceso a los programas de Estado y para que se reivindiquen —o de menos se negocien— sus intereses laborales o agrarios, los trabajadores del campo y la ciudad no tienen más remedio que consecuentar a sus charros gremiales, únicos mediadores autorizados por el Estado. La democracia cívica tampoco hace ninguna falta, si el grupo en el poder se legitima a sí mismo a través de un partido de Estado, cuya base no es de ciudadanos sino de sectores corporativos representados precisamente por las cúpulas gremiales.

Lo peor del caso es que esta lógica perversa se ratifica, y aun se profundiza, en un período de reformismo y amplia movilización social, que paradójicamente constituye la más intensa experiencia democrática de la posrevolución. Durante el cardenismo amplios sectores de masas se identifican con su liderazgo gremial y el Estado emprende una decidida política reformista sustentada en la acción popular. Y aun cuando en el período se vive una intensa democracia social que adopta la forma de movimiento, en las organizaciones gremiales persiste el caudillismo y en el ámbito cívico se reproduce el manoseo electoral.

Durante la segunda mitad de los treinta, en Guerrero, como en todo el país, se consolida el corporativismo. Ciertamente se trata de un corporativismo progresista y social, pero cuando los reformistas abandonan el liderazgo o pierden su impulso democrático, lo que queda es una cultura cívica y gremial viciosa; un acendrado corporativismo que impregna tanto la acción política conservadora como las prácticas de toda, o casi toda la izquierda.

Los comunistas de Guerrero, por ejemplo, padecen estas deformaciones casi desde 1933, año en que el maestro Hipólito Cárdenas de la escuela normal campesina de Ayotzinapa funda la sección estatal del partido. En los primeros meses, el nuevo agrupamiento actúa en la oposición extrema y difícilmente se puede permitir prácticas corporativistas, pero en 1935 el VI Congreso de la Internacional plantea la política de unidad antifascista y los comunistas mexicanos, quienes ven en el PNR la versión autóctona del Frente Popular, se lanzan a impulsar la convergencia de todas las organizaciones sociales, en un proceso de unidad que termina hegemonizado por el partido de Estado y que desde el principio reproduce las peores lacras del gremialismo corporativo. Nacida en la normal de Ayotzinapa, la sección guerrerense del Partido Comunista Mexicano (PCM) se desarrolla con fuerza entre los maestros, y a partir de 1935, cuando el partido opta por la legalidad y la alianza con el Estado, el reclutamiento de docentes se hace compulsivo e institucional. Para 1939, la sección guerrerense del sindicato magisterial se ha transformado en un feudo corporativo del PCM, donde las instancias políticas se confunden con las gremiales, al extremo de que en las asambleas sindicales se incluye como punto de la orden del día la afiliación al Partido Comunista de los mentores que aún no militan.

Al igual que el partido en el poder, los comunistas practican una suerte de exclusivismo sindical, por el que a fines de los años treinta, 90% de los maestros guerrerenses son militantes del PCM, partido que por esa vía también controla a la mayoría de los directores e inspectores, y en general a la burocracia educativa. Apoyado en sus escuelas

y su sindicato, el PCM también participa, aunque modestamente, en el reparto del pastel político electoral: en 1941 el profesor comunista Herón Várela llega a la alcaldía de Tlapa postulado por el PNR y el PCM, y el también comunista y también profesor José Gutiérrez es nombrado por Berber secretario de gobierno. Así, al ser desaforado Berber en febrero de 1941, un comunista queda por tres días al frente del gobierno estatal, mientras es nombrado el interino⁶⁰.

La luna de miel entre el PCM y el PNR es relativa y breve. En las décadas siguientes los comunistas, y en general la oposición, serán acosados, reprimidos y marginados de la vida política institucional. Sin embargo, las efímeras experiencias de dominio izquierdista sobre pequeñas parcelas sociales, ponen de manifiesto que el entreveramiento corporativo entre gremio y partido, el uso de las instituciones y los recursos estatales con fines partidistas así como el reparto de puestos de elección con base en cuotas de poder, son parte de una cultura política general, que impregna las prácticas y concepciones del régimen corporativo de partido de Estado, de la que tampoco se libra la oposición.

EN GUERRERO, EL PERÍODO CARDENISTA termina en medio de intensas convulsiones políticas y generalizada violencia social, de la que no escapan los máximos líderes agrarios. En un solo año, 1938, se denuncian 26 asesinatos de dirigentes campesinos y en 1940 Feliciano Radilla, entonces diputado federal y presunto candidato a senador, es también asesinado en Chilpancingo. Poco después su compañero Nabor Ojeda, que apuntaba para

Guerrero bronco
gobernador, se libra apenas de un atentado contra su vida. La sucesión de Berber es tormentosa. El candidato del PNR, Rafael Catalán, compite con Francisco S. Carreto, a quien apoya el gobernador.

Al parecer, Catalán gana en las urnas, pero para que tome posesión será necesario que la federación desaparezca los poderes y se realicen nuevas elecciones, pues la cámara de representantes berberista invalida la candidatura de Catalán alegando que su renuncia al Ejército había sido extemporánea.

Capítulo quinto

La autogestión campesina

La revolución arrebató las tierras a los antiguos hacendados para entregarlas a los campesinos. Y se pensó entonces que habría de mejorar rápidamente la situación... Han pasado muchos años, pero ahora nos encontramos con que el antiguo terrateniente es el amo de los mercados. Por eso nosotros... llegamos a la conclusión de que para librar-nos debemos crear nuestro propio capital social.

Florencio Encarnación Ursúa

EL MILAGRO MEXICANO, propiciado por la coyuntura mercantil que deriva de la Segunda Guerra Mundial y se prolonga durante el conflicto de Corea, se caracteriza por un crecimiento económico rápido y sostenido y por importantes cambios en el perfil productivo del país.

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, también se modifica significativamente el panorama económico de Guerrero, y en particular el de la costa: el pequeño puerto comercial de Acapulco se transforma en emporio turístico gracias a las inversiones atraídas por la política de estímulos y concesiones del gobierno de Miguel Alemán; en el mismo lapso se conceden, ratifican o amplían grandes concesiones silvícolas a empresas forestales como Maderas Papanoa y

Chapas y Triplay S.A., entre otras; finalmente, es también en estos veinte años que el *boom* de las huertas de copra y de café barre del paisaje costeño al ajonjolí y al algodón.

En el curso de estas transformaciones, la burguesía agraria cambia de ramo pero no de métodos: el crédito usurario, el acaparamiento de cosechas y el monopolio de la industrialización se trasladan del algodón y el ajonjolí a la copra y el café, pero la clase propietaria costeña sigue operando como una rutinaria burguesía comercial, sustentada por una amplia red de coyotes y sostenida por el tradicional cacicazgo de los patrones lugareños.

Reanimada económicamente por la favorable coyuntura, esta burguesía logra también, durante los años cuarenta, restaurar su viejo dominio oligárquico, quebrantado por la revolución y por sus secuelas reformistas de los años veinte y treinta.

De 1945 a 1951, el gobernador Baltasar Leyva Mancilla teje una fuerte red de complicidades políticas, y no sólo realiza el milagro de sostenerse en el cargo por el período completo, sino que consigue también el control absoluto de los puestos de elección, y en general del aparato político guerrerense formal e informal. Como es costumbre de los gobernantes exitosos, a Leyva los seis años le quedan cortos, de modo que trata de prolongar su poder. La lucha del mancillismo por mantener su hegemonía y las fuertes tensiones que esto genera con los gobiernos federales desearios de ejercer un control más directo sobre la región, marcan la agitada vida política del estado hasta bien entrados los años sesenta.

Hay, sin embargo, un nuevo actor en el escenario político guerrerense: los ejidatarios de producción comercial crea-

dos por el reparto agrario cardenista y consolidados por la expansión coprera y cafetalera de los cuarenta y cincuenta. Estos campesinos ya no son maiceros más o menos auto-consuntivos, trabajan básicamente para el mercado y les preocupa el crédito, los precios y el acceso a los canales de industrialización primaria y de comercialización.

Al requerir sus cosechas de una primera fase de transformación local, las producciones pequeñas y medianas de copra y de café tienden a integrarse verticalmente. Y es en esta tendencia natural donde se focalizan los principales conflictos agrarios costeños del medio siglo, pues los aparatos agrocomerciales y agroindustriales pueden ser organismos liberadores o estructuras de subordinación; instancias de democracia económica o soporte de un nuevo cacicazgo. A principios de los cincuenta se inicia entre los correreros y cafetaleros costeños una lucha inédita por la apropiación colectiva del proceso productivo, incluyendo la industrialización primaria y la comercialización. Para fines de la década es claro que la primera batalla se ha perdido. Ésta es la historia.

LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA COPRA comienza en México a mediados de los años veinte, pero en Guerrero las plantaciones de palma inician su impetuosa expansión en la quinta década del siglo sobre tierras costeras ejidales o de pequeña propiedad. A principios de los años treinta, hay en Guerrero apenas 3 000 hectáreas de palmas —la mayor parte en Tecpan y Coyuca—, lo que reporta una producción anualizada de copra de 7 000 toneladas, que representa una quinta parte de la cosecha nacional. La

demanda supera a la oferta, de modo que hasta mediados del siglo el país es importador⁶¹. Esta situación se mantiene sin grandes cambios hasta el arranque de los años cuarenta, cuando los precios suben debido al conflicto bélico, y los cocoteros guerrerenses se multiplican. La palma requiere diez años para empezar a producir, de modo que el impacto del fomento se manifiesta más claramente en 1950, año en que la producción llega a 28 000 toneladas, provenientes de 18 000 hectáreas de huertas, no todas en pleno rendimiento. En 1960 la cosecha es de casi 100 000 toneladas; Guerrero se transforma en el mayor productor nacional de copra y la Costa Grande, con sus tres millones de palmeras, genera 90% del total en el estado. De Acapulco a La Unión, la franja costera se ha transformado en un inmenso cocotal.

Hay bastantes huertas privadas, y el auge propicia mayores acaparamientos ilegales de tierra, sin embargo, en la copra predomina el régimen ejidal. El grueso de la producción no proviene de grandes fincas, sino de decenas de miles de pequeños huerteros, de modo que la suerte parece sonreír a los campesinos costeños, quienes por primera vez tienen en sus manos una fuente potencial de prosperidad.

Sin embargo, los frutos de las huertas no benefician tanto al productor directo como a los intermediarios y acaparadores. La reforma agraria no ha desatado los viejos nudos de la dependencia, y si antes el arrendatario tenía comprometida de antemano su cosecha con el terrateniente acaparador, ahora el ejidatario endeudado tiene que vender al tiempo a través de los coyotes. De esta manera la producción termina en manos del mismo acaparador de siempre: una burguesía comercial que sin necesidad de ser gran terrateniente sigue controlando la economía de la región.

La casa Fernández —vieja conocida—, la Bola de Nieve y la Especial, son los primeros compradores acapulqueños de copra, servidos por una extensa red de coyotes, que organiza el acopio a través de los anticipos usurarios a cuenta de cosecha. La fina malla del acaparamiento es un tejido económico pero también social; una red por la que, a la vez que se transfiere el excedente del trabajo campesino, se reproducen las añejas relaciones de dependencia y subordinación. Los habilitados de un acaparador de copra son su clientela, también en el sentido caciquil del término, y el nuevo perfil productivo de la costa se refleja en la emergencia de caciques inéditos que hacen carrera a la sombra de los palmares. Candelario Ríos y Jesús Flores son los hombres que mueven copra y copreros; son los renovados pilares del poder regional y cabezas visibles de innumerables patrones lugareños de menor talla.

En los años buenos el coco da para todos, hasta para los pequeños productores, pero al término de la guerra de Corea se invierte la tendencia alcista de los precios, y de 1951 a 1954 la copra pierde una cuarta parte de su valor. En el mismo período, el impuesto de dos centavos por kilogramo, establecido por el gobernador Leyva Mancilla, es elevado por su sucesor Gómez Maganda a cinco centavos por kilogramo, más diez pesos por palma en producción. Para colmo de males, los bajos precios internacionales propician la importación de sebos, con lo que el mercado interno se desploma. La copra vive su primera crisis severa y bajo las palmeras se incuba un movimiento social inédito en la costa: la lucha campesina por controlar los factores económicos de la producción.

El movimiento no es lineal y transparente sino confuso y abigarrado, pues no sólo están en juego los intereses campesinos; se barajan también las cartas de los grandes propietarios, de los acaparadores y de la burguesía comercial, afectados todos por las importaciones y el descenso de los precios. Finalmente, se ponen también sobre la mesa las apuestas políticas de los grupos de poder, que pretenden usar al movimiento coprero para sus propios fines.

La elevación del impuesto es la gota que derrama el vaso y en 1951 estalla el movimiento, en forma de espontánea rebeldía al pago de las nuevas cuotas. Pero para fines del año, hay ya una organización, la Unión Regional de Productores de Copra (URPC), que a la vez que plantea la derogación del impuesto, esboza un proyecto asociativo agrícola, comercial e industrial, enfilado contra la expoliadora estructura del coyotaje. La URPC anuncia que “instalará molinos de aceite y maquinaria agrícola para sí y sus agremiados, construyéndoles asoleaderos y bodegas, o cooperando con ellos para que las construyan, dotándolas de fertilizantes, insecticidas, transportando y vendiendo sus productos”⁶².

La nueva organización surge de manera espontánea, al margen de las estructuras corporativas de la CNC y el PRI. La vocación democrática de su emergente liderazgo, quizá ingenuo pero ya escamado, se expresa en el último punto del citado documento:

Ningún representante o delegado fraternal de otra organización filial o amiga, de las secretarías de Estado, o de los gobiernos de la República, tiene derecho a tutorear o dirigir abierta o solapadamente los trabajos [...] de esta Unión, y cuando se comprobare que se ha violado esta disposición, se pedirá [...] la expulsión de [...] los contraventores⁶³.

El 24 de abril de 1952 la URPC inaugura en la costa guerrerense una forma de lucha campesina casi inédita en el plano nacional: la huelga de productores o huelga de brazos caídos⁶⁴. Durante 42 días, 12,000 pequeños huerteros organizados bloquean el movimiento de la copra. Para el 6 de junio consiguen la satisfacción de la mayor parte de sus demandas: reducción de impuestos, suspensión de importaciones y un crédito pignorativo de 5 millones de pesos, que debiera permitirle a la URPC acopiar y vender alrededor de 5,000 toneladas de copra mediante anticipos al productor de un peso por kilogramo.

Aunque las fuertes lluvias no le permiten acopiar la cantidad prevista y los precios internacionales siguen a la baja, la primera acción de la URPC es un triunfo. La organización se transforma, así, en un atractivo botín y sobre su segundo congreso, realizado en enero de 1954, ya revolotean los negros zopilotes de la política corporativa. El Congreso ratifica la línea autogestionaria:

Elaborar un proyecto de ley que elimine a los intermediarios que compran cosechas adelantadas y que en muchas ocasiones se quedan con las parcelas de los ejidatarios [...] Planear la agrupación de las Sociedades de Crédito Coprero, para refaccionar directamente a los productores [...] Solicitar [...] una investigación sobre la forma de mejorar las técnicas de producción [...] Gestionar la prohibición o restricción de la importación de materias primas para la elaboración de detergentes⁶⁵.

Pero a la reunión asisten representantes de la CNC y de la diputación guerrerense federal, de filiación priísta, y entre bambalinas se toman algunos acuerdos que comprometerán la autonomía de la organización.

La URPC se mueve en una compleja red de contradicciones. Enfrentada al poderoso sistema caciquil de intermediación y acaparamiento, tiene en su contra a la férrea estructura de poder forjada durante el gobierno de Leyva Mancilla. Para modificar la correlación de fuerzas a su favor, necesita buscar apoyos y aprovechar las fisuras que dividen a sus antagonistas. Por fortuna para los copreros, la sucesión de Leyva había sido conflictiva, pues el candidato del gobernador saliente era el senador Donato Miranda Fonseca, y por decisión del presidente Alemán, el bueno resultó Alejandro Gómez Maganda. El personero de la federación, sin embargo, tuvo que aceptar en su gobierno a un grupo de colaboradores del bando opositor. Así, la debilidad de Gómez Maganda, la filiación mirandista del núcleo caciquil costeño encabezado por Candelario Ríos Campos y las contradicciones del ejecutivo guerrerense con su propio equipo y con el gobierno federal, pueden ser utilizadas por la URPC para tratar de romper el cerco. En este esfuerzo, la tentación de negociar la autonomía política a cambio de apoyos es grande, como lo es el peligro de que la organización caiga en el corporativismo y se desintegre en la rebatinga por las cuotas de poder.

Las señales de alerta no aparecen sólo a posteriori, en cómodos balances historiográficos como éste. Ya en su momento las opciones fueron materia de debate y las reflexio-

nes de Florencio Encarnación Ursúa, fundador de la URPC y líder de la corriente más democrática de los copreros, son testimonio claro de que bien se sabía lo que estaba en juego.

Siendo que se hacía necesario contar con un eficaz apoyo del gobierno federal, ya que las fuerzas enemigas del coprero eran muy poderosas y que cada día se volvían mucho más agresivas, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de pedir apoyo a la Confederación Nacional Campesina para que ésta por su intermediación obtuviera la protección oficial que evitara o al menos parara los ataques, pero fundamentalmente para que despejara la incompreensión del gobierno local⁶⁶.

Invitaciones a funcionarios federales, nutridas recepciones pozoleras, acarreos con y sin itacate, desplegados de agradecimiento pagados por el destinatario, innumerables antesalas e intensos cabildeos, son algunas de las prácticas políticas que acompañan a la nueva táctica. Pero lo más trascendente es la participación de la URPC en el rejuego electoral y en el regateo por las cuotas de poder. Así lo describe Ursúa:

Comenzaba el año de 1955 y estaba en puerta la campaña política para la renovación de la Cámara de Diputados Federal, y como la organización de los copreros ya representaba una fuerza importante, se le invitó para que participara designando a uno de sus elementos para integrar la fórmula que sostendría el partido oficial por ese cuarto Distrito Electoral. El asunto se puso a consideración de las asociaciones

y sólo después de haberse deliberado, se aprobó por mayoría, ya que prevalecía el criterio de que teniendo los copreiros una representación, podrían abrirse camino para tener mayor acceso a las autoridades federales. La Unión entró así al juego político y a partir de entonces la Secretaría de Gobernación intervino con mayor empeño en las gestiones para obtener precios remunerativos de los productos agropecuarios y se inició además la construcción de caminos y de escuelas. Si fue equivocada la decisión que los campesinos tomaron para participar en la política electoral, la culpa en todo caso sería de todos, por que el asunto se sometió a discusión previa y hubo consenso favorable⁶⁷.

La incorporación de un nuevo comensal al reparto del pastel enfureció a los caciques mirandistas costeños, acostumbrados a repartirse todos los puestos de elección. Suscitó, también, críticas sensatas y de sorprendente actualidad en algunos partidos de oposición. El propio Ursúa las reproduce:

Por su parte la izquierda no lanzó dardos venenosos, pero sí demostró su desacuerdo. El Partido Obrero y Campesino⁶⁸ dijo a través de su vocero "[...] la participación política de los copreiros [es] esencialmente negativa, por dos razones: en primer lugar porque las organizaciones sociales NO DEBEN PARTICIPAR EN LA LUCHA POLÍTICO-ELECTORAL COMO SI FUESEN PARTIDOS POLÍTICOS, también porque se violenta la individual decisión ciudadana de afiliarse y militar en el partido político que mejor

le acomode a cada socio de la Unión Regional. Es negativa [...] además, porque quienes ocupan los puestos de elección son casi siempre elementos dúctiles, dispuestos al compromiso [...] en contra de sus propios compañeros [...] pues los candidatos son escogidos por el gobernador en turno [...] y nunca por la misma Unión”⁶⁹.

Gruesa es la tajada de poder que se le asigna al importante gremio coprero, y pronto, una URPC cada vez más corporativa se reparte todos los puestos de elección de la Costa Grande. La mayoría de los líderes copreros son, en algún período, diputados locales. Así, pasan por la cámara: Jesús Galeana —que es el primero—, Orbelín Soberanis, Franco Núñez, Silverio Valle, Rigoberto Paño, entre otros. En cuanto a los cabildos, cuyo ejercicio se prolonga a dos años en 1935 y a tres desde 1957, quedan en manos de la URPC el de Tecpan, ocupado por el maestro Crescencio Otero; el de Petatlán, encabezado por Ezequiel Lozano; el de San Jerónimo, presidido por Julio Radilla; y el de Atoyac, ocupado por Raúl Galeana, un coprero que también es cafetalero.

La caída de Gómez Maganda en 1954, el interinato de Darío L. Arrieta y la gubernatura, también incompleta, de Caballero Aburto, son reflejo de una despiadada lucha por el poder. Y a la sombra de gobernadores débiles y urgidos de apoyos locales, la URPC no sólo sobrevive a los embates de las fuerzas enemigas asociadas al mirandismo; en lo político les arrebató los puestos de elección de la zona costera y en lo económico se hace de una creciente infraestructura que poco a poco le va permitiendo competir con los coyotes y acaparadores tradicionales.

En 1957, por iniciativa de Encarnación Ursúa, se crea la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados, S. A. de C.V., y al año siguiente el gobierno de Caballero Aburto autoriza un impuesto a la copra de tres centavos por kilogramo, destinado a sufragar los gastos de la URPC y sobre todo, a capitalizar a la Unión Mercantil. El nuevo aparato económico coprero responde al proyecto autogestionario original formulado seis años antes, pero además embona a la perfección en el discurso agrario neocardenista con el que el presidente López Mateos trata de capotear el vendaval de luchas campesinas de los últimos años cincuenta⁷⁰. Así, la Unión Mercantil deviene paradigma de las nuevas empresas asociativas que reclama el campo mexicano. En el Congreso Nacional Agrario de Toluca, que patrocinan el gobierno del Estado de México y el federal, la delegación guerrerense presenta la ponencia “Necesidad de configurar en la ley y fomentar en la práctica una empresa mercantil rural compatible con la reforma agraria”. La propuesta, que generaliza el modelo de la Unión, es recogida en las resoluciones de la mesa sobre “desarrollo y manejo de la producción agrícola (intermediarios y mercados)”. Conforme a los vientos autogestionarios que soplan, en las conclusiones se subraya, además, que los ejidatarios deben organizarse en empresas, “pero alejándose por completo de la idea de ser dirigidos por el Estado, el cual sólo tendrá [...] funciones de vigilancia y de recaudador de determinadas sumas de dinero que debe entregar a los ejidatarios”⁷¹.

Hasta 1960 la Unión Mercantil va de gane. Su creciente capacidad de acopio y comercialización, fincada en conseguir y pagar buenos precios, pone a la defensiva a los aca-

paradores privados y en 1959 capotea con éxito la saturación del mercado interno incursionando en la exportación. Pero a principios de los años sesenta comienzan a cambiar los aires. El gobierno estatal, de nuevo en manos del mirandismo, restaura sus nexos con la burguesía agrocomercial costeña y pierde interés en la Unión que Caballero Aburto había utilizado para desestabilizarla. Por otra parte, la directiva de la URPC, transformada en grupo político con intereses propios, ve con malos ojos la autonomía adquirida por su aparato económico, la Unión Mercantil. Finalmente, el cacicazgo regional de usureros y acaparadores encabezado por Candelario Ríos, se muestra dispuesto a aliarse con la cúpula de la URPC, con tal de echarle mano a la molesta empresa comercializadora.

En el quinto congreso de los copreros guerrerenses se inician los golpes bajos. Pleito que culmina el 19 de marzo de 1961, cuando las oficinas de la Unión Mercantil en Acapulco son asaltadas por golpeadores de la URPC y copreros de la Costa Chica acarreados por papá Cande y apoyados por la policía municipal del puerto y la judicial estatal.

Y el zafarrancho apenas empieza. En los años siguientes la URPC deviene campo de batalla donde se confrontan los intereses de empresas transnacionales (Colgate, Procter, Unilever), los objetivos de los grandes cosechadores de coco del país representados por la Unión Nacional de Productores de Copra (UNPC) y los afanes de la burguesía compradora local de filiación mirandista. Pretensiones que, a su vez, se entreveran con los intereses políticos divergentes y a veces francamente contrapuestos, de los gobiernos estatal y federal.

Lo único ausente es la causa legítima de las bases copreras, cuyas aspiraciones autogestionarias se diluyen y adulteran propiciando la plena restauración del coyotaje. La Unión Mercantil, saqueada por los usurpadores y tan carente de fondos como de proyecto autónomo, se asocia con los acaparadores, quienes le financian el acopio transformándola en un simple coyote asociativo. Su maquinaria y equipo pasan a manos de la Compañía Aceitera del Pacífico, controlada por la burguesía coprera, y si la infraestructura privatizada no llega a operar es porque el gobierno federal, hostil al mirandismo, bloquea el despegue de la nueva empresa.

En 1959 el POCM se pregunta: “¿Será que se ha iniciado el ‘charrismo’ dentro de las filas... copreras, en este año de matrimonio y proteccionismo?”⁷² Tres años después no cabe la menor duda de que la URPC se ha corporativizado, pero en el proceso no solo se ha perdido la autonomía política; al desmantelarse la infraestructura comercial colectiva se ha sacrificado, también, la incipiente independencia económica.

DE LA MANO DE LOS COPREROS y siguiendo el modelo de la URPC, durante los años cincuenta y sesenta surge, brilla y se apaga la primera organización de los productores costeros de café. Si en Coyuca había 900 000 palmas de coco, 800 000 en Tecpan, 600 000 en San Jerónimo y 500 000 en Petatlán; en Atoyac, de escasas tierras costeras, había sólo 150 000 palmas. Pero a falta de potencial coprero, el municipio había desarrollado ampliamente su vocación cafetalera. Si a mediados de los años cuarenta las huertas ocupaban poco más de 1 400 hectáreas y la producción rebasaba apenas las

500 toneladas, los buenos precios de los años de guerra estimulan la ampliación de los cafetales y para 1960 la extensión de las huertas se ha multiplicado por diez, llegando a 14,000 hectáreas que producen alrededor de 5,600 toneladas. Así, mientras que en la franja ribereña de la Costa Grande la copra es el mayor producto comercial y el principal botín de la burguesía compradora, la sierra de Atoyac es un emporio cafetalero y en la producción, acaparamiento y comercialización del aromático es donde se forjarán las grandes fortunas regionales.

La cafeticultura costeña, igual que la producción de copra, es una actividad en la que predominan los pequeños y medianos productores, cuyo principal problema es la debilidad con que concurren al mercado controlado por los coyotes. El cafeticultor pequeño está condenado a trabajar para los que compran, procesan y comercializan el grano, a menos que se organice para extender su control sobre el beneficiado y el mercadeo. Para ello, en 1952, cuando aún no se apagan los ecos de la huelga coprera, y a pocos meses de la constitución de la URPC, se funda la Asociación Agrícola Local de Cafeticultores de Atoyac, que encabezan Juan Quintero y Raúl Galeana. A diferencia de los productores de copra, que inician su proceso organizativo en plena lucha y a tambor batiente, durante su primer lustro la agrupación cafetalera es un simple membrete, carente de recursos económicos y de presencia social. De hecho, el acontecimiento cafetalero más importante de esos años, el establecimiento de los primeros beneficios húmedos de la sierra en 1954, es obra de un grupo de productores y comerciantes acomodados en la que no tiene intervención alguna la asociación.

La organización de los cafetaleros cobra vida en 1958, cuando el gobernador Caballero Aburto, afanoso por dotarse de base social propia, fija un impuesto de 7.5 centavos por kilogramo de café, destinado a sufragar obras de beneficio en la zona de las huertas y a capitalizar la organización. También en 1958 se establecen en Atoyac las oficinas de la Comisión Nacional del Café, que al año siguiente se transformará en Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). Como por arte de magia, la organización de los productores se extiende y consolida. A partir de la asociación local se forma la Unión Regional de Productores de Café del Suroeste, que agrupa también a cafeticultores de Petatlán y Coyuca, en la Costa Grande, y de Iliatenco, en la Montaña, aunque los de Atoyac son abrumadoramente mayoritarios. Poco después, con asesoría de los copreros y siguiendo el modelo de empresa campesina propuesto en el congreso de Toluca, se crea la Unión Mercantil de Productores de Café Atoyac, S. A. de C. V.

La flamante empresa, cuyo consejo de administración presidía Raúl Galeana, empleó los recursos provenientes del impuesto

[...] para adquirir un predio dentro de la población de Atoyac de Álvarez, y en él construyeron los asoleaderos de su beneficio, levantaron sus bodegas y oficinas, y dieron el enganche para el equipo de maquinaria, que una vez instalada comenzó a procesar café capulín. Adquirieron dos vehículos de tracción para transportar sus cosechas de la sierra a sus plantas procesadoras

y de éstas llevaron su café hasta la Ciudad de México para venderlo con el respaldo del Instituto Mexicano del Café⁷³.

Encarnación Ursúa, forjador de la Unión Mercantil Coprera y animador de la empresa campesina de los cafetaleros, expone el proyecto organizativo sectorial y regional del que fue empeñoso promotor:

¡Y ya eran dos Empresas de Campesinos! [...] La pujanza, la firmeza, el entusiasmo y el trabajo coordinado de los dos grupos de productores rurales, daban la impresión de que ya se había obtenido una gran fuerza combativa con la cual podía romperse en pedazos todo el sistema ancestral de organización económica, [...] se iniciaba otra nueva etapa de la lucha agraria [...] Sin embargo era necesario no confiarse de esa que podía ser sólo fantasía, aparente situación de bonanza material y falso dominio tanto de la conciencia colectiva como del mercado local y nacional, y por eso ambos grupos, copreros y cafetaleros, decidieron emprender una [...] campaña entre los campesinos de las demás ramas de la producción, con el propósito de [...] seguir organizando con ellos otras empresas entre las que [...] se contemplaba [...] la de arroceros y la de ajonjolineros.

Las visitas de unos a otros se reglamentaron de tal forma que pudieron celebrarse quincenalmente con el fin de intercambiarse experiencias, de analizar los alcances logrados en uno y otro sector, y para plantear la ejecución de tareas comunes; y esta colaboración y apoyo mutuo [...] facilitaban los trabajos de las dos empresas rurales⁷⁴.

El paralelismo entre los procesos de organización de los copreros y de los cafetaleros no se limita a la acción social; también en el ámbito político los de la sierra siguen a los de la costa. En 1959 los cafeticultores de la asociación local deciden que el peso de su sector ya les da derecho a controlar la Presidencia municipal de Atoyac y, echando para atrás la candidatura priísta de Luis Ríos Tavera, llevan a la alcaldía a Raúl Galeana, también del PRI. Galeana, fundador de la asociación y de la Unión Mercantil, es el líder cafetalero más destacado de la región y los mítines de la campaña —realizada a contracorriente de la directiva local del PRI— son muestra del apoyo popular con que cuenta, o cuando menos del repudio que despierta el candidato de la burocracia partidista y personero del mirandismo. Pero el principal respaldo de Galeana no viene de abajo sino de arriba; del gobierno estatal interesado en afianzar sus nexos corporativos con las organizaciones gremiales. Caballero Aburto se la pasa en Atoyac: inaugura las oficinas de la organización cafetalera; bendice con su presencia la toma de posesión de Galeana y asiste al suntuoso baile realizado en los asoleaderos de la Asociación; acompaña al alcalde a la inauguración de la Feria del Café, que tiene lugar en San Vicente, y realiza innumerables giras por la sierra. Pero tener dos padrinos es mejor que tener sólo uno, y una parte del cabildo busca también el apoyo de Donato Miranda Fonseca, secretario de la Presidencia y hombre fuerte de Guerrero. Así, coqueteando con dos pretendientes, Atoyac se vuelve el municipio consentido tanto del gobierno estatal como del federal: si Aburto les aprueba la construcción de una escuela primaria, Fonseca no se queda atrás, y gracias a los buenos oficios

del secretario de la Presidencia se acuerda la introducción de agua potable, la remodelación del mercado municipal y la construcción de una escuela secundaria.

Pero las obras públicas (o la promesa de realizarlas) no compran simpatías duraderas. El coqueteo del gobernador con los costeños no impide que en 1960 la región se sume, de manera casi unánime, al movimiento cívico antiaburtista. Del mismo modo, las cuotas de poder económico y político concedidas por el Estado a los cafetaleros organizados, no garantizan su cohesión, y en 1960 la asociación local se divide entre los seguidores de Paco Leyva y los de López Cabañas; al tiempo que el cabildo es escenario de choques entre el alcalde Raúl Galeana, incondicional del gobernador, y el síndico Luis Cabañas, más cercano a Miranda Fonseca e identificado con la oposición popular que comienza a agruparse en el Comité Cívico Guerrerense.

Más adelante nos ocuparemos de este episodio de la accidentada vida política costeña. Por el momento baste señalar que en el arranque de los años sesenta el proyecto autogestionario cafetalero se desmorona, siguiendo muy de cerca los trastabillantes pasos de la organización coprera, que fuera su ejemplo. Pero todo hace pensar que si la Unión Mercantil de los productores de coco tuvo momentos de intensa inmovilización y plausible democracia, que al final se vinieron abajo, el primer acuerpamiento de los productores de café fue en todo momento un organismo estrictamente cupular. La quiebra de la unión se gestó en el manejo patrimonial de los recursos colectivos; bienes que finalmente fueron hipotecados y terminaron en manos del rico cafeticultor Sotero Fierro, en un proceso de privatización semejante al que siguiera la empresa campesina de los copreros⁷⁵.

EN EL LAPSO QUE VENIMOS RESEÑANDO, surgen los nuevos ejes de la producción comercial costeña, al mismo tiempo que se configuran renovados grupos de poder, con estructuras de control económico y político ajustadas a las cambiantes circunstancias. En este proceso de adecuación, los viejos y nuevos oligarcas —y su consabida red de patrones lugareños— tienen que enfrentar y derrotar a un inédito movimiento de pequeños y medianos productores, empeñados en controlar la transformación primaria y la comercialización de sus cosechas a través de empresas asociativas. La confrontación de dos grandes proyectos de organización económica —uno social y otro privado— es clara en la copra y en el café, donde predominan los pequeños productores. Lo es menos en la silvicultura, pues aunque 60% de los bosques guerrerenses son ejidales o comunales, los poseedores directos difícilmente pueden desarrollar por su cuenta la explotación comercial del recurso. Así, de los años cuarenta a los sesenta, es evidente el proceso de privatización y constatable la resistencia de los pueblos. Sin embargo, las comunidades dueñas del bosque no desarrollan un modelo autogestionario de aprovechamiento silvícola.

En Atoyac, la confrontación ocurre en el ejido serrano de San Vicente de Jesús, que en 1953 firma una concesión a favor de la Compañía Maderas Papanoa, propiedad del influyente Melchor Ortega⁷⁶. En 1955 la empresa abre una brecha e instala el campamento silvícola, pero en 1961 se cancela el contrato por incumplimiento por parte de la compañía. Se expresa en esto la voluntad de los pueblos serranos, pero

también los abruptos cambios de gobernador y los vaivenes de la política federal. Así, por ejemplo, Miguel Alemán entrega numerosas concesiones forestales — entre ellas la de Maderas de Papanoa — mientras que López Mateos hostiga a Melchor Ortega y expropia la empresa, misma que Díaz Ordaz reprivatizará, bajo la nueva razón social de Maderas del Río Atoyac.

Pero aun con las fluctuaciones sexenales, la tendencia a la privatización es dominante. A principios de los setenta las cuatro quintas partes del área forestal de la Costa Grande están en manos de unas cuantas empresas, entre las que destacan: Chapas y Triplay, S.A. — administrada por Nacional Financiera, S.A. desde 1967 —, Celulosa del Pacífico, S. A. — filial de Industria Forestal del Poniente, S. de R.L. — y Silvícola Industrial, S. A. — asociada con la Fábrica de Papel San Rafael y con Loreto y Peña Pobre.⁷⁷

Capítulo sexto

Una insurgencia cívica acorralada

Fue allá en Guerrero, señores,
donde se prendió la mecha;
ayer con los zapatistas,
hoy con los vázquez-rojistas.

Zapata dijo a su gente:
“al gobierno hay que acabar”
Genaro proclama ahora:
“el sistema hay que cambiar”.

Reunido ya todo el pueblo,
se cansaron de pedir
y vieron que por la buena
el opresor no iba a oír.

Y a la sierra remontaron
en busca de un gran cuartel
y desde entonces se encuentran
luchando hasta vencer.

Corrido de Genaro Vázquez

EN LOS AÑOS SESENTA, LA MAYORÍA de los guerrerenses ha nacido y vivido siempre bajo el imperio del PRI. Predomina en el estado —como en el país— una generación

educada en el poder monolítico, que ni siquiera conoció la corta primavera civilista de la inmediata posrevolución, una hornada de mexicanos para quienes política es una mala palabra.

En el medio siglo, la lucha gremial de los copreros y cafetaleros había arrancado como un entusiasta movimiento de base, tan independiente del PRI y la CNC, como del Estado, y con una clara vocación autogestionaria. Pero al incursionar en la política realmente existente, las uniones sustituyeron la prédica autonomista por el más crudo oportunismo corporativo. El manejo de los agrupamientos sociales como paquetes de votantes cautivos, el regateo por las cuotas de poder y el control patrimonial de las organizaciones y sus recursos por las cúpulas autonombradas, envenenaron al ambiente democrático de los tempranos años cincuenta, conformando un sórdido neocaciquismo, de pretensiones modernas pero rancios métodos gangsteriles. Envilecidas las organizaciones, se cancela también el proyecto autogestionario y la burguesía compradora regresa por sus fueros económicos y políticos.

A principios de los sesenta, tanto las experiencias históricas como las recientes, arrojan saldos despolitizadores. Militar por convicción, votar libremente y poder ser elegido sin entrar en componendas, son prácticas inconcebibles, suplantadas a diario por la siniestra polaca.

En estas condiciones, la emergencia cívica guerrerense de los sesenta resulta un acontecimiento sorprendente, cuyo arranque —turbio y politiquero— cumple la insoslayable función de desembotar la conciencia ciudadana y soltar las amarras de la insurgencia popular.

El ciudadano no nace, se hace. Y en Guerrero su construcción es lenta, sinuosa, abigarrada. A fines de 1960, las zacadillas con que el gobernador fuerza la renuncia de Jorge Joseph a la Presidencia municipal de Acapulco, ratifican la acendrada convicción popular de que los cambios políticos sólo pueden venir de rencillas y reacomodos en el sórdido olimpo del poder. La caída de Joseph es vista como un episodio más en la larga pugna entre Caballero Aburto y Miranda Fonseca por el control del estado. Y si el gobernador había utilizado las justas demandas de maestros y empleados municipales para defenestrar al alcalde, todos saben que la mano del secretario de la Presidencia está detrás de las numerosas manifestaciones antiaburtistas de 1960.

Paradójicamente, la convicción de que tras el movimiento subyacen los intereses de grandes caciques de la política nacional, lejos de inhibir la participación popular, la estimula. Los estudiantes, colonos y campesinos que abuchean al gobernador en multitudinarias manifestaciones, se saben respaldados por Miranda Fonseca, y si confían en el triunfo no es tanto por la justeza de su causa como por el peso y las influencias que le atribuyen al político que los apadrina. En los primeros meses, el movimiento antiaburtista parece consciente de su calidad de comparsa en una confrontación turbia y personalizada; lo que no le resta pasión a la lucha ni le quita convicción a las demandas.

En 1960 se constituye el Comité Cívico Guerrerense (CCG), variopinta convergencia de los más diversos antiaburtismos. Predominan los priístas descontentos o marginados, pero participan también los militantes del Partido Popular Socialista (PPS) y del POCM, así como algunos miembros

del PCM. Igualmente están representadas las corrientes democráticas —o cuando menos antiaburtistas— de los principales sectores sociales organizados: copreros, cafecultores, ajonjolineros, tejedores de palma. Finalmente aportan un gran contingente los estudiantes, y en particular los de la recién constituida Universidad de Guerrero. Los objetivos del CCG se resumen en una escueta fórmula: restituir a su cauce la revolución traicionada por Caballero Aburto.

EN OCTUBRE LOS ESTUDIANTES de la Universidad de Guerrero se lanzan a una lucha contra el rector y la ley orgánica y por un aumento en el patrimonio de la institución. En torno al movimiento se alinean los contingentes políticos, y mientras el acosado Caballero Aburto ordena al 24 Batallón de Infantería el cerco de la Universidad, el CCG apoya a los estudiantes y exige la caída del gobernador. Se suman a esta demanda organizaciones sectoriales de filiación priísta como el Frente Zapatista, la Unión de Auténticos Copreros, la Federación de Estudiantes Universitarios⁷⁸, entre otras. Más significativa aún es la participación de ayuntamientos, como los de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Zumpango del Río, Taxco, Apango, Huitzuc y Tenango del Río. La población de Tierra Colorada depone al cabildo de filiación aburtista, mientras que en Iguala y Atoyac hay fuertes movilizaciones en contra de Caballero Aburto y de los alcaldes que lo respaldan. Por momentos el movimiento cívico guerrerense aparece como una rebelión de los municipios contra el gobierno estatal. Lo que es posible, pese a no haber antecedentes cercanos de democracia municipal, debido a

que la ruptura en el sistema pone en manos de la oposición numerosos cabildos de origen institucional.

El 30 de diciembre el ejército dispara contra la población en Chilpancingo y los quince muertos son la contribución de sangre necesaria para inclinar definitivamente la balanza contra Caballero Aburto. El 4 de enero la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decreta la desaparición de poderes y nombra como gobernador sustituto a Arturo Martínez Adame. Se trata de un simple reacomodo dentro del régimen establecido, pero por un tiempo se crea un vacío de poder, y en los municipios donde el cabildo se la había jugado con Caballero Aburto, la población ocupa las alcaldías imponiendo en la práctica ayuntamientos populares.

El curso del movimiento en Atoyac es representativo del antiaburtismo municipal⁷⁹. Pese a que Raúl Galeana había llegado a la alcaldía como líder cafetalero y a través de una lucha contra la imposición, su franca filiación aburtista lo enfrenta a la mayoría de sus coterráneos. Los mítines citados por el Frente Reivindicador de Juventudes Guerrerenses — como el del 25 de septiembre que congrega a 600 personas — son tan hostiles al gobernador como al alcalde.

Conforme se acerca el fin del año el movimiento va alzando la voz. Acosado, Galeana entra en la misma dinámica que el gobernador y reprime a discreción. El 11 de diciembre una marcha convocada por el Frente Revolucionario Zapatista es agredida por la Policía municipal. Hay un herido de bala y decenas de detenidos. Pero el mitin no se dispersa, prolongándose hasta la media noche en que son liberados los presos, entre ellos Lucio Cabañas, joven nacido en el pobla-

do de El Porvenir y estudiante de la Normal de Ayotzinapa. Al día siguiente la gente se manifiesta de nuevo exigiendo la desaparición de poderes en el estado y en el municipio, y llamando a una huelga de pago de impuestos.

Al saber de la masacre de Chilpancingo, el pueblo de Atoyac, indignado, se lanza a la calle y los síndicos Rosendo Téllez, Luis Cabañas y Félix Roque deponen al alcalde, sustituyéndolo por un consejo encabezado por el primero. En el arranque de 1961 las aguas están revueltas: el líder de las Juventudes Guerrerenses de Atoyac es detenido; el comercio cierra en respaldo a la lucha. Al conocerse la desaparición de poderes del 4 de enero, Galeana —de hecho ya desconocido— presenta formalmente su renuncia y el 8 del mismo mes los cívicos, encabezados por Téllez, Cabañas y Roque, ocupan el Palacio municipal. El día 14, el movimiento popular, liberado de sus amarras institucionales, llega a su punto más alto. En medio de una gran concentración, en la que destacan por su beligerancia las plaseras organizadas en la Unión del Pequeño Comercio, el Consejo Municipal de los cívicos toma posesión de la alcaldía por sus propios fueros y sin aval ni participación de autoridad formal alguna. El tono discursivo es naturalmente fogoso: “¡Esta lucha [es] de los huarachudos no de los privilegiados!”⁸⁰

Pero la democratización, por la libre, de las comunas, no está en el *script* del nuevo gobernador. Martínez Adame no acepta la renuncia de Galeana y el 24 de enero la policía municipal retoma violentamente la alcaldía. Para mantener el orden se envían fuerzas federales a patrullar la población. Por fin, el 22 de febrero, el gobierno estatal tiene que reconocer al consejo encabezado por Téllez.

Los cívicos han llegado a la alcaldía sin programa constructivo ni más cohesión que el común antiaburtismo, de modo que, cuando el poder se les viene encima, emergen todas sus miserias y debilidades. La pugna entre Rosendo Téllez y Luis Cabañas divide irreconciliablemente al cabildo, y por un tiempo hay dos ayuntamientos. Magnífica excusa para que el gobernador envíe al jefe de la policía judicial a restablecer el orden. Del 20 de abril al 3 de junio, el comandante Espetia asume el poder municipal, con suspensión de garantías, lo que justifica detenciones arbitrarias, secuestros y torturas. Por fin, seis meses después del triunfo, el consejo de los cívicos toma posesión del cabildo, de forma más o menos armónica y encabezado ahora por Félix Roque.

Pero la armonía dura poco tiempo. Al año siguiente, Roque, otro síndico y el comandante de la Policía municipal, son consignados por extorsión. Le habían quitado un reloj a un raterillo detenido, quien a su vez se lo había arrebatado en Acapulco al expresidente Miguel Alemán. Para desgracia de los pequeños funcionarios deshonestos, se trataba de un inconfundible y carísimo Patek Philippe Gubelin.

La reforma municipal no consiste en un simple cambio de personas; tiene sus bemoles y, por sí misma, la llegada de los cívicos al cabildo no elimina los vicios de la administración pública. Pero no todo son tinieblas; a mediados de 1960 y como respuesta a la demanda de vivienda del Movimiento de Colonos encabezado por Roberto Arceta Fierro, el cabildo cívico decide entregar a los vivos los terrenos municipales destinados originalmente a un nuevo panteón. Las modestas placeras de la Unión del Pequeño Comercio son las principales beneficiarias de la nueva colonia Mártires de Chilpancingo.

Paralelamente comienzan a estructurarse de modo formal los sectores que, con mínima organicidad, habían participado en el movimiento contra Caballero Aburto. En diciembre de 1961, Atoyac es escenario de una gran convención de alumnos de escuelas de segunda enseñanza, en donde se constituye la Federación de Estudiantes Guerrerenses. En febrero de 1962, en la comunidad de Boca de Arroyo — tierra del líder agrarista Feliciano Radilla —, se lleva a cabo un congreso regional del CCG con la participación de representantes de siete municipios de la Costa Grande, desde Acapulco hasta La Unión.

En el mismo lapso tiene lugar el ya muy pospuesto alzamiento insurreccional de los restos de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano que encabeza el general retirado Celestino Gasca⁸¹. Lo que en el supremo *jefe* Gasca es infantilismo político, o simple traición, para las bases comprometidas de *federacionistas leales* es cosa seria; de modo que el saldo del irresponsable llamado a las armas del 15 de septiembre de 1961 es de “cien muertos y más del doble de heridos, así como [...] mil encarcelados provenientes de cincuenta ciudades de la República”⁸². Llama la atención la presencia de algunas fuerzas gasquistas en los municipios de Tecpan, Petatlán, La Unión y Atoyac. Federacionistas juramentados cuya presunta insurrección justifica el encarcelamiento de 71 personas y un amplio despliegue militar en toda la Costa Grande. Ocasiona también la visita a la región del secretario de la defensa, quien ordena construir una base aérea en Zihuatanejo. Está por hacerse la historia del gasquismo guerrerense y de sus posibles relaciones con el movimiento cívico, pero no parece casual el que ambos ha-

yan tenido una presencia destacada en la Costa Grande. Lo cierto es que el abortado alzamiento de los federacionistas leales da pie para un mayor despliegue de las fuerzas armadas y una creciente militarización de la vida social. Fenómenos recurrentes en la Costa Grande que llegarán a extremos dramáticos a fines de la misma década.

Como en todo Guerrero, en la Costa Grande el movimiento que derriba a Caballero Aburto es tan iracundo como turbio y abigarrado. La caída del gobernador es un logro de la lucha popular, pero es también un acto del tradicional canibalismo político a la mexicana, propio de un régimen unipartidista que sólo puede renovarse mediante cruentas batallas intestinas. Los guerrerenses se desembarazan de un jefe del ejecutivo tosco y atrabiliario, pero también de un gobernador advenedizo que en su afán de legitimarse había favorecido el desarrollo de las organizaciones gremiales de copreros y cafetaleros; aunque igualmente había propiciado su corporativización. Lejos de traer la democracia a los gremios, el cambio en la gubernatura le da la puntilla a las uniones campesinas, pues Caballero Aburto había tratado de frenar con ellas a la poderosa burguesía comercial, que le era hostil, y en cierto sentido la caída del gobernador es también un triunfo del cacicazgo tradicional, del que Miranda Fonseca es empeñoso paladín.

Pero la breve rebelión antiaburtista sirve, cuando menos, para sacudir el adormilado espíritu cívico guerrerense. Y la abrupta expulsión del equipo gobernante crea vacíos de poder y alimenta expectativas democráticas. La primera tarea del gobernador sustituto, Martínez Adame, es enfriar los ánimos populares y restablecer el orden social revirtiendo

los excesos libertarios. Durante su gestión, el sector de los cívicos más oportunista y carente de propuesta reformadora se reincorpora alborozado al sistema y al presupuesto. El núcleo más honesto del CCG, en cambio, ratifica sus demandas democráticas insatisfechas, y ante la evidente insuficiencia de la algarada cívica como táctica liberadora, esboza una estrategia de carácter electoral por fuera del partido en el poder.

La transmutación de una corriente institucional, mayoritariamente priísta y sólo circunstancialmente opositora, en una agrupación política independiente y plural, dispuesta a actuar al margen del grupo en el poder, se desarrolla en Guerrero al calor de la coyuntura local. Pero al mismo tiempo, en el plano nacional se está conformando una convergencia democrática de índole semejante. A raíz de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, realizada en México en marzo de 1961, y al amparo del nuevo paradigma antiimperialista encarnado por la joven revolución cubana, se forma en México el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Como el encuentro del que nace, el MLN se alimenta de la contundente presencia del expresidente Lázaro Cárdenas, quien rompiendo un silencio político de veinte años que le valiera el apodo de “La esfinge”, retoma las banderas del nacionalismo revolucionario, en lo que constituye la primera ruptura importante de la revolución hecha gobierno. Fractura profunda, pues a diferencia del delahuertismo de 1923-1924, el escobarismo de 1929 y el henriquismo de 1951, el movimiento alentado públicamente por Cárdenas en 1961 no es simple oposición de presidenciables resentidos.

dos. Sin duda el carisma del general desempeña un papel relevante, pero aun así el MLN tiene un carácter más programático que personalista.

El CCG, ahora convertido en Asociación Cívica Guerrense (ACG), asiste a la Conferencia Latinoamericana, aunque no participa formalmente en la constitución del MLN. Sin embargo, en muchos sentidos, la fuerza que en Guerrero rompe con el monolitismo priísta, puede verse como expresión local de la misma corriente cívica que el MLN representa en el plano nacional; con la particularidad de que los nuevos demócratas guerrenses actúan en una perspectiva electoral y estiman que en diciembre de 1962 podrán lograr en las urnas lo que no consiguieron por la lucha callejera dos años antes, en diciembre de 1960.

En 1961, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había declarado la desaparición de todos los poderes en el estado de Guerrero. Las elecciones de 1962, son entonces triplemente decisivas, pues en ellas se renueva, íntegro, el equipo gobernante de la entidad. El PRI lanza para gobernador a Raimundo Abarca Alarcón, candidato gris y sin más mérito que el apoyo de Miranda Fonseca. En general, la composición de las planillas del institucional revela a las claras que tras la caída de Caballero Aburto, quien manda en Guerrero es el poderoso secretario de la Presidencia.

Por su parte, la ACG participa con candidatos propios en la lucha por las alcaldías de setenta municipios, contiene por las diputaciones en todos los distritos, y para la gubernatura lanza a José María Suárez Téllez, un político cuya trayectoria refleja puntualmente la índole peculiar de la corriente a la que representa. Maestro normalista, empleado

administrativo de la Comisión Local Agraria de Iguala en 1921, militante del Partido Nacional Agrarista por los mismos años, Suárez Téllez entra en 1927 al PCM, del que sale trece años después para ingresar al PNR; pero en 1945 se la juega de nuevo con los marxistas disidentes, participando en la Alianza Socialista Unificada de la que nace el POCM. En el ámbito social es fundador radicalizado del Frente Zapatista, lo que no le impide militar en la CNC por lo menos hasta 1960. Don José María es también, un hombre honesto, de modo que su intrincada trayectoria y la ubicuidad de sus posturas políticas, no son malabarismo oportunista sino testimonio de un desgarramiento: el que conmueve a los miembros de la corriente que —dentro de la revolución hecha gobierno— trata de reivindicar tanto el nacionalismo revolucionario como la democracia política y social.

La campaña de la ACG es un vehemente alegato por la democracia, que delinea el perfil político de los nuevos cívicos ya purgados de mirandistas y otros opositores de ocasión. El recorrido se inicia en Ixcateopan, en un transparente afán de asociar su lucha con el símbolo nacionalista de Cuauhtémoc, y el primer discurso de Suárez Téllez ratifica el *leit motiv* de la ACG y documenta la rimbombante oratoria de los cívicos: “Preferimos hundirnos en las sombras del no ser, a perder, ignominiosa e indefinidamente, el inalienable derecho a elegir nuestros gobernantes”⁸³.

Genaro Vázquez, principal dirigente de la ACG, manifiesta en una entrevista la confianza de los cívicos en el éxito electoral:

Tenemos la seguridad de triunfar en las elecciones porque el pueblo está con nosotros [...]

Desde el día 25 no nos sacarán de Chilpancingo, sino hasta dentro de seis años; ya lo verán, y nuestro candidato sí se sentará en el sillón gubernamental⁸⁴.

No sucedieron así las cosas, y la amarga experiencia de 1962 marcó el futuro de Genaro Vázquez, de la ACG y del pueblo de Guerrero.

El 3 de diciembre, un día después de los comicios, las declaraciones de los cívicos todavía son optimistas: “Nos complace informar que a pesar de las múltiples maniobras puestas en juego por los integrantes de las casillas electorales, en su totalidad miembros del PRI, los candidatos [de la ACG] lograron abrumadora mayoría de votos”⁸⁵. Dos días después Suárez Téllez es arrestado junto con otros candidatos y dirigentes de la ACG. Las movilizaciones de protesta son reprimidas, y el 30 de diciembre en Iguala, el ejército dispara contra la población con saldo de siete muertos, 23 heridos y 280 detenidos. Con la masacre como telón de fondo y veinte mil soldados cuidando el orden, los candidatos del PRI asumen sus cargos; y lo hacen sin más trámite, pues no hay cámara de representantes que califique las elecciones. La revista *Política* describe así la situación:

Fuerzas del Ejército y de la Policía impiden reuniones públicas y protegen a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, impuestos con ayuda de las bayonetas y del fraude electoral (en algunos casos ni siquiera se realizó la votación, y en otros todo el proceso electoral fue

manejado por los propios candidatos del PRI, quienes, naturalmente, se las ingeniaron para salir triunfadores)⁸⁶.

El asesinato de la civilidad en ciernes es igualmente brutal en los microcosmos regionales y municipales. En Atoyac, Suárez Téllez había hecho un discurso de campaña particularmente significativo:

Dirán, los que están presenciando este acto: “allí está un loco rodeado de otros que lo acompañan”. Efectivamente estamos locos, pero por defender la causa de nuestros derechos ciudadanos, para que no sean burlados por el espantapájaros del PRI, que trata de imponernos sus candidatos. De igual forma como yo, empezó otro hombre chaparrito, don Francisco I. Madero [...] se reían y se burlaban [...] pero al fin todo se derrumbó [...] Tratamos de hacer lo mismo en Guerrero⁸⁷.

Los cívicos de Atoyac apoyan a Téllez para gobernador y para presidente municipal sostienen la candidatura de Bertoldo Cabañas. Su contendiente por el PRI es Luis Ríos Tavera, quien ya había sido precandidato por el Institucional en 1959, cuando fue desplazado por el también priísta Raúl Galeana, protegido del gobernador Caballero Aburto. La reaparición política de Ríos Tavera es un claro indicio local de que el mirandismo ha recuperado el poder en Guerrero.

En Atoyac los cívicos controlan la alcaldía y el comité electoral municipal, situación excepcional y peligrosa para

el PRI, que el gobernador Martínez Adame se encargará de corregir cesando a los anteriores funcionarios electorales y nombrando en su lugar a tres distinguidos militantes del Institucional. Oportuna medida, que el día de las elecciones le permite al invencible controlar las urnas y el ulterior recuento de votos. No sin algunos incidentes menores como los que describe el cronista local Wilfrido Fierro, de insospechable militancia institucional:

Al principio de la votación los cívicos instalaron sus casillas con documentos [...] sellados por la Presidencia Municipal [...] por instrucciones de Felicitas Godoy Cabañas y la señorita Elizabeth Flores Reynada, quienes trataron de hacer valer un nombramiento como miembros del Comité Estatal Electoral, mismo que les fue cancelado al recibir un cese fulminante antes de los comicios. El delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor Castillo Monroy, enviado especial para vigilar el proceso electoral, levantó las casillas de los cívicos por estar obrando fuera de la ley [...] Por fortuna no hubo novedad que lamentar, la votación se desarrolló pacíficamente⁸⁸.

La paz no dura mucho. Tres días después, los cívicos salen a la calle exigiendo la nulidad de las elecciones, mientras las fuerzas del 32 batallón de infantería patrullan la ciudad. La demanda no prospera, y al día siguiente la junta computadora informa de la mayoría obtenida por Abarca Calderón y anuncia el arrollador triunfo de Ríos Tavera en la locali-

dad. El 8 de diciembre, un mitin de la ACG que se realizaba en San Jerónimo, a pocos kilómetros de Atoyac, es disuelto por el Ejército, que detiene a cincuenta personas entre ellas todos los líderes presentes. El día 13 es encarcelado el ex-alcalde y dirigente cívico Luis Cabañas. El 26, el secretario de la Defensa, general Agustín Olachea, visita la ciudad al tiempo que las tropas del 32 batallón expulsan al cabildo saliente de la ACG y ocupan el palacio municipal. El 31, los cívicos tratan, sin éxito, de recuperar la alcaldía. El primero de enero Ríos Tavera toma posesión entre soldados. Al día siguiente denuncia ante el ministerio público la pérdida de dos máquinas de escribir del municipio, así como “haber encontrado en uno de los archiveros una bandera con el emblema ruso (la hoz y el martillo)”⁸⁹. Y la venganza no termina ahí: pocos meses después el alcalde ordena la demolición de los insalubres puestos del mercado, pertenecientes a las plaseras cívicas de la Unión del Pequeño Comercio.

En 1963, Atoyac, Tecpan y San Jerónimo, entre otros municipios, son ocupados por el Ejército y padecen de nueva cuenta las prácticas de tierra arrasada, saqueo y tortura a cuya cíclica repetición parece estar condenada la Costa Grande. Bajo el título de terror en Guerrero, una denuncia firmada por el Frente Electoral del Pueblo, describe así la situación:

Soldados regulares, por cientos, en vehículos blindados, se han venido dedicando durante los meses de marzo y abril a arrasar poblados. Entre otros, la Gusanera, Papanoa, Santa Lucía, del municipio de Tecpan de Galeana, en la Cos-

ta Grande; San Nicolás, Llano Grande, Contepec de los Costales, San Luis Acatlán, La Barra y otros, en la Costa Chica.

Tan sólo en los tres últimos poblados citados se encontraron más de 400 viviendas arrasadas por los vehículos militares e incendiadas por la tropa, habiendo quedado en el desamparo más de dos mil familias.

La “victoria” de los militares fue sellada con la aprehensión de docenas de campesinos, con los golpes y el maltrato para las víctimas — mujeres y niños inclusive — por el “delito” de haber militado en la oposición política.

Por último, el asesinato y la tortura fueron los instrumentos preferidos por los militares, en contra, entre otros, de José Hernández y Juan Barrientos, campesinos de la Costa Grande, de Hacienda Cabañas [...] Un dirigente cafetalero de apodo “El Tabaco”, del poblado de Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, fue torturado en marzo con la más extrema sevicia: se le arrancaron los testículos y la lengua, para hacerle confesar que “guardaba armas” y por último se le asesinó abriéndole el cuerpo en canal. Este crimen nefando lo cometieron soldados al mando del coronel Olvera Fragoso.

Ésta es, pues, la relación escueta de las “tareas” cumplidas por los 20 mil soldados destacados en el estado de Guerrero para mantener el orden.⁹⁰

Los guerrerenses han refrendado una sabida lección: en el reino de la revolución hecha gobierno, votar no paga dividendos. A fines de 1960 tumbaron a un gobernador despótico mediante una algarada social; dos años después votaron civilizadamente por la democracia y consiguieron un baño de sangre. Conclusión obligada: en México la lucha comicial es contraproducente. Y si las urnas son estériles, ¿entonces qué? ¿Qué hacer si al candidato que gustaba de compararse con Francisco I. Madero, lo meten a la cárcel por haber ganado las elecciones? La ACG saca la cuenta y extrae la única lección posible del contundente saldo rojo: “el voto... es una engañifa”. En una reunión de dirigentes, celebrada en Iguala en octubre de 1963, Genaro Vázquez Rojas —maestro normalista, expriísta, fundador del CCG y presidente de la ACG— presenta un informe justamente titulado “La Nueva Ruta”:

El movimiento revolucionario tiene que [...] esclarecer a la clase obrera y los campesinos pobres que el camino electoral no resuelve sus problemas, que el voto universal y secreto es una engañifa de la burguesía [...] En este período [...] es necesario difundir los ideales [...] de la revolución popular, que no significa cambios de personas al frente del gobierno de la burguesía, sino el cambio radical del régimen político y económico, la instauración de un gobierno democrático y popular [...] primer paso al socialismo; estos objetivos no pueden sustituirse con una posi-

ción electorera [...] tampoco por votación puede acabarse la lucha de clases y destruirse el Estado burgués que padecemos⁹¹.

Finalmente, en un manifiesto de agosto de 1964, la ACG ratifica su nueva ruta y plantea la “formación de comités de lucha clandestinos [...] para asegurar la continuidad de la lucha popular⁹².”

Los cívicos ya no quieren elecciones, quieren revolución. Mas no por ello se apartan del movimiento gremial; pese a sus llamados a la clandestinidad, la ACG sigue impulsando la organización de los sectores sociales, y en abril de 1966 llama a constituir el Consejo de Autodefensa del Pueblo, coordinadora a la que se integran la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata; la Unión Libre de Asociaciones Copreras; la Asociación de Cafecultores Independientes; la colonia 24 de Febrero de Iguala; y la propia ACG. El consejo quiere ser una organización “amplia” y plural en la que quepan “desde el radical revolucionario hasta el más sincero creyente religioso”⁹³, y se aglutina en torno a un programa mínimo de siete puntos, entre los que destacan la defensa de las libertades democráticas conculcadas por el actual régimen, el reparto de los latifundios y el rescate de las riquezas madereras, y “la aplicación de la Reforma Agraria Integral”.

Con esto, la ACG trata de ahorrarse los costos en aislamiento social que acarrea el maximalismo. Así, pese a su fundado descreimiento cívico, y a que en la nueva ruta la revolución ocupa el lugar de los comicios, siguen alentando la lucha gremial reivindicativa.

En particular, la ACG tiene un fuerte arraigo rural. Comparte su fuerte presencia en el campo con el PCM. La Liga Agraria del Sur de filiación cívica, y los campesinos vinculados a los comunistas, convergen temporalmente en la Central Campesina Independiente (CCI), coordinadora nacional fundada en abril de 1961. Pero a fines de 1964, la central se divide y los cívicos siguen a la fracción del exgobernador de Baja California, Braulio Maldonado, pues la corriente que encabeza Ramón Danzós está identificada con el PCM, partido con el cual la ACG tiene fuertes diferencias políticas. En consecuencia, durante los años sesenta el movimiento campesino autónomo del estado de Guerrero se bifurca en dos tendencias contrapuestas y a veces antagónicas: la de militancia cívica y la que patrocina el PCM.

En la Costa Grande, la resaca que sigue al descalabro electoral de 1962-1963, es una versión a escala regional de lo que sucede en el conjunto del estado. Quizá por los tropiezos de la administración municipal cívica, durante 1961 y 1962⁹⁴, en Atoyac el movimiento social independiente está más cerca del PCM que de la ACG. En abril de 1963, en el poblado de El Ticuá, la CCI realiza un Congreso Agrario en el que también participan representantes del MLN y del Movimiento Revolucionario del Magisterio que encabeza el maestro comunista guerrerense Othón Salazar. En ese mismo año tienen lugar una asamblea y varios mítines convocados por el Frente Electoral del Pueblo (FEP), organismo ciudadano animado por el PCM que participa sin registro en las elecciones presidenciales de 1964 sosteniendo la candidatura del dirigente campesino Ramón Danzós Palomino. El discurso y los programas de la CCI y del FEP son indudable-

Guerrero bronco mente democráticos, pero los cívicos no sólo se oponen a la campaña electorera del frente; también toman distancia de las acciones promovidas por la central campesina. Así, en abril de 1964, cuando la CCI organiza en Atoyac un segundo Congreso Campesino de la Costa Grande, el líder cívico de Tecpan, Antonio Sotelo, convoca a un mitin paralelo donde las críticas al gobernador Abarca Alarcón son sólo una excusa para denunciar virulentamente a la CCI. Sin embargo, pese al encono, se puede constatar que los planteamientos reivindicativos de unos y otros son prácticamente idénticos. El congreso de los comunistas denuncia:

...que el café y la copra están a merced de los acaparadores, quienes pagan bajos precios [...] Que el banco de Crédito Agrícola S. A. no refacciona a los campesinos cuando estos lo solicitan (...) Que las compañías madereras explotan y talan los montes despiadadamente sin dejar ningún beneficio.

Por su parte el mitin cívico reclama que el gobernador “está en contubernio con los dirigentes copreros para esquilmar al campesino productor de copra, pagándole a precios bajos por sus cosechas”⁹⁵.

Inesperadamente, en 1965 comienzan a soplar de nuevo aires de democracia municipal. No los inspiran los cívicos, convencidos desde 1963 de que “el voto es una engañifa”; tampoco el PCM, cuya experiencia con el FEP ha sido poco alentadora; difícilmente el PAN, casi ausente en Guerrero, y menos el PPS o el PARM, de clara vocación paraestatal.

Paradójicamente, los nuevos vientos cívicos soplan desde el partido del poder, pues de noviembre de 1964 a diciembre de 1965 preside el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Carlos Alberto Madrazo, un político de convicciones reformadoras y frases incendiarias:

Una gran inquietud sacude a la República [...] El pueblo tiene hambre de pan, pero [...] también de [...] ser tomado en cuenta para determinar el rumbo del país. Las fórmulas políticas establecidas desde hace treinta y ocho años ya no tienen vigencia. La realidad reclama nuevos sistemas y, o los creamos, o el torrente de la vida rebasará el cauce en que queremos encerrarlo⁹⁶.

Sostenía también, y desde la cúpula del partido del poder, verdades tan incómodas como ésta:

En el aspecto económico, al conjuro del ideal revolucionario, surgen escuelas, caminos, agua potable [...] Pero en cambio en el aspecto político nuestro sistema ha rebasado trabajosamente Huitzilac, pero no ha podido salir de la década de los veinte⁹⁷.

Y proponía definiciones inobjtables, pero que resultaban soliviantadoras en un partido formado por sectores corporativos y asumido como apéndice del poder: "Nuestro partido no es un órgano, es un organismo [...] cuya célula vital es el ciudadano"⁹⁸. Hombre consecuente, Madrazo trató de impulsar inquietantes reformas democráticas en los esclerosados sistemas de elección interna del PRI. En la IV Asamblea Nacional, de abril de 1965, se cambiaron los estatutos:

En materia política — escribe Madrazo — se establecieron normas para hacer imposible la imposición de las autoridades municipales⁹⁹.

Las asambleas en cada sección serían simultáneas, la votación recogida allí mismo tenía que declararse en presencia de todos y, como esto se hacía en todos los lugares del municipio al mismo tiempo, era obligatorio declarar triunfante al candidato electo. Es decir, la tendencia era democratizar la elección municipal, como primer paso de una trascendente reforma política, dejando todavía intocado el tema de diputados y gobernadores¹⁰⁰.

Madrazo tiene que renunciar a su cargo en noviembre de 1965 y la abolición de las cuotas de poder y del “palomeo” se queda en veremos. Sin embargo, el nuevo sistema se aplica en 1 500 municipios, entre ellos los de Guerrero.

En abril de 1965 la “reforma política” toca tierra en Atoyac. Democratizar la estructura priísta es el primer paso, de modo que el día 5 de ese mes, los diputados federales reúnen a los sorprendidos representantes de los “tres sectores”, para formar las comisiones encargadas de realizar asambleas comunitarias, donde se deberán elegir democráticamente los comités seccionales, mismos que a su vez escogerán al comité municipal, para que éste, reunido en Chilpancingo con sus semejantes, nombre libremente al Comité Ejecutivo Estatal.

Luego de veinte días de intenso activismo democrático, se realiza en el cine Álvarez y presidida por el delegado del Comité Ejecutivo Estatal, la esperada asamblea de comités seccionales, que deberá elegir a la directiva municipal.

En la citada reunión no hubo elecciones —escribe el priísta pero puntilloso cronista de Atoyac— y el Delegado solamente dio a conocer a los asistentes los nombramientos [...] que había acordado el partido, recayendo en el profesor Manuel García Cabañas [la presidencia del] Comité Ejecutivo Municipal¹⁰¹.

Por lo visto el tenaz palomeo se resiste a desaparecer. Pero si a la postre los métodos para designar a la directiva partidaria municipal no resultan en absoluto democráticos, en cambio la elección de candidatos del PRI al ayuntamiento arranca bien y promete pluralidad. En agosto empiezan a hacer proselitismo tres pretendientes: Antonio Paco Leyva, de la Unión de Cafeticultores; Manuel García Cabañas, quien para ello renuncia a la Presidencia del Comité Ejecutivo Municipal, y Benito Noguera Fierro. Las campañas son tan intensas como civilizadas, y poco antes de las elecciones internas se realiza un cordial mitin conjunto con la presencia de un delegado del CEN.

Les prometo que en esta justa cívica no habrá consignas —dice el enviado— se dejarán todos los derechos al voto popular, porque ésa es la tónica delineada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, licenciado Carlos A. Madrazo¹⁰².

El 31 de octubre se realizan las elecciones internas, que al parecer gana de calle García Cabañas. De inmediato No-

gueda Fierro y Paco Leyva se inconforman, apoyados por los representantes de los tres sectores, quienes en una carta de protesta dirigida al CEN del PRI, denuncian “fraude electoral” en la zona cafetalera.

Pese a todo, la cúpula del partido sostiene a Cabañas, quien a la postre es el candidato del institucional en unas elecciones tan desoladas como controvertidas. En las cuatro casillas de la cabecera se contabilizan 105 votos efectivos, frente a 3 549 empadronados, lo que representa una abstención de 97%. Pero si la votación es raquítica, el recuento es turbio y accidentado: la junta computadora se instala y se suspende por falta de *quorum*; desaparecen las urnas; el secretario general del comité municipal priísta y síndico del cabildo saliente, denuncia los “fines perversos”¹⁰³ de la maniobra y termina destituido. Finalmente, García Cabañas es declarado electo — con menos votos de los que tuvo en los comicios preliminares — y el primero de enero toma posesión.

Cuando menos en Atoyac, ha quedado claro que gracias a su reforma política los priístas ya no necesitan oposición para practicar el fraude y hacer de las elecciones una ignominiosa rebatinga. La temporal suspensión de los métodos verticales y autoritarios en la asignación de cuotas de poder, no instaura la democracia; introduce la ley de la selva. Y los pleitos de familia resultan aún mas ásperos que la confrontación con los francos opositores políticos. Pero además, todo esto acontece en el desolado reino de la abstención y al margen de las mayorías ciudadanas; es una comedia electoral protagonizada por tres o cuatro caciques y sus más cercanas clientelas.

Y mientras la mentada reforma política del PRI no pasa de los gritos y los sombrerazos, la mayoría de los escamados costeños le siguen dando la espalda a los comicios. La democracia no ha muerto, sólo que marcha por otros rumbos: el pueblo no vota, pero lucha por sus demandas económicas inmediatas, y si no reivindica el municipio libre, sí sale a la calle para pelear por las módicas libertades cotidianas.

Algunos líderes de la nueva emergencia social se identifican con los cívicos y otros con los comunistas; pero las bases, y a la larga también el movimiento todo, convergen en su oposición al gobierno estatal y a sus personeros municipales. Como antes Caballero Aburto, Abarca Alarcón y sus alcaldes catalizan el odio popular. Y como siempre, los maestros normalistas son los principales animadores de la lucha.

En Atoyac, los más conspicuos agitadores son Lucio Cabañas y Serafín Núñez —profesores de la escuela federal Modesto Alarcón— y el mitin del 14 de junio de 1964 por ellos convocado, refleja bien algunos de los principales motivos del descontento popular: la tala inmoderada de los bosques, propiciada por la concesión de 1963 a la Compañía Silvicultora Industrial S. de R. L.; el bloqueo de las autoridades a la textilera cooperativa de El Ticuí, que la había obligado a cerrar el año anterior; el hostigamiento del presidente municipal a los habitantes de la colonia Mártires de Chilpancingo y, por último, una denuncia específicamente magisterial: el acoso a Cabañas y Núñez por parte de las autoridades educativas, con el argumento de que son “enemigos de México”, “introdutores de ideas exóticas” y, en fin, “una caterva de aprendices de comunistas”¹⁰⁴.

A la postre, la cacería de brujas contra los maestros subversivos resultará la cuestión más explosiva, pues en diciembre de 1965 Cabañas y Núñez son suspendidos, por impartir doctrina comunista, y las autoridades de la Secretaría de Educación cambian sus plazas al nortero estado de Durango. En repudio al exilio político, los estudiantes y padres de familia toman el plantel, y para que se reanuden las clases el gobernador tiene que intervenir personalmente.

En ausencia de Lucio Cabañas, atoyaquense nacido en El Porvenir y militante del PCM desde sus tiempos de normalista en Ayotzinapa, el liderazgo de la movilización popular queda, provisionalmente, en manos de los cívicos. Durante 1966 la ACG, la Liga Agraria Revolucionaria del Sur y el Consejo de Autodefensa del Pueblo, realizan por lo menos tres mítines, concentraciones que demandan mayor precio para el café, denuncian el asesinato de campesinos y llaman a liberarse del “cacicazgo abarca-mirandista gobernante en Guerrero”. En el último, realizado el 26 de noviembre, se denuncia la aprehensión del presidente de la ACG, Genaro Vázquez, y de otros dos líderes del Consejo de Autodefensa del Pueblo.

Capítulo séptimo

De la oposición electoral a la oposición armada

La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el “estado de excepción” en el que vivimos... Tendremos entonces en mentes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción; con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha.

Walter Benjamin,
Tesis de filosofía de la historia

EL 8 DE MAYO DE 1965 el gobernador Abarca Alarcón había promulgado un decreto macarthista, por el cual se aplicaría

[...] prisión de 2 a 12 años y multa de 10 a 10,000 pesos, a toda persona que difunda o propague una idea programa o plan por cualquier medio y que tiende a alterar el orden a la paz pública del Estado, o a subvertir las instituciones jurídicas y sociales¹⁰⁵.

Y los años siguientes son de constante hostigamiento a los cívicos. Acorralada y con sus principales dirigentes encarcelados, la ACG endurece su posición, y después de liberar es-

pectacularmente a Genaro Vázquez de la prisión de Iguala, en 1961 se transforma en Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), nombra una dirección político-militar y emprende la organización de “la lucha armada del pueblo contra la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes proimperialistas que nos gobiernan”¹⁰⁶. También en Atoyac, los últimos sesenta son años de intransigencia gubernamental y cerco político a los opositores. Y aunque ahí el liderazgo no lo tienen los cívicos sino los comunistas¹⁰⁷, el resultado es el mismo: clausuradas todas las opciones legales, la oposición emprende el camino de la lucha armada.

Por esos años el fantasma de la guerrilla recorre el mundo —principalmente el “tercero”—, y en nuestro continente la estrategia de liberación nacional por la vía armada se expresa ideológicamente en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (Olas), formada en Cuba en enero de 1966 como parte de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL)¹⁰⁸. También la izquierda guerrerense sintoniza en esa frecuencia, pues tanto el PCM como la ACG —esta última a través del MLN— participan en la Olas. Así, la visión guevarista de que un foco insurreccional puede ser el germen de la revolución, es moneda corriente en el ideario político tanto de los militantes cívicos como de los comunistas.

No hay duda, pues, de que los alzamientos guerrerenses de los últimos sesenta años no están a salvo del discurso foquista¹⁰⁹. Pero la influencia del modelo no va mucho más allá de algunas recetas organizativas y muchas fórmulas verbales. En Guerrero, la contraviolencia popular como respuesta a la represión, no es invención voluntarista de

líderes políticamente actualizados, sino reflejo social de profundas raíces históricas.

El origen anecdótico del enésimo levantamiento costeño, es la historia de cómo Lucio Cabañas pasa de la docencia a la insurgencia, entre los aplausos y las porras de la beligerante población serrana. Todo empieza con un agravio relativamente menor: un maestro de la escuela estatal Juan Álvarez es separado de su puesto por denunciar la prepotencia de la directora y el mal manejo de los fondos destinados a la construcción del nuevo edificio del plantel. La consabida excusa son las ideas rojillas y clases comunistoides del profesor. Animado por el grupo Defensores de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez, se inicia de inmediato un movimiento para restituir al maestro en la cátedra y expulsar a la directora corrupta. Encabezan la lucha, Lucio Cabañas y Serafín Núñez, quienes han logrado su reinstalación y acaban de regresar de Durango, y si bien los participantes más activos son estudiantes, maestros y padres de familia, los respaldan todas las fuerzas democráticas del municipio: el comité local de la CCI y el de la ACNR, la colonia Mártires de Chilpancingo, las plaseras organizadas, etcétera. Después de una serie de mítines y marchas, el 22 de abril los defensores toman la escuela, y al día siguiente se apersonan por Atoyac, en plan de diálogo, el director de Educación y el subprocurador de Justicia del estado. Los funcionarios se comprometen a investigar y resolver. Pero la respuesta no llega, y en lo que resta de abril, se mantienen la ocupación del plantel y los mítines cotidianos.

El primero de mayo, casi a un mes de iniciada la lucha y ante el silencio de las autoridades, se realiza una marcha

nocturna que a la luz de las antorchas exige la reinstalación del maestro y la renuncia de la directora; pero también la liberación de Genaro Vázquez y la caída del gobernador Abarca Alarcón.

El movimiento continúa con marchas y mítines cada vez más concurridos y acalorados, hasta que el 8 de mayo el gobernador recibe a una comisión de los defensores y, dos días después, envía representantes a Atoyac, con la consigna de aceptar la reinstalación del maestro y la renuncia de la directora. El movimiento ha logrado su cometido y la manifestación del día 12 es de júbilo.

Los vencedores, posesionados de la escuela, desean una limpia completa y no quieren que regresen los maestros vinculados con la directora saliente. Intransigencia que le sirve al gobernador para justificar la provocadora presencia de un grupo de policías judiciales en la toma de posesión del nuevo director.

El día del cambio de autoridades hay otra marcha de protesta. Los judiciales, encabezados por el comandante de la policía estatal, se quedan en la población para “dar garantías”. Al día siguiente, la plaza cívica vuelve a llenarse de manifestantes. El comandante exige a la policía municipal que desaloje la concentración, pero el alcalde se niega a intervenir.

Súbitamente, los judiciales comienzan a disparar contra el mitin. La gente responde como puede. Algunos pueden a balazos. El zafarrancho, que deja siete muertos —dos de ellos policías— y decenas de heridos, sólo se detiene por la intervención del Ejército¹¹⁰.

Para el 28 de mayo, el coraje puede más que el miedo y el pueblo de Atoyac recupera la calle para denunciar la masa-

cre y exigir la desaparición de poderes. Por primera vez en semanas no se escucha en el mitin la exaltada oratoria del maestro de El Porvenir. Lucio Cabañas ha desaparecido.

Diez días antes, Cabañas había agarrado monte para salvar la vida. Como su abuelo, el zapatista Pablo Cabañas; como Silvestre Castro, El Círgüelo; como Alberto Téllez, Feliciano Radilla y Valente de la Cruz; como los hermanos Vidales, como tantos líderes costeños, Lucio Cabañas se remonta empujado por un angosto sistema político regional —y algo más que regional— donde sólo hay lugar para el asentimiento o la sierra. Su querella no es contra la ínfima prepotencia de una directora de escuela. En el conflicto del plantel Juan Álvarez, lo que de verdad está en juego es la libertad política; la legitimidad de tener y sostener convicciones, incluso aquellas que por no institucionales se consideran “exóticas”. Está también sobre la mesa el derecho de los trabajadores a luchar por sus intereses, pues los humildes maestros costeños —perseguidos por “disolventes” y “comunistas”— son los únicos adalides populares disponibles, de modo que transigir con su sacrificio es aceptar la sumisión.

El 18 de mayo de 1965 Lucio Cabañas se adentra en la sierra de Atoyac, de donde lo sacarán muerto el 2 de diciembre de 1974. En casi una década de lucha fuera de la ley, el exmaestro rural pone en pie una extensa organización política de base comunitaria, el Partido de los Pobres, y estructura una sólida fuerza militar, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que pese a su ominoso nombre, no sólo amedrenta a los caciques, también es capaz de golpear con éxito al Ejército.

Como todos los movimientos armados populares históricamente significativos, el que encabeza Cabañas es una mixtura de tradición y modernidad. La conciencia serrana guarda una larga memoria de alzamientos, pero los insurrectos de los sesenta no pueden recrear la División del Sur de Juan y Diego Álvarez, ni constituir un nuevo Movimiento Libertario de Reintegración Económica, al modo de los hermanos Vidales. Después de todo, Cabañas es un hombre de letras, políticamente actualizado, y su proyecto algo tiene que ver con el foco guerrillero preconizado por el Che Guevara y mucho con la teoría maoísta de la guerra popular y prolongada.

Igual que Rubén Jaramillo en Morelos, Lucio Cabañas quiere tender un puente entre la vieja y la nueva revolución. Pero mientras que en el exzapatista y fundador del Partido Agrario Obrero Morelense, tiraban más los reflejos del pasado, el joven Lucio representa lo nuevo. En su formación política han calado las nociones de la izquierda comunista de los años sesenta; fórmulas librescas que al remontarse en la sierra de Atoyac, se asimilarán a su rica tradición insurreccional.

Aquí había una concepción —dice Lucio— de que solamente con un levantamiento armado como el que hizo Vidales, y ayudados por algún general, se podía hacer la guerra. Por eso cada vez que llegábamos a un pueblo se nos acercaba un señor de experiencia y decía: “oiga profe, ¿quién es el general que nos va ayudar?”. Ellos estaban acostumbrados, desde la Revolución,

que vino Zapata [...] mandó armas ayuda y todo para levantarse [...] “Y cuándo es la fecha del levante. ¿Cuándo? —decían— ¿Cuándo? Diga la fecha nomás”. Creían que era tipo Madero, que se manda un comunicado y el 20 de noviembre se levanta, se insurrecciona la gente. Pero ahora era otro estilo, al cual no le tenían fe [...] Por eso es que nosotros no encontramos gente, de repente, para formar el grupo.¹¹¹

Pero a la larga y con paciencia, el grupo se forma. Al principio son tres, contando a Lucio, y necesitan dos años para ser nueve y cuatro para llegar a quince. En este lapso, de lento crecimiento del grupo guerrillero, el pequeño núcleo de alzados “hace pueblo” organizando comités clandestinos en todas las comunidades. En 1972, después de casi siete años de prolongada marcha por la sierra, los guerrilleros llegan a treinta y lo celebran emboscando un convoy militar. Dos años después disponen de un pequeño ejército de cien hombres, dividido en dos columnas de acción permanente y respaldado por una brigada de apoyo de algo más de setenta miembros¹¹².

Los alzados de Atoyac conforman la mayor guerrilla de base campesina que se haya integrado en México, después de la Revolución y los agitados años veinte. Sus consistentes y exitosas campañas militares superan con mucho al pobre desempeño bélico de otros alzados, como los que habían operado en la sierra de Chihuahua de 1962 a 1965 encabezados por Salvador Gaytán y Arturo Gamiz, o como los tres Comités Armados de Liberación que de 1969 a 1972 sostiene la ACNR en el propio Guerrero.

En una pequeña zona, circunscrita a los altos del municipio de Atoyac y parte de los de Tecpan y Coyuca, el Partido de los Pobres tiene en jaque durante más de dos años al Ejército nacional. Por fin, tras una siniestra década de constante represión, los serranos de la Costa Grande han puesto a punto un robusto brazo armado, y de 1972 a 1974, los pobres imponen su ley en la región. El costo, sin embargo, será muy elevado.

Las primeras medidas de fuerza son cerca de diez secuestros, realizados entre marzo de 1971 y enero de 1972. Las acciones aterran al cacicazgo y le dan presencia política al Partido de los Pobres, mientras que los rescates sustentan económicamente a la guerrilla. Siempre presente en la costa, el ejército se desborda en infructuosa persecución de los alzados. La brigada responde iniciando el acoso a los militares: en junio de 1972 ataca a un camión del 502 Batallón de Infantería, con saldo de nueve soldados muertos y dos heridos; en agosto un nuevo ataque deja 18 soldados muertos y nueve heridos; en 1973 las acciones guerrilleras suceden en agosto y noviembre, la última es una emboscada a 300 soldados que peinan la sierra, y deja un saldo de once militares muertos; en 1974 los enfrentamientos menudean y en agosto la guerrilla mata a 25 soldados en dos emboscadas. En septiembre de ese año la entrevista entre los guerrilleros y el senador Rubén Figueroa —candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero— se transforma en secuestro. El Ejército emprende una frenética persecución, que culmina con la liberación de Figueroa y el cerco y desmembramiento de la brigada. El 2 de noviembre Lucio muere en combate en el poblado de El Ototal. En 28 meses, de junio de 1972

a septiembre de 1974, la brigada le ha causado al Ejército alrededor de 150 bajas, todas en emboscadas y sin costo de vidas guerrilleras. Los brigadistas comienzan a caer durante la desastrosa entrevista-secuestro, error político y militar que les cuesta la total aniquilación.

Hasta septiembre de 1974 la guerrilla capotea bien las campañas del Ejército. Pero si los alzados pueden esquivar los golpes, los pacíficos se enfrentan impotentes a la militarización de su vida cotidiana. La presencia del ejército —crónica en la Costa Grande— se había ampliado en los sesenta, a raíz de las algaradas contra Caballero Aburto y de la finta insurreccional gasquista, y a fines de la década se transforma en ocupación militar. Para 1971, durante el gobierno de Caritino Maldonado

[...] se calcula que en Guerrero hay más de 24 000 [soldados], o sea, una tercera parte de todo el Ejército mexicano. La mayoría se encuentra concentrada en la Sierra Madre Occidental (Atoyac, Zihuatanejo, San Jerónimo, Petatlán, Coyuca y rancherías circunvecinas); la otra parte ronda por la Costa Chica¹¹³.

Genaro Vázquez, quien por esos años encabezaba la guerrilla de la ACNR, denuncia en una entrevista

[...] el empleo de la aldea vietnamita [...] en diversas regiones de Guerrero donde a punta de bayoneta, se concentra a los habitantes de zonas agrestes en centros de población controlables [...]

Entre otras (aldeas vietnamitas) señalaremos: Tlacuaxitlahuaca, El Rincón, Tierra Colorada y otras enclavadas en la zona indígena¹¹⁴.

En una grabación transcrita por Luis Suárez, Lucio Cabañas describe y analiza las campañas militares en la Sierra de Atoyac:

Son catorce hasta hoy [de] cuatro clases: la primera [...] era por puros caminos, con ejército no más, sin la judicial, y no trataban mal a la gente [...] ni robaban [...] Pero luego vino otra y entonces [...] ya vinieron agarrando familiares y a torturar, y se valieron de gavilleros y luego intervino la judicial. Éste fue el segundo tipo de campaña. [En 1970] ya era la persecución contra dos grupos: Genaro y nosotros. Entonces ya se metió helicóptero y se metió avionetas [...] También [...] el tercer tipo de campaña [...] trajo [...] doctores que vinieron a curar y regalar medicinas [...] Entonces las campañas empezaron a ser militares y políticas [...] se empezó también a regar papeles con propaganda [...] El último tipo de campaña militar es el que nos están dando después de las emboscadas [...] Entonces ya usaron seis camiones juntos, u ocho camiones juntos [...] protegiéndose [...] Es otro tipo de campaña más técnica [...] entonces meten tanquetas con sus cañones y ametralladoras [...] helicópteros, avionetas, muchos camiones, mucho ejército, mucho Fal¹¹⁵.

A fines de 1974 Lucio habla de 16 campañas militares. Y las últimas son terribles, pues el Ejército se ensaña con la población civil. De hecho durante todo 1974 Atoyac está sitiado e incomunicado. No sólo se impide la circulación de personas, también se prohíbe la entrada de alimentos y se clausuran las tiendas Conasupo para impedir que la guerrilla se aprovisione. Pero el hambre es lo de menos, lo más aterrador es la campaña de secuestros a supuestos colaboradores de la guerrilla. Las detenciones agrarias suman alrededor de dos mil y en cientos de casos los secuestrados desaparecieron para siempre. La versión popular es que los militares los tiraban al mar desde los helicópteros. El hecho es que no han regresado. En enero de 1979 Hipólito Simón recorrió los poblados del municipio recogiendo testimonios; en cuarenta espeluznantes páginas de su libro *Guerrero, amnistía y represión* transcribe nombres y circunstancias de más de 140 secuestros no aclarados¹¹⁶. El censo levantado por los familiares de las víctimas, en 1980, documenta la desaparición de 348 personas, 220 secuestradas hasta 1974, 80 entre 1975 y 1976 y el resto entre 1977 y 1978¹¹⁷.

Los esfuerzos del Ejército y la Policía judicial por enturbiarle el agua a la guerrilla, dejan en la Costa Grande un saldo de sangre comparable con los efectos de la Revolución, sesenta años antes. Pero el lustro de extrema violencia con que se inician los setenta no sólo deja muertos y desaparecidos, también destruye los nexos entre movimiento político y lucha gremial, arduamente contruidos durante la década anterior.

En Guerrero, los cívicos, como los comunistas, habían tratado de impulsar tanto la organización político-electoral

como los acuerpamientos de carácter gremial. Si los cívicos participan en los comicios a través de la ACG, el Consejo de Autodefensa del Pueblo agrupa organizaciones sociales como la Unión Libre de Asociaciones Copreras y la Asociación de Cafeticultores Independientes. Los comunistas, por su parte, actúan electoralmente a través del FEP e impulsan las reivindicaciones económicas y sociales por medio de acuerpamientos gremiales como la CCI y el MRM. Esta articulación, no siempre respetuosa y transparente pero de todos modos plausible, le da continuidad a los esfuerzos organizativos y ayuda a contrarrestar las actitudes electoreras y las tendencias maximalistas, tan frecuentes en los partidos y corrientes políticos.

La construcción paralela y complementaria de sujetos gremiales y sujetos cívicos, sobrevive, incluso, al descreimiento electoral. El fraude y la represión a la ACG en 1962 y la negativa de registro al FEP para los comicios de 1964, alimentan el discurso radical revolucionario que descalifica la participación electoral por “reformista”. Pero hasta la convicción de que el acceso al poder supone forzosamente un asalto violento, resulta por un tiempo compatible con la cotidiana lucha reivindicativa, dentro de gremios donde democracia no es un término burgués y las reformas no están satanizadas.

Tanto Genaro Vázquez como Lucio Cabañas, habían iniciado su militancia social impulsando modestas acciones reivindicativas.

Se luchó por todas las formas posibles y “legales” —dice Genaro en una entrevista de 1971—.

Miles de papeles con quejas pasaron por mis manos sin que ninguna de éstas fuera resuelta en forma razonable para los campesinos [...] Y nos cansamos ...¹¹⁸

También el guerrillero Lucio se vanagloria desde la sierra del reformismo de sus años pacíficos:

Nosotros organizábamos a los maestros y uníamos a los campesinos para luchar contra las compañías madereras y (contra) tantos impuestos [...] Y también uníamos al pequeño comercio [...] Había una Unión que se llamaba de Campesinos y Pequeños Comerciantes y Padres de Familia¹¹⁹.

Cuando este liderazgo cívico y social es obligado por la represión a hacer política armada, la puesta en pie de un ejército guerrillero sustituye en la práctica a los esfuerzos de organización y lucha gremiales, y una vez bloqueada la acción reivindicativa el discurso tiende al maximalismo. Al forzar la opción guerrillera, el gobierno no sólo expulsa de la palestra electoral a la molesta oposición cívica; también elimina de las organizaciones sociales a las corrientes contestatarias. Cuando la guerra se coloca en el centro de la lucha, las cuestiones de la democracia económica, social y política se posponen al triunfo de la revolución; se renuncia a tratar de materializarlas paulatinamente en ámbitos cívicos y gremiales, y por tanto dejan de ser materia de la acción cotidiana.

El desmantelamiento de las organizaciones cívicas y sociales de carácter democrático, que resulta del endurecimiento represivo del gobierno y de la opción guerrillera asumida forzosamente por la oposición, no sólo deja en la indefensión cívica y gremial a las mayorías, también tiene efectos nefastos en la cultura política popular, pues ratifica el desprestigio de los comicios y de la acción gremial y encierra el ideal libertario en un discurso apocalíptico y una práctica militarista. Además del saldo de sangre, el camino de la sierra tiene siempre un enorme costo político. Ya lo decía el morelense Rubén Jaramillo, que algo sabía de insurrecciones: “¿Al monte? ¡Madre! [...] Eso quisieran mis enemigos: que me alzara en armas para declarar ilegal mi movimiento [...] y mandarme a dar de balazos [...] nuevamente”¹²⁰.

A la larga, ese maximalismo de los medios de acción política, que es la vía guerrillera, y sobre todo la mitología que en torno a ella se construye, generan en una suerte de esquizofrenia social. Al hipostasiar la política como vocación de iluminados reservada a los apóstoles de un credo trascendente, se propicia el envilecimiento de la práctica social secular. Las convicciones profundas y el ideal libertario quedan para el apostolado de la sierra; la acción cotidiana, en cambio, es territorio liberado a las componendas, transas y enjuagues. Los hombres de principios se hacen guerrilleros y mueren por ellos; para los demás — o mientras llega la “hora de los hornos” — todo está permitido.

Y si los guerrilleros devienen nazarenos armados, el Estado encarna a conciencia el papel de Pilatos y prodiga los denarios en pos de su Judas Iscariote. Al principio los esfuerzos por llegar al precio de las conciencias se reducen

al asistencialismo médico. En mayo de 1969, a un año de la masacre de Atoyac, llegan al municipio dos batallones de soldados para impedir el acto conmemorativo. Pero arriba también la Operación Amistad en la Costa Grande, encarnada en 27 comandos con 500 médicos militares, que esparcen asistencia, medicinas y alimentos entre la población de los municipios de Coyuca, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan. Las brigadas médicas regresan a la zona en mayo y diciembre de 1971 y en diciembre de 1972, y además de su empeñosa y desinteresada labor asistencial, realizan un estudio socioeconómico. La investigación posiblemente es algo más que una pesquisa policiaca, pues las necesidades de la costa son tomadas muy en cuenta en los planes de desarrollo que se impulsan a partir de 1972.

Y es que el Ejército aprende pronto que la mejor arma contra una guerrilla de base popular es enfriarle el agua:

Para mí el problema del estado de Guerrero no era solamente militar, sino también político — declara el general Eliseo Jiménez Ruiz —. Yo expresé en algunas ocasiones que mientras el Ejército no se acercara el pueblo, jamás acabaríamos con la guerrilla¹²¹.

Jiménez Ruiz se refiere, también, a una reunión de autoridades municipales y ejidales con participación militar realizada en Atoyac el 28 de agosto de 1972, para que el pueblo exponga sus necesidades de caminos, escuelas, agua, electricidad, etcétera. Dice el general que “por primera vez se habló en este lugar contra Lucio Cabañas, a

pesar de que estábamos rodeados de cabañistas”¹²². Le falta decir lo que sí registra el cronista de Atoyac: “Durante el proceso de esta reunión la Federación cercó por completo las calles de la ciudad”¹²³.

Capítulo octavo

La reconversión estatista de la agricultura costeña

Dígale a Lucio Cabañas que podemos extenderle un salvoconducto, amnistía, ayudarlo en lo que considere conveniente. Dígale... que abandone las armas y se incorpore al proceso.

Presidente Luis Echeverría a Fausto
Cantú, director del Inmecafé, 1974

LA CONCERTACIÓN BAJO ESTADO DE SITIO y los estudios socioeconómicos militarizados sirven para conformar un Plan de Desarrollo Integral del Estado de Guerrero. El programa se da a conocer en 1972 y el gobernador lo comunica personalmente a los atoyaquenses el 28 de septiembre de ese año. Dos meses después, se apersona en el municipio el secretario general de la CNC, Alfredo V. Bonfil, acompañado por funcionarios de Inmecafé y Banjidal. En su recorrido los distinguidos visitantes reparten becas de estudios a los hijos de ejidatarios y entregan a los campesinos un tractor y diez —sí, diez— vacas.

Pero el Plan de Desarrollo no se queda en el reparto de unas cuantas reses; incluye programas de riego, electrificación, caminos, agua potable, escuelas, hospitales, crédito, agroindustria... De hecho es el boceto de un nuevo orden

rural guerrerense, fincado en una estructura agraria inédita donde la tradicional subordinación de los pequeños y medianos productores a la burguesía comercial y a su red caciquil de intermediarios, debe ser sustituida por la alianza entre el Estado y los campesinos; por una asociación entre las agencias económicas gubernamentales y el sector social de la producción, orientada al “desarrollo integral”, que supone financiamiento, industrialización y comercialización de los bienes agropecuarios y forestales¹²⁴.

El “Plan” es la opción a una estructura agraria tan ineficiente como injusta, que está en la raíz de la simpatía popular por la guerrilla. Pero es también la expresión guerrerense del nuevo modelo de desarrollo rural con que el gobierno presidido por Luis Echeverría trata de revertir la crisis de producción agropecuaria que se desata a principios de los años setenta¹²⁵.

Como el modelo de desarrollo echeverrista, el Plan Guerrero es de un acendrado estatismo, y su principal palanca es la creciente intervención de las agencias gubernamentales en la actividad económica rural. La multiplicación de los institutos de fomento y desarrollo y de las empresas paraestatales no acaba con la extensa y poderosa red del intermediarismo privado, pero al final del sexenio los coyotes y usureros ya no son los únicos rectores de la vida económica rural; ahora tienen que compartir su dominio con la expansiva burocracia gubernamental. Los campesinos ya no ocupan el polo subalterno del binomio presidido por la burguesía lugareña; ahora son el sector subordinado en una estructura tripartita cuyos dos vértices dominantes están ocupados, respectivamente, por el Estado y las viejas clases poseedoras.

Sin embargo, en la Costa Grande la estatización de la actividad agropecuaria resulta, al principio, preferible al cacicazgo brutal y depredador de siempre. Durante el primer lustro de los setenta la derrama de recursos públicos es una mínima compensación por las atrocidades que comete el Ejército.

Entre 1971 y 1974, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) construye en Guerrero más de 200 caminos de penetración, de los cuales cerca de 70 se ubican en el área serrana de la Costa Grande. En la misma zona se construyen 200 km de carretera pavimentada que enlazan Chilpancingo con Atoyac. Fiebre comunicadora que, por cierto, responde tanto a necesidades económicas como a fines militares. En la misma década se realizan en Guerrero cerca de 90 obras hidráulicas, con una inversión del orden de 400 millones de pesos, y crece exponencialmente el tradicionalmente raquítico financiamiento de Banjidal. En 1978 el monto del crédito de avío institucional destinado a copra, café y maíz llega, en la Costa Grande, a los 180 millones, de los cuales, 72 corresponden al municipio de Atoyac.

De las instituciones implantadas en los años de incendio guerrillero, las que dejan una huella más profunda en la región son las paraestatales destinadas al fomento de la producción coprera, silvícola y cafetalera.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS COPREROS, que había vivido sus tiempos dorados durante los últimos cincuenta, cuando los productores llegan a controlar la comercialización, comienza a desintegrarse en los sesenta y recibe

la puntilla en 1967 cuando la lucha por el poder entre la CNC, los grandes productores nacionales de la GNPP y el diputado priísta y atrabancado líder agrario César del Ángel, culmina en una espesa balacera frente a las oficinas acapulqueñas de la URPC, con un saldo, excesivo hasta para los cánones guerrerenses, de cuarenta muertos y medio millar de heridos.

Poco antes, Amador Hernández, secretario general de la CNC, había anunciado la inminente creación de una industria aceitera que sería administrada por los productores. El proyecto, de por sí demagógico y destinado a fortalecer la posición de la central entre los copreros guerrerenses, no llega a concretarse, pues a raíz de la masacre de Acapulco y de la ulterior represión, lo que quedaba de la URPC se desintegra por completo. Pero el desplante cenecista se hará realidad ocho años después, como parte de las acciones destinadas a recuperar el soliviantado ánimo coprero en favor de las posiciones gubernamentales.

A mediados de los setenta la producción coprera, que una década antes se comercializaba a través de la Unión Mercantil, está de nuevo en poder de los coyotes, y tres cuartas partes de las 72 235 toneladas que se producen terminan en las manos de un puñado de grandes acaparadores. Ese mismo año el gobierno entra en la jugada, y el flamante Banrural, resultado de la fusión del Banco del Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Ejidal, queda encargado de refaccionar y adquirir cantidades significativas de copra. Así, el raquíto millón de pesos en crédito, que en 1971 se había destinado a los cocotales, se transforma en 80 millones, con los que el banco refacciona 20,000 hectáreas de huertas,

casi una tercera parte del total¹²⁶. Al año siguiente se crea la paraestatal Impulsora Guerrerense del Cocotero (IGC) con un capital de 300 millones y destinada a acopiar, procesar y comercializar la copra. Paralelamente se anuncia un precio de garantía de 5 500 pesos por tonelada. Al año siguiente la empresa está produciendo 5 800 toneladas de aceite y 3 000 más de pasta para alimento pecuario¹²⁷.

En 1980, la IGC, con cinco centros receptores, diez fábricas procesadoras y una capacidad total de 200 toneladas diarias, capta 55% de la producción. Mientras tanto, el precio de garantía ha seguido aumentando; en 1979 es de 11 300 pesos por tonelada y en 1981, después de un descalabro productivo en el año anterior, Conasupo se incorpora a la comercialización pagando 16 000 pesos por tonelada. En este contexto, de populismo subsidiador y paternalista, se reconstituye la organización de los copreros guerrerenses, naturalmente con ánimo sumiso y perfil oficialista.

AL OFRECER UNA ALTERNATIVA comercial a la tradicional red de acaparadores la IGC restablece, en cierto modo, la relativa autonomía que los productores habían logrado en los años sesenta a través de la Unión Mercantil, aunque ahora con un mayor componente de estatismo. En la silvicultura, en cambio, la reordenación de los años setenta no tiene antecedentes. La etapa expansiva de la explotación forestal iniciada a fines de los años cuarenta, corre por cuenta de tres o cuatro empresas privadas, que a través de concesiones accedieron a los bosques comunales marginando por completo a la población local. En Tecpan y Atoyac

operaba desde 1948 Maderas Papanoa de Melchor Ortega, y a partir de 1966 Maderas Río Atoyac del mismo propietario. También en Tecpan, comenzó a trabajar por esos años, la compañía Chapas y Triplay. Algo más tarde, a partir de 1968, la Industria Forestal del Poniente emprende la explotación de los bosques de Coyuca.

La resistencia al saqueo se inicia al mismo tiempo que la producción: ya en 1945 hay un movimiento en los aserraderos de Melchor Ortega y, en los sesenta, numerosas comunidades serranas de Costa Grande se rebelan contra el saqueo de Maderas Papanoa: en 1962 el Naranjal y San Vicente de Jesús expulsan de sus bosques a la compañía de Melchor Ortega y en 1964 Mezcaltepec, Agua Fría y El Camarón luchan contra la empresa, encabezadas por el maestro Lucio Cabañas.

Para 1972, 80% del área silvícola guerrerense está en manos de cuatro compañías. Pero socialmente la situación es insostenible, pues la zona más productiva, la sierra de Tecpan y Atoyac, es escenario de una cruenta guerra. Ese mismo año se crea el organismo público descentralizado Forestal Vicente Guerrero (FVG), destinado a absorber las diversas compañías madereras, pues se le concede la exclusividad para explotar los bosques de la entidad. El primer director del FVG presiona sin demasiado éxito para que se cancelen las concesiones, pero pronto cambia el rumbo de la paraestatal cuando la encabeza Rubén Figueroa, vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas y heredero del viejo cacicazgo de la zona norte del estado. Cabe anticipar que este poderoso grupo regional recuperará en 1975 la gubernatura de la entidad, precisamente a través de Figueroa.

La lucha de las comunidades contra las arbitrariedades de las compañías, el incumplimiento de los convenios y la depredación de los bosques, había sido básicamente defensiva y carente de alternativas para organizar un aprovechamiento silvícola autogestionario. Y, naturalmente, la intervención del Estado a través de la FVG no abre por sí misma esta posibilidad. Con todo, las relaciones de la nueva empresa con las comunidades son menos conflictivas de lo que era habitual con las compañías privadas, además de que la FVG contrata trabajadores locales para las actividades especializadas de corte y extracción, que en las empresas particulares desempeñaba personal foráneo.

EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC la reconversión estatizante más significativa de los años setenta se desarrolla en la cafecultura. La intervención gubernamental en este cultivo es antigua, pero tanto la Comisión Nacional del Café, fundada en 1949, como el Inmecafé, constituido en 1959, son al comienzo instituciones de asesoría a los grandes productores, de modo que durante los años cincuenta y a principios de los sesenta su participación en los esfuerzos autogestivos de los cafecultores es irrelevante.

Desde su fundación, el Inmecafé tiene oficinas en Atoyac, pero hasta principios de los setenta su presencia económica es mínima. En el ciclo 1971-1972, el instituto capta apenas 10% de la cosecha, mientras que un puñado de acaparadores adquiere 80 por ciento.

Las acciones armadas del Partido de los Pobres alcanzan su punto culminante en 1973, y el mismo año el Inmecafé

comienza a repartir dinero a diestra y siniestra, a través de un programa de créditos refaccionarios indiscriminados, de nítida función antiguerrillera apenas oculta tras la máscara del fomento. En 1973 el Instituto distribuye 16 millones de pesos y al año siguiente la derrama de sobornos encubiertos se eleva a 21 millones. En diciembre de 1974 muere en combate Lucio Cabañas y para 1975 el monto del crédito se desploma a nueve millones, cantidad que ya no aumenta significativamente en lo que resta de la década.

Pero más allá de los coyunturales subsidios políticos, la presencia del Instituto responde a una estrategia de intervención estatal en la industrialización primaria y en la comercialización de ciertos productos agrícolas, que modifica drásticamente la tradicional hegemonía de la burguesía comercial y sus patrones lugareños. Para 1975, el Inmecafé ya se ha transformado en el principal comprador del grano aromático en Atoyac y durante toda la década su presencia económica es creciente. Así como el IGC induce la organización de los copreros, el Inmecafé, cuya primera contraparte campesina son las Unidades Económicas de Producción y Comercialización, creadas exprofeso, propicia después la conformación de un interlocutor de carácter regional: la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil que se funda en 1979 con la participación de 18 comunidades del municipio de Atoyac.

“DICEN: ECHEVERRÍA YA SE VOLVIÓ BUENO [...] el gobierno de los ricos ya se volvió bueno [...] pues ya nos dieron carreteritas, tiendas Conasupo e Instituto del Café, y crédito y otras cosas [...] Bueno, pues ya que deje

de luchar Lucio, ya hay que abandonarlo, que se lo frieguen los guachos.”

Así ironiza el propio Lucio Cabañas en alguna reunión de la sierra. Y, como éste, abundan los testimonios de que el Partido de los Pobres percibía el cambio de coyuntura que representaban la presidencia de Echeverría y el gobierno de Figueroa:

Al mismo tiempo que ha aplicado un castigo, una represión al pueblo de Guerrero, principalmente en su región Sierra de Atoyac y Costa Grande; al mismo tiempo, trata de aplicar [...] una política [...] reformista; manda Luis Echeverría a hacer curaciones, regalar frijolitos, a hacer carreteritas, a dar dinerito, a ofrecer vaquitas, a ofrecer conejos, para contentar a la gente. Y promete muchas cosas: libertad de voto, libertad de expresión y muchas cosas de esas [y] va a poner a uno de los suyos, a Rubén Figueroa [que] ya viene repartiendo tierritas [...] peleándose con ciertos ricos, viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal... y mucha gente se va a engañar, vamos a sufrir debilitamiento con Rubén Figueroa. Vamos a sufrir debilitamiento en Guerrero¹²⁸.

La búsqueda y realización de una entrevista con Rubén Figueroa y las evidencias de que Lucio pensaba en una “retirada táctica”¹²⁹ son, quizá, indicios de que algunos en el Partido de los Pobres consideraban la posibilidad de tran-

sitar a formas menos drásticas de lucha política. Pero se impusieron los duros; la entrevista derivó en secuestro y el secuestro en debacle.

La guerrilla guerrerense no se percata del ascenso de los movimientos sociales democráticos que se inicia en los años setenta. Pero aun si lo percibiera, de todos modos está imposibilitada para reingresar a la lucha legal, cuyos espacios ensanchan otros sectores populares. En los años de la pos-revolución, sólo Rubén Jaramillo logra transitar en dos ocasiones de la guerrilla de autodefensa a la lucha legal. Pero el líder morelense es asesinado en 1962, tras su última pacificación, y a principios de los setenta la enseñanza del crimen está todavía fresca.

Las réplicas de Genaro Vázquez a los análisis periodísticos de Heberto Castillo y Víctor Rico Galán, son dramático testimonio de la miopía política ocasionada por la dinámica militarista de la guerrilla:

Las fuerzas represivas han liquidado cualquier idea de organización democrática que quiera participar abiertamente para tratar de cambiar la situación del país [...] Ninguna oportunidad existe de organización política, dizque democrática. Quien se exhibe está cooperando abiertamente, o bajo cuerda, con el gobierno [...] Rico Galán inventa que se está dando en México la lucha por la democracia [...] No existe tal lucha democrática en marcha y pleno avance. El subjetivista señor Rico la inventa a su medida¹³⁰.

Y sin embargo, existía. Los electricistas de la tendencia democrática, los ferrocarrileros de nueva cuenta vallejistas, la incipiente lucha campesina por la tierra, el movimiento urbano popular, configuran durante los setenta un nuevo espacio democrático; un terreno inédito de lucha reivindicativa que no es una simple maniobra mediatizadora del gobierno, ni mucho menos una invención. Ámbito de participación que los demócratas guerrerenses, transformados en guerrilleros a fuerza de golpes, son incapaces de asumir.

La guerrilla que encabeza Lucio Cabañas es diezmada en 1974 y el Partido de los Pobres fracasa en su intento de “hacer la revolución socialista, conquistar el poder político; destruir el Estado burgués explotador y opresor [y] construir una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores”¹³¹. Con la aniquilación de la Brigada de Ajusticiamiento se cumple la involuntaria predicción de Lázaro Cárdenas, formulada en la sierra de Guerrero en febrero de 1966, cuando habían transcurrido apenas nueve meses de que Lucio agarrara monte en pos de su quimera libertaria:

Esta gente — escribe Cárdenas en sus apuntes — vive desesperada y de continuar así matarán a los que les roban su trabajo. Y los matarán también a ellos acusándolos de asesinos [cuando] lo harán por falta de justicia¹³².

A los insurrectos les queda grande su utopía socialista. En cambio asestan golpes de muerte a quienes les roban su trabajo. Después del alzamiento, el viejo cacicazgo costero

ya no levanta cabeza. La explotación y la opresión perduran, pero los métodos inicuos de los tradicionales patrones lugareños son barridos por la combinación de factores nacionales, estatales y regionales convocada por la rebelión de Lucio y los suyos.

El enriquecimiento en grande de los barones costeños del café había empezado a mediados de los años cincuenta. Cuando las huertas establecidas al calor de los buenos precios de la posguerra estaban en plena producción, y ante el desafío de los malos caminos, los productores más pudientes y emprendedores establecen un sistema de acopio que utiliza las brechas abiertas por las compañías forestales, pero también la transportación aérea; al cabo que el alto precio del café lo paga todo. Garantizado el acopio y transporte de la producción, los pujantes acaparadores establecen los primeros beneficios húmedos en la sierra e instalan grandes beneficios secos en Atoyac. Con esto la red se cierra y un puñado de barones del café se enseñoorea sobre miles de pequeños productores serranos, quienes en lo sucesivo dependerán de ellos para la habilitación, el beneficio y la comercialización del aromático. El sistema no es nuevo en la costa; ya de antiguo se había aplicado con el algodón, el arroz, el ajonjolí y la copra, pero ahora se instaure en un cultivo más remontado que aquellos, de alto valor económico y potencialmente exportable, lo que hará de los coyotes cafetaleros el grupo costeño más poderoso de la segunda mitad del siglo.

Desde mediados de los años sesenta, Raúl Galeana Esteva, Onofre Quiñones, José Navarrete, Ignacio Sotelo Fierro, José Becerra, Roberto Nogueta y Carmelo García Galeana,

concentran la producción de vertiginosas extensiones cafetaleras serranas, haciéndose cada día más ricos y poderosos a costa de las penurias de más de dos mil pequeños y medianos productores.

En el arranque de los años setenta el auge económico de los barones del café se combina con su ascenso político, a raíz de que el gobernador Caritino Maldonado muere en un accidente y lo sustituye Nogueta Otero, personero del cacicazgo costeño. Pero cuando la vida les sonríe y se sienten dueños de la gloria, el poder y el dinero, Lucio Cabañas comienza a tirar balazos y lo echa todo a perder.

LA DESGRACIA DE CARMELO GARCÍA ilustra la desventura de los señores costeños del café a manos de la guerrilla. Los García no eran los más poderosos, pero — pobremente — tenían cuatro beneficios húmedos en la sierra y uno seco en Atoyac. En una temporada llegaban a acopiar hasta 35,000 sacos de café, además de compras “al tiempo” de maíz, ajonjolí, coco y tamarindo. Don Carmelo era un hombre de cartera fácil; nunca negaba un préstamo y tampoco se tentaba el corazón para cobrarse con la huerta del deudor.

Don Carmelo tenía un hijo llamado Cuauhtémoc. En 1972 se lo secuestró la guerrilla. A cambio de su vida, los del Partido de los Pobres exigieron dinero y también que condonara las deudas de su copiosa clientela. Don Carmelo cumplió y recuperó a su hijo. Pero ya no era lo mismo. Los malagradecidos costeños le habían pagado mal, no se merecían sus bondades. Vendió huertas y más huertas, se deshizo de

sus modestas propiedades en Acapulco, malbarató sus cuatro beneficios húmedos, que pasaron a manos del Inmecafé. No conservó más que el viejo beneficio seco de Atoyac. Quizá por apego nostálgico, pero también porque mortear café para los productores y el Instituto era un negocio tan redondo como seguro¹³³.

Sin embargo para los García las ventas forzadas fueron un descalabro: de los 35 000 sacos que pasaban por sus manos a principios de los años setenta, diez años después sólo acopiaban 5 000. A Raúl Galeana y a los Quiñones no les fue mucho mejor; ellos no abandonaron la región pero perdieron su viejo control y redujeron sensiblemente la escala de sus negocios.

Al deterioro de su base económica y desgaste de su patriarcal autoridad política, por obra de los irrespetuosos cabañistas, se suma el debilitamiento de su gobernador; un Noguera Otero incapaz de aniquilar a la guerrilla, o tan siquiera de “enfriarle el agua” neutralizando la complicidad activa de los pueblos. Y conforme declinan los barones costeros, se fortalece el poderoso grupo de la zona norte del estado, que con la candidatura por el PRI de Rubén Figueroa apunta de nueva cuenta a la gubernatura.

El fin de los tiempos costeros es una auténtica debacle: el Congreso de la Unión desconoce los poderes en el estado, acusando al gobernador de enriquecimiento ilícito, y Noguera hace mutis con la cola entre las piernas dos meses antes de que termine el período gubernativo. Poco después Figueroa toma posesión chorreando sangre, pues ha salido triunfante de un doble combate: el secuestro, del que lo libera cruentamente el ejército, en lo que es el principio del fin

de la guerrilla cabañista que lo había apresado, y la oprobiosa salida de Noguera, hecho que asesta un duro golpe a las veleidades políticas del grupo costeño. Además, Figueroa cuenta con el apoyo del presidente Echeverría, con quien había colaborado al frente de la Comisión del Río Balsas. Así, el segundo Figueroa en gobernar Guerrero, llega pisando fuerte. Por vez primera un grupo regional logra hegemonizar, casi sin oposición, las centrífugas fuerzas de la balcanizada entidad sureña¹³⁴.

En los años setenta, los coyotes se azorrillan. El otrora poderoso cacicazgo de la Costa Grande se encoge acosado por tres frentes. En el ámbito local, Lucio Cabañas los corretea y los antes sumisos campesinos les pierden el respeto. En la entidad, los norteños encabezados por su adalid, el gobernador Figueroa, los hacen menos, y por último, la Federación, hasta entonces remota, los somete a la desleal competencia de usureros institucionales, como Banrural, y de coyotes paraestatales como Inmecafé.

Capítulo noveno

Del gremio al *holding* social

Lograr un avance económico que sea socialmente justo; impulsar el desarrollo productivo con equidad, es el principal reto de nuestra organización. Desafío aún mayor en los tiempos del neoliberalismo económico en que rentabilidad y distribución de beneficios resultan objetivos excluyentes.

Los pequeños y medianos productores del campo, como los obreros y empleados de la ciudad, queremos una economía que valore y dignifique el trabajo, criterios de rentabilidad compatibles con la justicia distributiva, metas de beneficio económico que no sacrifiquen el beneficio social. Sabemos que es difícil —algunos nos dicen que imposible— pero no aceptamos menos.

*La Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero
frente a los retos del siglo XXI*

LA GUERRILLA ATOSIGA A LOS ACAPARADORES y esto es bueno para los campesinos. El lado oscuro del asunto son cerca de diez años de bayonetas; casi una década de ocupación militar, supuestamente enfilada contra los alzados, pero que proscribió también la organización legal y la

acción pacífica de los civiles. En los setenta la Costa Grande vive en estado de sitio, lo que impide a los pequeños productores ocupar los espacios desalojados por el cacicazgo.

Los primeros movimientos de resistencia gremial son inciertos y efímeros. Por el año de 1973 el profesor Leobardo Ceferino Cortés, quien encabeza el Comité Regional Campesino de la CNC, emprende acciones reivindicativas que le granjean respeto y seguidores. Simpatías bastantes para llevarlo a la Presidencia municipal de Atoyac, pero insuficientes para romper la “jetatura” que pesa sobre los alcaldes: a los ocho meses de haber tomado posesión, los poderes de Chilpancingo lo decretan enfermo y le conceden licencia indefinida. Ocupa su lugar Bertoldo Cabañas¹³⁵.

No es sino hasta fines de la década, ya muy atemperados los ánimos costeños, cuando arranca un proceso organizativo llamado a ser trascendente y prolongado. Fundada en 1979, conformada por 18 comunidades agrarias y con el cenecista Pedro Magaña haciendo cabeza, la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil es un acuerpamiento destinado a perdurar. Sin embargo, al comienzo “la Bonfil” no es más que el saldo organizativo de la acción del Inmecafé; la necesaria contraparte social de una empresa de Estado.

EL COMERCIO CAFETALERO puede ser un buen negocio, pero no es un negocio fácil. Al contrario, acopiar, procesar y vender el aromático es oficio laborioso y complicado. Los acaparadores son desalmados, no incapaces; es cierto que bolsean sin misericordia al campesino, pero también cumplen la insoslayable función de ensartar a miles de pequeños productores dispersos, tanto a través de la habilita-

ción como por medio de la compra, transporte, beneficio, almacenamiento y mercadeo de grandes volúmenes de café.

Cuando el Estado emprende una drástica intervención financiera, industrial y comercial en la cafecultura, necesita crear un extenso aparato; un sistema complejo, cuyas funciones centrales pueden ser desempeñadas por burócratas, pero que requiere colaboradores movidos y flexibles para las labores de campo. Si los grandes comerciantes privados disponen de extensas redes de coyotes lugareños que manejan la relación directa con el productor, así el Inmecafé necesita trabajadores de primer piso para operar el crédito y acopiar el producto. Y qué mejor que asignarle la función a los propios campesinos, quienes de por sí están en el medio, se conocen las mañas, y por si fuera poco, trabajan de balde.

Las Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC), formadas por cafetaleros de base, son un necesario complemento operativo del instituto; pero también la contraparte social de la empresa, el indispensable interlocutor campesino que le otorga legitimidad a la labor de los funcionarios públicos. Las UEPC, cuyo horizonte de trabajo son los grupos de productores, pronto resultan estrechas. Se crea, entonces, una organización de segundo nivel y miras más amplias; una Unión de Ejidos capaz de actuar en escala regional. Esta figura asociativa puede operar, además, como contraparte de otras agencias estatales, de carácter federal como la Secretaría de Agricultura, Banrural y Conasupo, o del gobierno de la entidad, como la Dirección de Desarrollo Rural. La Bonfil surge, pues, de una iniciativa vertical; responde a necesidades del Estado y sólo formalmente expresa la voluntad asociativa de los ejidatarios de a pie.

LA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES gremiales por iniciativa gubernamental, o por decreto, no es excepcional en Guerrero ni tampoco en el país. De hecho en el México posrevolucionario el poder ha sido el gran organizador de la sociedad civil. Desde que el nuevo Estado era aún nómada y las fuerzas constitucionalistas — aliadas con la Casa del Obrero Mundial — iban estableciendo sindicatos sobre la marcha, a la vez que integraban comités agrarios de guerra, amparados en los decretos reformistas del 6 de enero de 1915, el poder ha sido artífice de la organización obrera y campesina.

Cuando la revolución se hace gobierno estable, también la conformación de los agrupamientos gremiales por el Estado se institucionaliza. En el campo, la constitución de comisariados ejidales y ligas de comunidades agrarias, es inducida por la Comisión Nacional Agraria y por el paraestatal Partido Nacional Agrarista, y la CNC, como representación campesina nacional prácticamente monopólica y de carácter corporativo, es manufactura del gobierno cardenista, que las administraciones posteriores terminan de domesticar haciéndola bailar al son de la contrarreforma agraria.

Las ligas y confederaciones campesinas, los sindicatos y centrales obreras y hasta las cámaras agrícolas, industriales y comerciales, han sido en México la máscara civil de un Estado todopoderoso. Pero no sólo la organización gremial es obra del sector público, también la acumulación privada de capital ha tenido como palanca la acción

del gobierno. En el México del siglo XX el acceso al poder político y a sus favores ha sido condición del poder económico. Y esto, que está detrás del embarnecimiento de las gordas fortunas privadas, es aún más cierto en lo tocante a los modestos haberes del llamado sector social de la economía. Si las grandes empresas particulares mexicanas son hijas del gobierno, las empresas asociativas campesinas son entenadas del omnipresente Estado rural. Desde la tierra y el agua, dotadas a discreción por las autoridades agrarias y agrícolas a cambio de fidelidad política, hasta el crédito, la maquinaria, la semilla, los agroquímicos, la agroindustria y los sistemas de mercadeo, todo pasa por las manos de un Estado multinterventor.

En el sector ejidal, el involucramiento económico de la administración pública arranca fuerte con el cardenismo, involuciona en los años de contrarreforma agraria y se sale de madre en los desorbitados setenta. Apenas hay metáfora en afirmar que para fines de esa década el conjunto de la economía ejidal conforma una suerte de agricultura paraestatal, una adiposa y renqueante Agromex.

A fines de los años setenta y en el arranque de los ochenta, el ogro filantrópico, es decir, nuestro Estado metiche, promueve la formación de cientos de organizaciones rurales de segundo y tercer nivel¹³⁶. En Guerrero se fabrican uniones de ejidos en Tierra Caliente y la zona norte, en la Costa Chica y en la Montaña. La Alfredo V. Bonfil comparte con la Unión de Ejidos Forestales Hermenegildo Galeana el privilegio de representar a los campesinos de la Costa Grande.

Algunos de estos membretes fantasmas, de estos cascarones organizativos sin más contenido que las funciones

marginales que les asigna su contraparte estatal, son retomadas más tarde por los campesinos. Son reanimadas en una suerte de refundación democrática que hace de ellas *lázaros* autogestionarios. Esto, que sucede en todo el país, también pasa en Guerrero; pero en la entidad sureña la posibilidad de pronunciar el “levántate y anda” que reviva a las organizaciones vanas y paraestatales se pospone debido a la coyuntura política local.

RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA tuvo una bien ganada fama de cacique bronco; de político tan ocurrente y alburero como taimado y golpeador. Sin embargo, le tocó en suerte gobernar su entidad federativa de 1975 a 1981, años en que va quedando atrás la cruenta limpieza política que acompaña a la liquidación militar de la guerrilla. Así, junto con la persecución de “subversivos” y los secuestros de presuntos simpatizantes de Lucio y Genaro, conforme el olor a pólvora se disipa, Figueroa impulsa una política de contención del conflicto y restauración del consenso; pretensión alimentada con abundantes recursos financieros federales y sustentada en la creciente intervención del Estado en la vida económica rural. Con esto el gobernador de Guerrero no hace más que seguir la línea trazada por el presidente Luis Echeverría, durante cuyo sexenio ocupa el cargo, y continuada con sus aseguines por el presidente López Portillo, con quien termina su gestión. Figueroa se preocupa también, si no por airear, sí cuando menos por aromatizar los enrarecidos ámbitos políticos del estado. En 1978 promulga una ley de amnistía, que reincorpora a los

exguerrilleros presos a la vida civil. Algunos, los de convicciones más frágiles, pasan directamente de la celda a una oficina pública, pues la “apertura” figueroísta, más que abrirle espacios a la oposición legal, pretende neutralizar y cooptar a la disidencia.

En tiempos de Figueroa nada se mueve en el estado si no lo dispone el hombre fuerte de Chilpancingo. Situación muy poco propicia para tratar de insuflar autonomía y democracia en las organizaciones corporativas creadas durante su sexenio. Alejandro Cervantes Delgado, en cambio, es un gobernador que sabe aflojar las riendas sin perder el control, y si Figueroa había sofocado el conflicto, su sucesor hace el milagro de recuperar en alguna medida el consenso ciudadano. Legitimación que consigue, en parte, reconociendo los esfuerzos autogestivos de las organizaciones campesinas, incluso las que se proclaman autónomas y están animadas por un espíritu opositor.

Aunque el gobierno de Cervantes Delgado (1981-1987) coincide con la presidencia de Miguel de la Madrid y está encuadrado en la consabida línea de privatización, desregulación y adelgazamiento del Estado, durante su mandato las políticas públicas de la entidad marchan a contracorriente de las federales. Más que un administrador de los neoliberales años ochenta, Cervantes aparece como el último de los gobernadores populistas, como el furgón de cola del Estado intervencionista y benefactor. Baste un ejemplo: en los años de frenética desincorporación de paraestatales, el ejecutivo de Guerrero crea veintiocho nuevas empresas de ese carácter, de modo que recibe la administración con ocho y la deja con treinta y seis¹³⁷.

Cervantes Delgado formula un nuevo Plan Guerrero y emprende acciones redistributivas y de fomento. Programas como los de Fortalecimiento Municipal, Aulas Comunitarias, Crédito a la Palabra y Dando y Dando, entre otros, se desarrollan en todo el estado. En Malinaltepec y San Luis Acatlán, de la Costa Chica, y sobre todo en Atoyac, Tecpan y Coyuca, en la Costa Grande, se ejecuta además un programa para el desarrollo integral de las zonas cafetaleras, en el que confluyen recursos federales y estatales con propuestas e iniciativas de las organizaciones societarias.

Es en este contexto propicio, que los campesinos guerrerenses retoman organizaciones huecas como la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, en la Costa Grande.

HASTA 1981 LA UNIÓN¹³⁸ agrupaba sólo formalmente a los cafetaleros guerrerenses, pero ese año cobra vida, y encabezada por una nueva directiva sale a la calle para reclamar al Inmecafé el cumplimiento de sus promesas. La lucha, que moviliza a miles de pequeños productores en torno a las demandas de anticipos adecuados, pago de los finiquitos atrasados¹³⁹ y sobre todo, mejores precios para el aromático, es además un notable acontecimiento político, dado que después de una década de inmovilidad forzada por la presencia del ejército, los campesinos costeños se animan a manifestarse de manera pública, masiva y beligerante. Y por si fuera poco, lo hacen al margen del sistema, pues para los años ochenta combatividad y priísmo son del todo incompatibles, así que la nueva Bonfil abandona la CNC y asume la autonomía como bandera política.

En 1982 el activismo cafetalero se despliega también en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz y, por vez primera en su historia, el movimiento gremial de la Costa Grande confluye y se coordina con una movilización campesina independiente de carácter nacional. El combate es por los precios, se prolonga hasta 1983 y deja en los participantes la convicción compartida de que las organizaciones cafetaleras deben seguir luchando por que el Estado cumpla con sus responsabilidades, pero no pueden conformarse con ser grupos de presión. En el balance de las intensas movilizaciones, concluyen que es necesario pasar del simple reclamo de políticas públicas adecuadas, a la corresponsabilidad con las instituciones paraestatales, no sólo en el fomento agrícola sino también en las funciones industriales y comerciales. Los campesinos —se dice— pueden y deben ejercer un control efectivo sobre el ámbito económico donde operan; para emanciparse deben hacer suya la gestión en todas sus etapas; deben, en fin, apropiarse del proceso productivo.

Para la Bonfil esto significa un drástico viraje; lo que ellos llaman “un cambio de terreno”. Ya no se trata sólo de encabezar a sus agremiados en movilizaciones reivindicativas o contestatarias; es necesario organizarlos también en torno al financiamiento, al desarrollo y la transferencia de tecnología agrícola, a la industrialización y al mercadeo. No es posible ni conveniente dejar en manos del Inmecafé el fomento de estas actividades y la conducente organización productiva de los cafeticultores. Así como en lo político la organización campesina debe ser independiente de los partidos y en lo gremial más le vale apartarse de las pretensiones corporativas del gobierno, en lo económico le

conviene ser autónoma respecto de las instituciones y empresas paraestatales.

Pasar de los gritos y sombrerazos contestatarios a la gestión de programas y empresas cafetaleras es sólo un aspecto de la rectificación. El otro es la creciente diversidad de las áreas de incumbencia. Ya no basta con abarcar toda la problemática del café, hay que abordar también las cuestiones de abasto, educación, salud, vivienda, vías de comunicación, agua potable, energía eléctrica, etcétera. Se trata de enfrentar de manera íntegra la problemática productiva y de servicios de los campesinos costeños, lo que significa dejar de ser una simple organización gremial, parcializada en los asuntos del café, para conformar un agrupamiento omnipresente y multiactivo.

Así, la Unión de Ejidos incursiona en los frentes de la salud y la capacitación, impulsa la lucha por el establecimiento de un Sistema Regional de Abasto Comunitario y participa después en su administración, entre otras cuestiones. La ruptura con la tradición unilateral y excluyente de los agrupamientos gremiales, le permite además, dotar de contenidos específicos al programa para el desarrollo integral de las zonas cafetaleras, transformándose en el principal interlocutor costeño del gobierno de Cervantes Delgado.

Pero la base primigenia de la Unión son los cafetaleros, de modo que la presencia de la Bonfil se hace más contundente en la medida en que expande su capacidad de acopiar y comercializar el grano aromático. Los pequeños productores, que de los años cincuenta a los sesenta habían sido carne de coyote, y en esta última década habían reconocido en el Inmecafé una opción de venta menos rapaz, a mediados

de los ochenta encuentran en la Unión una tercera vía de mercadeo, ahora propia y definitivamente más favorable; una suerte de acaparador social y filantrópico que cumple sus promesas y paga mejores precios. En el ciclo 1984-1985 la Unión acopia alrededor de 5,300 quintales, provenientes de 500 productores, al ciclo siguiente capta más de 10 000 quintales entregados por 1,650 productores y en la cosecha 1986-1987 comercializa 13,000 quintales en beneficio de unos 2,000 campesinos. La organización, que había nacido en 1979 con 18 ejidos, para 1983 ya agrupa a 45 comunidades agrarias, tanto en la Costa Grande como en la Costa Chica y la Montaña, lo que equivale a 90% de las familias guerrerenses productoras de café.

El cambio de terreno es adoptado también por los contingentes cafetaleros autónomos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, quienes, ensimismados como los guerrerenses en la construcción de aparatos económicos propios, dejan en segundo plano los encuentros interestatales. Hasta que, en el ciclo 1986-1987, se produce una nueva convergencia en la lucha por los precios, y en 1989 se constituye una estructura de enlace y representación más estable, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), con cerca de treinta núcleos de agremiados en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Chiapas y Guerrero.

Con la intervención creciente del Inmecafé en el acopio del grano, pero sobre todo con la intensa marea organizativa regional y nacional de los pequeños y medianos productores, mengua sensiblemente el control político de los añejos finqueros y acaparadores. Corren, sin embargo, buenos años para el café, de modo que su poder económico se mantiene

en lo fundamental incólume y pronto encuentran el modo de restaurar la fuerza de sus cacicazgos.

En Guerrero, el viejo grupo de acaparadores está muy golpeado por la combinación de guerrilla, políticas públicas intervencionistas y organización campesina, pero algunos de sus antiguos miembros y otros nuevos, se las ingenian para reestablecer el cacicazgo con métodos innovadores y bases ejidales. En esto cuentan con la complicidad de las instituciones gubernamentales, pues una cosa es el discurso incendiario y come-coyotes de Fausto Cantú Peña, director del Inmecafé de 1973 a 1978, y otra muy distinta, la práctica cotidiana de la paraestatal. De hecho, tanto el Instituto como Banrural, favorecen a los grupos caciquiles, particularmente a aquellos que se disfrazan de auténticos campesinos. Así, desde mediados de los años setenta, Epifanio Hernández, Ignacio Sotelo y Guadalupe Andrés, entre otros, forman la Sociedad de Crédito Ejidal de Paraíso, que no sólo goza de privilegios financieros, sino también de sobrados permisos de exportación que les permiten ser los primeros cafetaleros guerrerenses en acceder al mercado mundial. Siguiendo sus pasos, los coyotes de San Vicente de Benítez se disfrazan de corderos ejidales y crean otra sociedad de crédito, encabezada por Pascual Cabañas, connotado líder de la CNC.

Estos grupos mangonean los créditos, pues controlan los comisariados ejidales, y al monopolizar los permisos de exportación pueden vender como propio el café comprado a pequeños y medianos huerteros. Pero su restaurado poder se ve acotado por el embarnecimiento de la organización autónoma de los productores. La Bonfil es su crónico dolor de cabeza. Y así como los campesinos aguardaron por una

coyuntura adecuada para democratizarla, así los caciques tienen que esperar, agazapados, a que se presenten en el estado condiciones favorables para echarle mano.

LA ADMINISTRACIÓN DE CERVANTES DELGADO (1981-1987) fue propia de un Estado intervencionista y benefactor, pese a convivir con un gobierno federal privatizante. En cambio, Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), quien toma posesión durante el sexenio de Miguel de la Madrid, es un nítido precursor de Carlos Salinas de Gortari, a cuyo grupo pertenece. Desde su campaña, Ruiz Massieu deja claro que sus prioridades estarán en el sector terciario de la economía guerrerense —el turismo que deja divisas— y que le tiene sin cuidado el sector primario —la agricultura que genera empleo¹⁴⁰.

Y, en efecto, lo que cuenta para su gobierno es el puerto de Acapulco, en donde se obtienen siete de cada diez pesos del producto interno bruto estatal, y no el depauperado e inhóspito campo de la entidad, donde, sin embargo, trabajan siete de cada diez guerrerenses ocupados. Los recursos públicos se concentran en proyectos urbanísticos de lujo, como el fraccionamiento Punta Diamante, y en vialidades turísticas de alto costo, como la Autopista del Sol, mientras que al campo llegan sólo las migajas y los recursos federales que el gobernador no puede interceptar.

Pero además, Ruiz Massieu es un hombre del centro, un tecnócrata sin arraigo en la entidad, que necesita granjearse la voluntad de los brazos fuertes de Guerrero. Su consigna es, entonces, todo a través del PRI, lo que significa: todo a través de los caciques.

Por su parte, las organizaciones campesinas, que ven venir el mal tiempo, tratan de cobijarse para resistir la tempestad que se avecina. El primero de abril de 1987, en el último año del gobierno de Cervantes Delgado, conforman la Alianza de Organizaciones Autónomas del Estado de Guerrero en la que confluyen más de diez agrupamientos, principalmente rurales.

En la Costa Grande, la Bonfil se encuentra en la cresta de la ola. El año de 1987 es de buenos precios para el café y la Unión acopia una cantidad récord de grano, las movilizaciones nacionales de los meses anteriores la han puesto de nuevo en contacto con el resto de los cafetaleiros autónomos del país y es inminente la creación de una coordinadora nacional. Pero en 1987, termina también el camino franco y se inicia una vereda pedregosa y difícil que prefigura el declive.

En agosto de 1987, con motivo del cambio de las autoridades de la Bonfil, la CNC toma por sorpresa a la dirección democrática, y con el apoyo de doce de los veintidós núcleos ejidales formalmente adscritos a la unión, logra que su candidato, Pedro Magaña, gane la mesa directiva. Sin duda el liderazgo independiente, confiado en sus éxitos económicos y políticos, había descuidado el trabajo de base. En particular, había desatendido la relación con los comisariados ejidales, quienes en la práctica fueron suplantados por los Grupos de Trabajo Colectivo¹⁴¹, quizá más eficaces, pero formalmente menos representativos. Es cierto, también, que el triunfo de la planilla de la CNC es por una mayoría mínima y logrado por medio de la compra y el chantaje de las autoridades ejidales. Hay que tomar en cuenta, por último,

que a estas alturas la Bonfil agrupaba cafetaleros de alrededor de cuarenta comunidades agrarias, que sin embargo no se habían registrado como miembros formales de la Unión; de modo que los doce votos con los que gana Pedro Magaña, son en realidad los de una minoría poco representativa.

Pero en el fondo, el golpe a los independientes no se explica tanto por el audaz aprovechamiento de estas circunstancias favorables, como por la coyuntura creada en el estado con la llegada al poder de Francisco Ruiz Massieu. El cenecismo costeño no da paso sin huarache; si arrebató la directiva de la Bonfil es porque de antemano ha negociado con el nuevo gobernador el respaldo político y económico que le permita consolidar su triunfo.

Es sintomático, al respecto, que la toma por asalto de la mesa directiva de la Unión vaya acompañada por uno de los habituales camarazos por los que son defenestrados en Guerrero los alcaldes desafectos. Apolinar Castro Zamudio ocupaba la presidencia municipal de Atoyac cuando la CNC se apoderó de la Bonfil; el hombre era priísta pero además de ser una herencia de Cervantes Delgado, había sido demasiado condescendiente con la anterior directiva de la Unión, de modo que, en respuesta a una solicitud que firma a regañadientes rodeado de abruptos policías motorizados enviados por el gobernador, el Congreso le concede un “permiso por tiempo indefinido” y lo sustituye por el incondicional Alejandro Nogueda¹⁴².

El liderazgo democrático de los cafetaleros tuvo que abandonar las oficinas, con todo y equipamiento, y se le escapó un beneficio seco que estaba a punto de estrenar. Se quedó también sin el membrete de la Unión. Pero no perdió del

todo la figura. De inmediato apeló a la fidelidad de las bases y tres meses después del golpe, en presencia de más de dos mil campesinos congregados en Atoyac, fundó la Coalición de Ejidos y Comunidades Cafetaleras de la Costa Grande. En el mismo viaje, los productores ocuparon las oficinas del Inmecafé exigiendo reconocimiento.

Tal parece que a los campesinos democráticos la usurpación que les expropia las instalaciones también les sacude las telarañas burocráticas, pues durante 1988 logran avances espectaculares: acopian y comercializan la nada despreciable cantidad de 6 700 quintales de café; consiguen que se les transfiera el sistema regional de abasto, hasta entonces operado por Diconsa, y que se les entregue en comodato el almacén central ubicado en Alcholoa, y finalmente, constituyen una Unión de Crédito Agrícola, Forestal, Industrial y Ganadero (UCAFIGSA) que les augura cierta autonomía financiera.

¿Resultado del buen liderazgo, del activismo y de la movilización popular? Sin duda. Pero también ayudó que la flamante coalición formara parte de la convergencia nacional cafetalera que pronto se acuerparía en la inminente CNOC, miembro de la entonces bien parada Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Regionales Autónomas (Unorca) y en especial que contara con amigos en el gobierno federal; interlocutores del centro quienes equilibraron el hostigamiento sistemático del gobernador de su entidad. Para fortuna de los costeños democráticos, el grupo compacto salinista no era en verdad tan compacto y, como resultó obvio a raíz de su asesinato, José Francisco Ruiz Massieu tenía enemigos poderosos en el propio gobierno federal.

El despegue de la coalición es espectacular: al año siguiente de su fundación, acopia, como hemos dicho, 6,700 quintales de café, un año después capta 7,200 y para el ciclo 1990-1991 comercializa 21,400, cifra récord tanto para la coalición como para la vieja Unión, que en su mejor momento había captado 13,000 quintales y que con el cambio de administración, marcha por la calle de la amargura y en vez de café acopia deudas.

Pero el avance económico más importante, operado tanto por la acción del Inmecafé como por el trabajo de las organizaciones cafetaleras autónomas, es la transformación de una zona capulinera en región productora de café pergamino adecuado para la exportación¹⁴³. Y lo más importante es que esta transformación opera en favor de los pequeños productores, pues los beneficios húmedos, que permiten obtener grano de mejor calidad, se distribuyen de manera bastante democrática entre los cafetaleros modestos. Así, campesinos que antes tenían que vender su cosecha en cereza, o secarla en rústicos patios de sierra, y que en cualquier caso, estaban a merced de los acaparadores, ahora disponen de pequeños beneficios domésticos, o de equipo industrial operado de forma asociativa, que les permite producir un aromático de primera, susceptible de ser exportado a Europa y a Estados Unidos a través de los canales abiertos por su propia organización.

El histórico binomio formado por los añejos patrones lugareños, acaparadores de cosechas, y la masa campesina, siempre saqueada y sin alternativas propias de comercialización, ha dejado lugar a una estructura socioeconómica tripolar. Los caciques y coyotes siguen ahí, pero su clientela

ha mermado sensiblemente, pues desde los setenta, además de ellos, opera el Inmecafé como canal de comercialización, y a partir de los ochenta, crecen y se consolidan los aparatos económicos campesinos; empresas que actúan tanto en el mercadeo como en el financiamiento y la industrialización. Ciertamente, después de una entrada triunfal y una primera época ascendente, en cuanto soplan vientos neoliberales el Instituto comienza a menguar; pero en compensación, el polo campesino se fortalece día con día. Para fines de los ochenta, en plena debacle de paraestatales, tiende a restablecerse una estructura económica dual, sólo que ahora es mucho menos asimétrica que en el pasado, pues una parte de los campesinos se ha sacudido el yugo que los obligaba a tirar para los acaparadores y trabaja por su cuenta y riesgo a través de empresas asociativas propias.

MUCHO HA CAMBIADO EN LA COSTA GRANDE. Sin embargo, los caciques siguen gobernando. Quizá ya no tienen la autoridad social y la fuerza económica de que gozaron en el pasado, pero aún controlan el poder político. Como en el siglo XIX y en la mayor parte del XX, las alcaldías costeñas son patrimonio exclusivo de los patrones lugareños. El mando caciquil se mantiene indisputado hasta fines de los ochenta, cuando los campesinos, que se habían apropiado del proceso productivo liberando de sumisiones gran parte de la vida social, deciden tomarse también el poder político. De esto trata el siguiente y último capítulo.

Capítulo décimo

La democracia por asalto

El hombre marginal puede pensar en luchar, pero no concibe la lucha ni siquiera como lucha cívica del tipo tradicional, porque toda su experiencia es que la lucha pacífica es imposible y contraproducente... Si hay que luchar, el único camino que queda es el mismo de los amos, los ladinos y la autoridad, que no es el de la Constitución sino el de la violencia.

Pablo González Casanova,
La democracia en México

LA BRUTAL ANIQUILACIÓN DEL CIVISMO pacífico de la ACG, a principios de los sesenta, embota la beligerancia electoral opositora, al extremo de que durante el siguiente cuarto de siglo los guerrerenses se disciplinan a las rutinas comiciales del sistema.

El encarcelamiento de Suárez Téllez, candidato de los cívicos al gobierno del estado, y los muertos que siembra la saña militar contra las protestas populares, apartan de las urnas a los guerrerenses, enconando la rebeldía democrática, que pronto devendrá armada y guerrillera. Es el descreimiento en el sufragio y no la vocación institucional de las mayorías, lo que explica que durante los años setenta y la mayor parte de los ochenta, Guerrero figure entre las cin-

co entidades del país con mayor porcentaje de votos priístas. Es verdad que según datos oficiales, en ninguno de los comicios celebrados entre 1973 y 1985 el invencible obtuvo menos de 84% de los votos; pero también es cierto que en el mismo lapso se agigantó la abstención, al extremo de que en la elección para gobernador, ayuntamientos y diputados locales de 1986, los rejegos llegan a 77% en todo el estado, y la apatía comicial alcanza 87% en Iguala, 88% en Taxco y un pasmoso 92% en Acapulco, la mayor población de la entidad. Si, además, ponderamos estos datos oficiales a la luz de la proverbial manipulación priísta de las urnas, llegaremos a la conclusión de que no es verdad que en Guerrero el pueblo sufragaba por el PRI, como sugieren los huecos porcentajes, los sureños simplemente no sufragaban¹⁴⁴.

Y si la farsa electoral priísta se representa en un teatro semivacío, la oposición gesticula en el desierto. El PAN cuenta apenas con un módico reducto en Taxco y la izquierda, dueña de la legendaria pero arrumbada tradición opositora estatal, se enconcha en el municipio de Alcozauca, donde el prestigio del paisano Othón Salazar, líder magisterial y dirigente comunista, le permite al PCM ganar la alcaldía en 1980; triunfo que refrenda el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1983 y 1986. La miseria electoral de la izquierda rutinaria se hace aún más evidente en este último año, cuando el PSUM, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido de la Revolución Proletaria (PRP) y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), heredera política del grupo rebelde de Genaro Vázquez, conforman la Unidad Popular Guerrerense (UPG). Con esta coalición participan esforzadamente en los

comicios, obteniendo apenas un marginal 5% de la raquítica votación. El esfuerzo les retribuye dos diputaciones de representación proporcional, el consabido ayuntamiento de Alcozauca y catorce regidores, también de representación proporcional. Apenas lo suficiente para condimentar el banquete de puestos que se sirve el PRI¹⁴⁵.

Los comicios federales de 1988 señalan el fin de una época y son escenario de dos acontecimientos trascendentes: la silenciosa ruptura de un rito, el sufragio —sumiso u omiso— que durante más de medio siglo ratificó al partido en el poder, y el estruendoso desplome de un mito, la invencibilidad del tricolor. En gran parte del país, los ciudadanos hacen a un lado las bochornosas rutinas electorales del sistema y votan por convicción. Módica rebeldía que hace el milagro: el partido de Estado es desertado por las mayorías sufragantes, pues aun conforme a las amañadas cifras oficiales, el PRI pierde en dos de cada tres distritos electorales.

Pero la debacle del sistema debe haber sido aún mayor, pues resulta sospechoso que, en la minoría de distritos donde resultó vencedor, el PRI ganara lapidariamente y remitieran misteriosamente las habituales abstenciones. Todo hace pensar que el partido de Estado se “recuperó” de una goliza inesperada inflando marrulleramente su marcador en unos cien distritos electorales; circunscripciones que, por arte de magia, se trocaron en unánimes y participativos reductos del tricolor¹⁴⁶.

También en Guerrero se quebraron ritos y mitos; el PRI sufrió una estridente derrota y la oposición pasó, de clamar en el desierto, a llevarse entre 40 y 80% de la votación, según la fuente que se consulte. Conforme a las cifras oficiales,

Carlos Salinas del PRI, ganó con cerca de 60% de los votos, contra 35% de Cárdenas, respaldado por el Frente Democrático Nacional (FDN); 4% de Magaña, del Partido Demócrata Mexicano (PDM) y 2% de Clouthier, del PAN. Pero estas cifras son muy discutibles, pues en la mayoría de las casillas el FDN obtuvo entre 60 y 90% de los sufragios, mientras que con una minoría de distritos y casillas supuestamente ganados, el candidato del PRI casi duplicó la votación de su principal competidor. Y todo gracias a sufragistas tan entusiastas, que en lugares como Chilapa, superaron en 10% al número de ciudadanos registrados en el padrón. A esto hay que agregar falsificación de actas en Chilpancingo, robo de urnas, en Coyuca de Catalán, Iguala, Acapulco y Ometepepec, votos opositores ahogados en los ríos o quemados, en Taxco, Ometepepec y Coyuca de Catalán, y una larga lista de violaciones. En la Costa Grande, el PRI trató de evitar el frentazo manipulando el padrón electoral y repartiendo dinero, alambre de púas, despensas, pollos y promesas. De nada le valió. Según los datos de un periódico local —ciertamente simpatizante del cardenismo—, en Atoyac el PRI habría conseguido 1,974 votos contra 5,178 del FDN; en Benito Juárez las cifras serían 510 y 1,193, en Tecpan 1,973 y 6,154, en Petatlán, 1,484 y 1,620, y en La Unión 861 y 3,617. Según la misma fuente, en todo el distrito IX, la votación sería de 9,928 sufragios para Salinas y 20,286 para Cárdenas y el PRI sólo habría triunfado, y ajustadamente, en Petatlán. También habrían ganado, aunque con menos ventaja, los candidatos del FDN a la senaduría y la diputación¹⁴⁷.

Por demás está decir que la Comisión Estatal Electoral no avaló los datos que le concedían ventaja al FDN, provocan-

do airadas protestas en los municipios de la Costa Grande. En Tecpan y Atoyac todo quedó en marchas y plantones, pero los de Petatlán tomaron el Palacio municipal y bloquearon la carretera. El 5 de diciembre fueron desalojados a golpes con saldo de diez heridos. Poco después el pueblo retomó la Alcaldía y el presidente municipal priísta, Hernández Baldovinos, tuvo que renunciar.

LOS DE ATOYAC SON CARDENISTAS de hueso colorado — no en balde el general ordenó la dotación en ejido de las tierras cafetaleras —, y cuando un hijo de Lázaro Cárdenas convoca a luchar por la justicia y la democracia, no se hacen del rogar ni lo piensan dos veces. Así, en junio, un mes antes de las elecciones, cuando Cuauhtémoc visita la localidad, se le juntan más de cinco mil entusiastas atoyaquenses.

En esta localidad, el Comité Municipal Democrático del FDN está formado por los grupos políticos que se habían aliado desde 1986 en la UPG, a los que se suma circunstancialmente el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN); no participan ni el Partido Popular Socialista (PPS), ni el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), miembros del FDN pero que no tienen significativa presencia regional. Hace cabeza del comité, Octaviano Roque, animador de la Corriente Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE del SNTE). Como en los años sesenta, otra vez son maestros de primaria quienes asumen el liderazgo cívico en el municipio.

Los resultados comiciales favorables al PRI, que presenta la Comisión Estatal Electoral, son recibidos por los atoya-

quenses como una inaceptable engañifa, y desde el 14 de agosto de 1988, los cardenistas del municipio se movilizan contra el fraude. El inveterado oportunismo del PFCRN —que busca negociar prebendas a cambio de reconocer la “derrota”— pronto los lleva a distanciarse, y en octubre la lucha se depura de cardenistas de membrete.

Sin embargo, la resistencia es tan airada como efímera, pues en los tiempos del FDN el cardenismo es un estado de ánimo más que una militancia; un movimiento entusiasta pero deshuesado. Por lo menos en Atoyac, los mítines y marchas previos, la copiosa votación por Cuauhtémoc y las protestas ulteriores, fueron básicamente espontáneos. Resultado de la gran capacidad de convocatoria del cardenismo y sus consignas, más que de la eficacia y consistencia del comité municipal. Pero purgado de oportunistas y enfrentado a la insospechada magnitud de sus simpatías, el cardenismo lugareño asume su responsabilidad histórica y emprende, ahora sí, el trabajo de organización.

De agosto en adelante se forman alrededor de setenta comités de base, abarcando 80% de las localidades del municipio. De esta manera, cuando el 25 de mayo de 1989 se constituye el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el comité de Atoyac ya no está formado sólo por un puñado de cardenistas sueltos y los pocos militantes del PRT el PMS y la ACNR locales; cuenta, también, con una extensa y activa militancia de a pie.

LA SORPRENDENTE MAREJADA cardenista de 1988 resulta de la combinación de dos factores: en primer lugar un

voto de rechazo al grupo en el poder, cuya política neoliberal estaba sumiendo al país en una de las etapas más desastrosas de su historia; en segundo lugar, la esperanza de que un hijo del general devolviera la nación a los viejos y buenos tiempos en que se podía confiar en el gobierno.

Oposición a un cambio que conduce al abismo y nostalgia por un pasado nacionalista y revolucionario, pueden no ser las mejores motivaciones políticas, pero son las únicas disponibles y constituyen un buen punto de partida. De hecho, casi todos los grandes movimientos populares al comienzo fueron reactivos, lo que no les impidió dotarse de contenido programático sobre la marcha. Los guerrerenses en particular, son cardenistas porque el relamido Ruiz Massieu les está resultando tan prepotente y atrabancado como el más tosco de los caciques tradicionales, y también porque el recuerdo de Lázaro Cárdenas les es entrañable, como presidente y por su gestión al frente de la Comisión del Río Balsas, que lo llevó a recorrer tierras sureñas hasta el fin de sus días. El hartazgo y la añoranza explican, quizá, el copioso voto cardenista de 1988, pero no hubieran bastado para animar las inminentes confrontaciones electorales de 1989, en las que se jugaban las alcaldías y diputaciones locales. De modo que, sin dejar que se enfríen los ánimos, los guerrerenses emprenden la construcción de un proyecto cívico positivo y con raíces regionales. Las energías liberadas por la *jacquerie* democrática de 1988, se enfocan hacia un nuevo intento por restituirle al pueblo sureño el derecho a elegir con libertad a sus gobernantes.

LOS TERCOS ATOYAQUENSES —descalabrados en incontables luchas por la democracia—, otra vez desempolvan el civismo y aceitan la esperanza. El 23 de octubre de 1989 realizan un congreso municipalista y, el 28 de noviembre, un Foro Regional por la Defensa del Voto Popular, donde participan perredistas y dirigentes sociales de casi todos los municipios costeros. En estas reuniones se discute ampliamente el contenido concreto de la democracia local: se habla de promoción y defensa del voto, pero también se avanza en el esbozo de un municipio realmente libre y participativo, con un cabildo que sesione públicamente y con reuniones regulares de comisarios municipales, representantes de las localidades y rancherías, que contrarresten la tendencia de los alcaldes a privilegiar los intereses de las cabeceras. Se emprende, igualmente, el diseño de un programa de desarrollo municipal, que comprometa a las autoridades electas y le quite a los comicios su habitual tónica personalista. Finalmente, en la convención municipal del PRD, realizada el primero de octubre, se designan los candidatos a la alcaldía, encabezados por el maestro Octaviano Roque, principal dirigente del comité municipal.

Las organizaciones gremiales independientes no quedan al margen de tanta efervescencia democrática. Naturalmente, los cafetaleros, maiceros, sujetos de crédito, consumidores y demás sectores organizados de la región, se incorporan al movimiento en su calidad de ciudadanos. Pero lo notable es que también participan como agrupación y sin necesidad de quitarse la camiseta gremial, pues la Coalición de Ejidos interviene activamente en los comicios. Los costeros, sin

embargo, están curados de corporativismo y no quieren repetir la experiencia de los copreros, quienes engolosinados por la cuota de alcaldías que les ofrecía el PRI se empantanaron en rebatingas políticas. Así, en la asamblea anual del 10 de agosto de 1989, la coalición ratifica su independencia respecto de los partidos y la libertad electoral de sus agremiados, al tiempo que se compromete a luchar por la democratización del municipio. Detrás del acuerdo está la idea de que, si bien es necesario diferenciar las funciones de un partido de las de una organización social, la democracia no se construye únicamente en las instancias de gobierno ni se agota en la acción electoral.

La participación de la Coalición de Ejidos en torno a la problemática económica — dicen — ha sido un ejercicio de democracia. Esto es lo que ha sustentado la lucha por la democracia en el municipio, imprimiéndole un carácter permanente y social¹⁴⁸.

Por lo visto, a los costeños no les basta una democracia sin adjetivos; ellos la quieren bien calificada: con justicia y equidad, con desarrollo y bienestar. En esta tesitura, la coalición participa en el congreso, el foro y la convención ciudadanas de 1989, con propuestas democráticas como las sesiones públicas del cabildo, la creación de un consejo consultivo de comisariados, y sobre todo, con elementos para un programa de desarrollo municipal para el período 1990-1993.

La retroalimentación de las luchas sociales y los movimientos cívicos se muestra aún más claramente a principios de 1989, cuando 2 500 familias se posesionan de 90 hectáreas de terrenos baldíos a orillas de la cabecera municipal, y la efervescencia cívica que venía del año anterior se entreve-

ra con la lucha por la tierra. Para los atoyaquenses de a pie, la demanda de lotes para vivienda es continuación natural, aunque con otras banderas y objetivos, del combate contra el fraude que se había desarrollado en la segunda mitad de 1988 y prólogo de las luchas electorales y postelectorales de 1989. La toma de tierras no es iniciativa de la coalición ni del PRD, pero ambos se ven involucrados en un movimiento, que rebasa tanto las metas gremiales de la primera como los objetivos cívicos del segundo.

Una vez que el pueblo atoyaquense se echa a andar, va por todo. De 1988 a 1990 el municipio vive en perpetua agitación político-social y protagoniza las más extensas y persistentes movilizaciones de su historia. El combate tiene muchas facetas pero un solo reclamo básico: la democracia político-social. Por esos agitados meses todo parece indicar que por fin los atoyaquenses han exorcizado la maldición que les impedía una convergencia armoniosa de movimientos cívicos y luchas gremiales. Ahora sólo falta que los dejen avanzar en sus propósitos.

Al principio parece abrirse una real oportunidad para la democracia. Además de la creciente fuerza opositora, el líder cenecista Nabor Ojeda comete la torpeza de imponer como candidato del PRI a la alcaldía a Pedro Magaña, personero del cacicazgo ejidal, responsable de la corporativización y muerte de la Unión de Ejidos y enemigo jurado tanto de la coalición como del PRD. Por si esto fuera poco, Magaña es mal visto por un importante núcleo de comerciantes locales, agrupados en la Cámara de Comercio y en el Club de Leones, quienes habían apoyado la candidatura de uno de los suyos, el abarrotero Octavio Maya.

Pero el desenlace de la historia no depende sólo de los atoyaquenses. La lucha en el municipio está inmersa en el cardenismo costeño, que a su vez forma parte del despliegue perredista guerrerense, movimiento que, en 1989, prepara su primera experiencia comicial.

El PRD tiene apenas unos meses de nacido, pero se lanza por casi todo: presenta candidatos para el conjunto de las diputaciones y planillas para sesenta y cinco de las setenta y cinco alcaldías en disputa. La gira de Cárdenas por la entidad es una auténtica fiesta cívica; entre el 25 y el 26 de noviembre encabeza treinta fragorosos mítines con un promedio de tres mil personas en cada uno.

Entre tanto, el PRI, que escucha pasos en la azotea, recurre a su habitual campaña de miedo: los perredistas son promotores “del desorden y la violencia”, acusa el imparcial gobernador Ruiz Massieu; el de Cárdenas es “el partido de la sangre”, vocifera Israel Noguera, líder estatal del PRI, en el mitin de clausura de campaña. Entre tanto, en Ciudad Altamirano, en Tecpan y en otras poblaciones, el tricolor rifa tractores, carretillas, refrigeradores y máquinas de coser entre su desinteresada clientela.

El día de las elecciones, el PRI prosigue ilegalmente la campaña proselitista y el amedrentamiento se acrecienta debido a un intimidatorio operativo militar de seguridad. Pero es en los comicios propiamente dichos donde se acumula la porquería. Credenciales sin repartir en manos del Registro Estatal Electoral; casillas fuera de lugar, no instaladas o cerradas antes de tiempo; votantes sin credencial; expulsión de representantes partidistas; robo y relleno de urnas... son algunas de las triquiñuelas que denuncia el PRD el propio día de las elecciones.

A la mañana siguiente, Arcelia, Petatlán, La Unión, Ometepc y Coyuca de Benítez amanecen con plantones reclamando limpieza a los comités electorales. El mismo día, en Apango ocurre la primera toma de un Palacio municipal, forma de protesta que se generalizará en las semanas y meses ulteriores. Finalmente, el día 5 tiene lugar en Tecpan un primer estallido de violencia, cuando los perredistas, al impedir que el candidato priísta a la diputación introduzca en el comité electoral tres urnas robadas, son agredidos por ochenta policías. El saldo rojo: trece heridos —uno de bala— y dos vehículos policiacos quemados, inaugura la larga lista de destrucción y muerte que resultará del prolongado conflicto postelectoral.

La lucha se encona a partir del 10 y 11 de diciembre, días en que los comités electorales municipales, primero, y la Comisión Estatal Electoral, después, anuncian que según sus cuentas, el PRI tiene 55 municipios seguros, tres el PRD y uno cada uno el PARM, el PRT y el PFCRN. Los catorce restantes presentan irregularidades y pasan al Colegio Electoral para su esclarecimiento. Ante resultados que considera inadmisibles, la población perredista toma catorce alcaldías y realiza marchas y plantones en la mayoría de los municipios de la entidad, incluida la capital, donde se concentran delegaciones de Tierra Caliente, la Montaña y las costas. El día 15, un mitin del PRD encabezado por Cárdenas congrega en Chilpancingo a 15,000 asistentes. El líder habla de triunfos seguros en 16 municipios y posibles en otros 35, y demanda la desaparición de poderes en el estado. Los días siguientes las tomas de alcaldías, marchas y plantones se multiplican.

El 23 de diciembre, después de intensas negociaciones con el liderazgo cardenista, la presionada diputación estatal, que debe calificar las elecciones, le reconoce nueve municipios al PRD y nulifica los comicios en otros seis. Al día siguiente se levanta el plantón de Chilpancingo. Hay tiempos de tronar cuetes y tiempos de recoger varas, y todo parece indicar que la dirección del PRD en la entidad ha decidido que no es hora de ir por más sino de cosechar lo ganado, de modo que promueve un repliegue general en todos los frentes.

El 25 es Navidad, y día de guardar, pero el 26 estalla la rebelión de las bases: dos grandes marchas simultáneas, una proveniente del este y otra del oeste, convergen en Acapulco e instalan en el zócalo un plantón indefinido. Alimentan la movilización pobladores de los municipios de la Costa Grande, como Coyuca y Atoyac, y de la Costa Chica, como Ometepe y Azoyú, entre otros “sacrificados” en el regateo cupular, que se oponen categóricamente a los saldos de la “concertación”. En el mitin se anuncia la toma de cerca de veinte ayuntamientos. El año nuevo encuentra a Guerrero inmerso en una furibunda guerra postelectoral.

El gobierno de nueve municipios, con la posibilidad de llegar a 15, no es una mala cosecha. ¿Por qué, entonces, los perredistas guerrerenses echan por tierra el intento de dar por terminada la lucha? ¿Intransigencia? ¿Provocación? Nada de eso. Lo que sucede es que —como dijo Perogrullo— los votos se cuentan, no se negocian. De los comicios se espera que sean justos y transparentes; caso contrario, deben anularse o limpiarse a satisfacción de las partes. Nada más. También por razones prácticas, los puestos de elección

no constituyen materia de regateo, pues en todo acuerdo algo se obtiene y algo se cede, y para los sacrificados de una y otra parte, el resultado siempre será inadmisibile.

Atoyac es uno de los municipios “cedidos” en la primera negociación del PRD. Veamos de cerca por qué los ciudadanos no pueden aceptar acuerdos de cúpula en los que se juega su destino.

EL AQUELARRE ELECTORERO PRIÍSTA es tan escandaloso en la Costa Grande como en el resto del estado: amenazas, regalos, sobornos, y el día de las elecciones, infinitas triquiñuelas. En Atoyac el manoseo está a cargo del personal de campo de la Secretaría de Agricultura, coordinado por el jefe del Distrito de Desarrollo Rural y respaldado por el liderazgo de la ahora cenecista Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, todos ellos solapados por el pasivo e inexperto presidente del Comité Municipal Electoral.

Padrón falseado con muertos, ausentes, menores y nombres repetidos; instalación de casillas fuera de tiempo y lugar; boletas de más en unos sitios y de menos en otros; votantes sin credencial y que no firman el padrón; brigadas de sufragantes múltiples con cuatro o cinco credenciales cada uno, y como colofón, urnas robadas, perdidas, interceptadas y rellenas. Los activistas del PRD, rebasados por cerca de setenta dispersas casillas, no pueden impedir la manipulación. Pero la gente del común se percata de las irregularidades, y al día siguiente de los comicios, cuatrocientos escamados atoyaquenses hacen guardia frente al Consejo Electoral Municipal en previsión de nuevos chanchullos.

El PRD, que esperaba ganar por un margen tan amplio que por sí solo impidiera toda manipulación, enfrenta con inmovilizador pesimismo los resultados preliminares, que le otorgan al PRI una ventaja de cerca de 900 votos, muy difícil de remontar con los funcionarios electorales en contra. La actitud inicial de la directiva perredista es de pasividad; pero la cúpula partidaria no es dueña del balón y las bases llaneras no están dispuestas a salir de la cancha dando el juego por perdido. Nunca sabremos, a ciencia cierta, quién ganó en las urnas. Pero si no es seguro que el voto opositor fuera más numeroso en las papeletas, sí era el más consciente, activo y militante.

No tiene más valor una filiación política que otra, y sin duda hay priístas respetables; la cuestión es que las campañas del tricolor no apelan a ellos sino a las más bajas pasiones de su clientela cautiva. Son promociones marrulleras que lejos de propiciar la participación voluntaria y pensante, la inhiben. A diferencia del clientelismo priísta, el voto opositor es una opción siempre arriesgada y a veces peligrosa; una decisión sin más recompensa cierta que acortar el camino a la utopía democrática. Puede sonar injusto, pero es un hecho contundente; mientras el PRI se encuentre en el poder y lo defienda tramposamente, la nueva cultura política sólo se formará en las filas de la oposición.

No votar por el PRI es, pues, una elección comprometida y generosa, una decisión que desde 1962 estaba dormida en la entidad sureña, hasta que, a fines de los ochenta, comienzan a desperezarse los guerrerenses dispuestos a sufragar por convicciones. Después de medio siglo de asentimientos electorales, se pone en pie una nueva generación de ciudadanos dispuestos a tomar la democracia por asalto.

En Atoyac les decían garroteros y habían bajado de la sierra para vigilar de cerca la actuación de las autoridades electorales. El primer lunes después de las elecciones eran alrededor de cuatrocientos, pero recibidas sus quejas, la mayoría regresó a sus ocupaciones cotidianas y la aguerrida guardia se redujo a los cincuenta más perseverantes. Como no era desgaste sino simple paréntesis laboral, el sábado siguiente por la mañana llegaron quinientos. Al atardecer ya eran mil y seguían bajando. Para la tarde del domingo los garroteros sumaban dos mil y tenían copado al Consejo Electoral Municipal.

Las primeras cifras oficiales son desfavorables al PRD. Pero, tras de algunas dudas iniciales, el partido cuestiona los resultados. Conforme las denuncias van bajando de la sierra y se eliminan una tras otra las casillas manipuladas, se va develando un fraude de enormes proporciones. Al paso de los días los porcentajes de votos válidos cambian dramáticamente, y si al principio se anunciaba el triunfo del priísta Pedro Magaña, ahora el candidato del PRD, Octaviano Roque, apunta como ganador.

Atosigado por ambas partes, el presidente del Comité Municipal Electoral se declara incompetente y la víspera de que se cumpla el plazo para entregar resultados definitivos, escapa del cerco popular brincando barcas.

Abandonado el terreno por el máximo responsable, la madrugada del día 11 de enero trescientos policías antimotines dependientes de la Procuraduría de Justicia del gobierno del estado se abalanzan sobre el plantón que resguarda la documentación electoral. Su consigna: secuestrar las urnas a como dé lugar, pero también escarmentar a los insumisos.

Media hora de enjundioso aporreo deja 32 heridos costeños, cuatro de ellos graves.

Los vapuleados garroteros se crecen al castigo, y el mismo día de la golpiza una “marcha por la dignidad” congrega a mil personas. Una semana después se repite la movilización, ahora con dos mil asistentes. Las consignas de las marchas y del plantón indefinido, que se instala al concluir la segunda, son: reconocimiento del triunfo del PRD o anulación del procedimiento y nuevas elecciones. “¡Todo o nada!”, proclaman los airados atoyaquenses.

El día 22 se hace público el dictamen del Congreso estatal convalidando en triunfo de Pedro Magaña. En protesta los garroteros toman simbólicamente el ayuntamiento. Una semana después, una concurrida asamblea campesino-popular acuerda promover el nombramiento de representantes de colonias y comunidades. Comienza a manejarse la idea de constituir un ayuntamiento popular con o sin el aval del Congreso. El 31 a las doce de la noche, mil garroteros se congregan frente a la Alcaldía para impedir que al día siguiente Pedro Magaña tome posesión. El 4 de enero, al calor de una multitudinaria manifestación, más de 3 000 costeños ocupan el Palacio municipal y dan por constituido un ayuntamiento paralelo: la Comuna Municipal de Atoyac. Solemnes, los integrantes de la planilla del PRD, encabezados por Octaviano Roque, toman posesión del Consejo Municipal Revolucionario y Democrático.

La desmesura de tomarse el gobierno no se reduce a Atoyac. Ya el día primero, en Ometepepec, 8,000 manifestantes habían puesto en la Alcaldía a Eloy Cisneros, quien fuera candidato por el PRD, y en el curso de la semana, en los

24 palacios municipales ocupados, los ciudadanos en rebel­día constituyen ayuntamientos populares. Agraviados por el fraude, los guerrerenses que intentaran darse gobierno por las urnas, irrumpen por la fuerza en la democracia y forman comunas autónomas; gobiernos quizá ilegales pero sin duda legítimos.

En Atoyac, es tanto el azoro priísta y tan amplio el respaldo al cabildo popular, que de las 53 asambleas locales realizadas el 14 de enero para nombrar comisarios, 52 son para candidatos del bando que encabeza el ayuntamiento.

Lo paradójico del caso, es que la lucha por la Alcaldía se torna mucho más entusiasta y participativa después de los comicios que antes de la votación. La campaña electoral y los diversos encuentros sobre el municipio libre fueron amplios y concurridos, pero la respuesta popular, aunque favorable, no fue calurosa. La facilidad con que los mapuches falsearon las elecciones se explica, en parte, por esta relativa desidia ciudadana. Es el fraude, y después los intentos de consumar la imposición, lo que despierta energías inesperadas. Los atoyaquenses — que votaron como de soslayo — rebasan a la pasmada directiva partidaria, salen a la calle una y otra vez en marchas multitudinarias, permanecen días y noches en plantón, responden a la violencia policiaca metiéndole más ganas, y como cereza del pastel, se toman la Alcaldía y forman gobierno por la libre. Quienes no tuvieron recursos humanos para vigilar todas las casillas, un mes después son capaces de organizar y ganar 53 elecciones de comisarios en un solo día.

El contraste entre una tibia participación durante la campaña y el día de la votación, y la intensa movilización poste-

lectoral, no son exclusivos de Atoyac. Prácticamente en todos los municipios de Guerrero la lucha va de menos a más. Tal parece que los ciudadanos de la entidad no están muy convencidos de la importancia de promover el voto, sufragar y vigilar los comicios; en cambio ejercen fácilmente la democracia directa y recurren sin empacho a formas de participación más contundentes. No es mérito ni virtud, es un hecho: tal parece que la conciencia cívica incipiente avanza más rápido en las formas expeditas y a veces tumultuarias de la democracia, que en sus modalidades comiciales. Y no podía ser de otra manera; para tres generaciones que han nacido y vivido a la sombra del partido de Estado, votar es un gesto inocuo, una pérdida de tiempo. Superar esta actitud no es tarea fácil, y más ardua resulta la construcción del ciudadano cuando los hechos ratifican una y otra vez la arraigada convicción de que los sufragios son una engañifa; que el poder se pelea, se arrebat, se construye y hasta se negocia pero no se gana en las urnas.

POR UNAS SEMANAS HAY EN GUERRERO dualidad de poderes municipales. Pese a la instalación — formal y en locales improvisados — de las alcaldías priístas, la oposición gobierna en alrededor de treinta municipios, de los cuales sólo nueve tienen el reconocimiento del poder legislativo. En el resto mandan comunas populares, cuya legitimidad proviene de la movilización y cuya posibilidad de operar depende de la anuencia de sus seguidores. La situación tiene antecedentes en la intensa historia cívica de Guerrero; ya en 1961, a la caída de Caballero Aburto, la mayoría de los

municipios quedó en manos de consejos autónomos. Pero quienes entonces tomaron el poder en las comunas no combatían al sistema sino al gobernador; eran una oposición enconada pero circunstancial. Ahora, en cambio, la toma de los gobiernos municipales es parte de una lucha contra el orden político vigente y por dismantelar el sistema de partido de Estado.

Entonces la experiencia fue un fracaso; en casi todas partes la oposición en el poder reprodujo las prácticas políticas tradicionales y se generalizaron la corrupción y las pugnas internas. En 1990 opera igualmente la inercia perversa del sistema, descomponiendo por dentro a muchos gobiernos opositores¹⁴⁹, pero también hay experiencias positivas, y en algunos casos, se avanza en la construcción de un nuevo municipalismo participativo y democrático.

En Atoyac la alcaldía popular implanta el sistema de cabildo abierto, constituye el Consejo Consultivo de Comisarios y retoma el Programa de Desarrollo Municipal elaborado durante la campaña. Pero el ejercicio democrático dura poco más de dos meses, pues si el intento de acceder a la libertad política por los comicios había sido frustrado por el fraude, la emancipación municipal de facto es revertida a punta de metralleta.

LA VIOLENCIA DE LOS CACIQUES y la fuerza pública contra los opositores es endémica y enmarca todo el proceso cívico guerrerense. En un año y medio, entre julio de 1988 y enero de 1990, hay en la entidad 56 asesinatos de militantes del PRD, además de 25 detenciones, 24 agresiones

masivas y diez ataques individuales, con un saldo de 16 heridos y ocho desaparecidos¹⁵⁰. Para el gobierno, los opositores son poco menos que delincuentes, y Ruiz Massieu no sólo tacha al PRD de “desestabilizador”, también lo acusa de “tráfico de drogas” y “tenencia de armas prohibidas”, entre otras cosas.

Con motivo del informe de gobierno, el 8 de febrero recorren Chilpancingo 2,500 efectivos del Ejército a bordo de 20 tanquetas, así como 40 convoyes de la policía militar. La lectura del documento la realiza Ruiz Massieu detrás de una espesa muralla de soldados, pues en la madrugada de ese día dos diputados locales del PRD son secuestrados y 3,000 airados simpatizantes del partido salen a las calles dispuestos a interpelar al gobernador. El secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, es el personero del presidente Salinas en el militarizado informe; en su respuesta ofrece 250 mil millones de viejos pesos para Guerrero y una mayor presencia de Pronasol en la entidad. Como siempre, contra la rebeldía popular, bayonetas y dádivas, la espada y la cruz.

El día 27 de ese mes se encona la represión. En la Costa Grande, en el municipio de La Unión, dos marchas son disueltas por la fuerza pública con saldo de un perredista y un gendarme muertos y decenas de heridos. Entre tanto, en Acapulco 700 manifestantes son sañudamente agredidos por la Policía montada y antimotines, de lo que resulta un muerto, 50 perredistas y un policía lesionados, 22 detenidos, 11 desaparecidos y la apertura de averiguaciones previas contra 200 militantes del partido opositor.

Junto a las agresiones, el gobierno y el PRI emprenden intensos cabildeos con los comités municipales rebeldes, intentando socavar la retaguardia del PRD, cuya directiva sostiene infructuosas conversaciones, primero con Ruiz Massieu y después con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, para el 5 de marzo siguen ocupados 18 palacios municipales y las comunas populares están cumpliendo dos meses de dar el mal ejemplo a la nación. El gobierno necesita “restaurar el orden”, pero también quiere imponer un escarmiento.

A las tres de la mañana del 6 de marzo, en una operación conjunta, la fuerza pública recupera para la institucionalidad las alcaldías de Ometepec, Cruz Grande, Arcelia, Tixtla, Ciudad Altamirano, Tlalchapa, Tierra Colorada y Almajotzingo. Salvo en las tres últimas, que los ocupantes abandonan voluntariamente, en todas las demás hay violencia policiaca. En algunos casos la resistencia opositora es enérgica y el ataque deviene cruenta batalla. En Ometepec, quinientos gendarmes reducen a los ocupantes, decenas de secuestrados durante el ataque son abandonados en las carreteras y el líder Eloy Cisneros es detenido y torturado. En Cruz Grande los defensores se atrincheran y la balacera dura siete horas y deja un saldo de cinco muertos.

“Guerrero se encuentra en plena calma”, anuncia al día siguiente Ruiz Massieu. Después del apabullante manotazo, el gobierno reanuda —a cartucho cortado— los cabildeos con los ocupantes de siete alcaldías que aún están tomadas. Viendo su futuro en Ometepec y Cruz Grande, casi todos prefieren dialogar.

EN ATOYAC participan en la negociación el PRD y la Coalición de Ejidos, de una parte, y el jefe del ejecutivo estatal de la otra. El convenio, que se firma el 7 de mayo en el aeropuerto de Acapulco, dice a la letra:

El PRI y el PRD en Atoyac, toman conocimiento que el C. Pedro Magaña ha pasado a ser funcionario estatal y que procede que entre en funciones de presidente municipal el C. Jaime Coria Gómez [...] Están de acuerdo en que corresponden al PRI, tres regidores y al PRD tres y que la planilla se completa con dos regidores a propuesta de la Coalición de Ejidos [...] Este convenio se presentará al H. Congreso del estado [...] para sus efectos legales.»¹⁵¹

El documento, firmado por Ruiz Massieu y representantes del PRD y de la coalición, recoge un acuerdo de alcaldía equilibrada y neutral, aceptable para una oposición en forzado repliegue. Pero es también una afrenta a las leyes, empezando por los preceptos constitucionales, tanto federales como estatales. Es, además, un ejemplar modelo de la nefasta “concertación” con que se trata infructuosamente de suplir mediante acuerdos políticos el desaseo electoral.

El irrespeto a las formas más elementales empieza por la participación en el acuerdo político de una organización social como la Coalición de Ejidos, a la cual, por si fuera poco, se le conceden dos regidores. Sin duda, el agrupamiento de los cafetaleros es una fuerza real en el municipio,

pero, en todo caso, su representación en el gobierno debía encauzarse a través de los partidos y sin comprometer políticamente a sus bases gremiales. Así se habían manejado las cosas antes de la crisis; sin embargo, cuando el conflicto se agudiza, la Coalición se ve empujada a intervenir directamente. Con ello coadyuva quizá, a lograr una solución negociada, pero también pone en severo riesgo su concierto interno y su autonomía.

Más grave aún es que se despida en ausencia a un alcalde que había tomado posesión después de que su elección —fraudulenta o no— había sido calificada por el Congreso. Si se trata de una renuncia, Pedro Magaña debió ratificar con su firma el acuerdo. Pero si se trata de una desaparición de poderes, la ilegalidad es aún mayor, pues esta atribución es exclusiva de los diputados. Y lo último, aunque no lo menos importante: ¿Qué demonios tiene que hacer el gobernador del estado firmando por el PRI en un acuerdo supuestamente interpartidista?

La Alcaldía de composición empieza mal; Pedro Magaña se inconforma con su “despido” y el día de la toma de posesión sus seguidores organizan una marcha impidiendo que las nuevas autoridades ocupen el Palacio municipal. Finalmente, el priísta conciliador Jaime Coria recibe el cargo, pero los priístas intransigentes crean un ayuntamiento paralelo que cobra contribuciones y tiene su propia policía.

Tampoco Ruiz Massieu está dispuesto a honrar el acuerdo del aeropuerto, y desde el principio el gobierno del estado estrangula financieramente a la Alcaldía de conciliación. Coria formula un “Plan de los Primeros Seis meses de Gobierno”, que recoge las propuestas del ayuntamiento

popular y cuyos objetivos generales se resumen en: “democratización del municipio: terminando con el presidencialismo y rescatando la función del Cabildo; dignificando las figuras del Síndico y los Regidores; haciendo efectiva la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Artículo 115 Constitucional”¹⁵².

Pero no hay dinero para materializar los buenos deseos. Un año después, el 12 de mayo de 1991, Jaime Coria, acusado por el priísmo lugareño y financieramente sofocado por el ejecutivo estatal, es obligado a renunciar. El Congreso nombra en su lugar a Evodio Argüello de León, hombre ligado al futuro gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien la coalición califica con razón de “priísta arcaico”¹⁵³.

El 23 de mayo, en protesta por la salida forzada de Coria, ocupan la alcaldía los miembros del recién fundado Frente Municipal de Ciudadanos Democráticos, del que forman parte el PRD y la Coalición de Ejidos, pero también representantes empresariales y hasta priístas descontentos. Paradójicamente, la nueva toma del Palacio municipal corre por cuenta de ciudadanos opositores, quienes repudian la salida de un priísta y la entrada de otro.

El 18 de junio, transcurridos 27 días de ocupación de la alcaldía, 400 miembros de la Policía motorizada, quienes llegan con camionetas blindadas y desplegando ametralladoras Uzi, rifles R-15, lanzadores de granadas de gases, toletes eléctricos y perros amaestrados, ocupan a sangre y fuego el Palacio de gobierno.

El movimiento reprimido era en apoyo a un alcalde priísta, pero la fuerza pública trata a los defensores de Coria como si fueran guerrilleros. Éstas son las palabras de

Agustín Montiel López, titular de Seguridad Pública del estado a Valdés Lucena, comisario municipal de Paraíso, detenido en el asalto: “—¡Tú eres salvadoreño! ¿Por qué no empiezas a cantar el himno nacional? [...] Mira, hijo de la chingada, yo no soy un asesino, pero te voy a llevar con alguien que sí lo es”.¹⁵⁴

La fuerza pública permanece en Palacio y mantiene Atoyac en estado de sitio. Una publicación opositora calcula el dinero que cuesta tener de rodillas al municipio:

Desde el 18 de junio, sin tomar en cuenta el equipo de ataque y el transporte, ni los honorarios extras, se ha gastado en sólo 12 días la módica cantidad de \$704 400 000; es decir, sólo considerando los salarios nominales, el raquítrico menú, el hospedaje de los comandantes y el combustible. Esto quiere decir, casi 60 millones de pesos diarios.¹⁵⁵

Tres días después del desalojo, en la zona cafetalera de Paraíso, Evodio Argüello y un representante del gobernador reparten cemento, láminas de cartón corrugado, despenzas... También prometen 150 balones de fútbol...¹⁵⁶ (¿qué, no eran vacas?)...

Deja vu. Recurrencia.

¿TIENE CASO SEGUIR CONTANDO una historia que se muerde la cola? ¿Pormenorizar el encono represivo y la debacle económica en que se gestaron el áspero discurso y la

aguerrida militancia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur? ¿Narrar cómo, el miércoles 28 de junio de 1995, diecisiete campesinos de esta organización fueron acribillados a mansalva por policías agazapados en un recodo del camino?

¿Sirve de algo constatar que, cuando escribo estos renglones, otra vez la sierra está erizada de soldados y otra vez se rumora de insurgentes errantes?

La historia de la Costa Grande es, como pocas, viciosa y recurrente: el pueblo se moviliza por la buena contra el cacicazgo y le responden con balas; los agraviados afilan el discurso como los machetes y el ciclo se cierra poblando camposantos.

Como en perverso carrusel, las fiestas cívicas costeñas son interrumpidas una y otra vez por la prepotencia. Así aconteció en los años veinte, en tiempos del POA y los Escudero, así ocurrió en los sesenta, cuando Genaro Vázquez y la ACG, y así sucedió el 6 de marzo de 1990, en los años del PRD, cuando los judiciales asaltaron las promisorias alcaldías al constructivo grito de

¡Tengan su democracia cabrones!

Así cuándo.

PD: A un año exacto del crimen de Aguas Blancas, un grupo de hombres y mujeres armados y embozados, irrumpió en el acto luctuoso. A nombre del Ejército Popular Revolu-

cionario, el mayor Emiliano reiteró el sempiterno motivo de los alzamientos costeños:

El gobierno [...] se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder [...] por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza [...] de las armas.

Notas

¹ Miguel Lerdo de Tejada, *Comencio exterior de México*, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1967, p. 17.

² Vid. Moisés Santos y Jesús Álvarez, *Historia de la cuestión agraria mexicana, estado de Guerrero, épocas prehispánica y colonial*, México, UAC-CEHAM, s.f., p. 107.

³ Vid. "Testamento de Juan Álvarez", en Fernando Díaz y Díaz, *Santa Anna y Juan Álvarez frente a frente*, México, SEP, 1972 (col. Sepsetentas, 33), p. 150.

⁴ *Manifiesto del C. Juan Álvarez a los pueblos cultos de Europa y América* (ed. y pról. de Daniel Moreno), México, s.e., 1980 (col. El siglo XIX, 3).

⁵ Leticia Reyna, *Las rebeliones campesinas en México (1819-1900)*, México, Siglo XXI, 1980, pp. 85-117. En carta del 18 de mayo de 1843 al ministro de Guerra y Marina, Máximo Palacios, transmite un informe del coronel José María González Mendoza que le atribuye a Álvarez el fomento de la insurrección: "[...] dicho jefe me ha hecho saber, como punto muy esencial, que para su concepto ésta no era una simple guerra de indios, sino más bien los preliminares de un acontecimiento político que se fragua y se prepara muy de antemano en las comarcas del sur, apoyado en el natural carácter de estos habitantes, indicándome al mismo tiempo que sin duda ninguna [...] era el excelentísimo señor don Juan Álvarez quien fomentaba la rebelión", supra, p. 100.

⁶ Carta al ministro de Guerra y Marina, 20 de octubre de 1847, citado en Díaz y Díaz, op. cit., p. 40.

⁷ Manifiesto del C. Juan Álvarez..., p. 40.

⁸ "Carta a Santa Anna", 17 de mayo de 1843, en Díaz y Díaz, op. cit., p. 29.

⁹ Ibid., p. 45.

¹⁰ Carta de Santa Anna a Juan Álvarez, 16 de abril de 1842, ibid., p. 72.

¹¹ Vid. Moisés Ochoa Campos, *La revolución mexicana, sus causas políticas. Segunda parte, la dictadura*, México, BIEHRM, 1970, pp. 215 y ss.

¹² La descripción de las funciones de las prefecturas aparece en la primera ley orgánica de Guerrero, promulgada en 1859. En otras, como la Constitución de 1881, no se consignan las atribuciones del cargo. Vid. Carlos Iliades (comp.), *Guerrero. Textos de su historia*, México, Gobierno del Estado de Guerrero-Instituto Mora, 1989; t. 1, pp. 318 y ss., y t. 11, pp. 129 y ss.

¹³ Citado por Ian Jacobs, *La revolución mexicana en Guerrero, una revuelta de los rancheros*, México, Era, 1972, p. 35.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Luz Guadalupe Joseph describe sabrosamente la amplitud del imperio español de la costa guerrerense: “Bien pronto la dominación fue absoluta. Disponían de rutas para llevar y traer la mercancía. Los mercaderes locales ya no pudieron sacar productos libremente [de intentarlo] los mataban. Y para completar [...] las tres casas compraron y construyeron veleros, que llevaban y traían la mercancía de Manzanillo, Zihuatanejo, Papanao, Barra de Tecoaapa, Chacahua y Salina Cruz. Y se hicieron de la representación de barcos de altura que tocaban el Puerto [...] El camino de Acapulco a México — quince días a caballo — se volvió exclusivo de las Tres Casas [...]

En Acapulco, en Pie de la Cuesta y en otros lugares, levantaron enormes bodegas en las que almacenaban el arroz, el frijol, el maíz, el algodón, etcétera, que habían adquirido. En esas bodegas también guardaban petróleo, fertilizantes, arados, mantas, que vendían a los costeños [...]

En ambas costas hay yacimientos de oro, plata, plomo y otros minerales; pasaron a poder de B. Fernández, de Uruñuela y de Alzuyeta. Establecieron fábricas de hilados y tejidos de algodón, la de Ticuí y la de Aguas Blancas [...]

También fungían de bancos. Manejaban los créditos. Todo era de ellos: la tierra, sus productos, los caminos, el mar, la administración pública, la pernada [...] Las Tres Casas lograron el milagro de hacer que Acapulco no existiera para el mundo. El silencio era su mejor aliado [...]” Luz Guadalupe Joseph, *En el viejo Acapulco*, México, *La Prensa*, 1992, pp. 150-60.

¹⁶ Para las causas de las insurrecciones campesinas de Guerrero, vid. Reyna, op. cit., pp. 83-120, y coordinada por la misma autora, *Las luchas populares en México en el siglo XIX*, México, CIESAS, 1983, pp. 49-73.

¹⁷ Jacobs, op. cit., pp. 106-7.

¹⁸ Vicente Fuentes Díaz, *Historia de la revolución en el estado de Guerrero*, México, INEHRM, 1983, p. 112.

¹⁹ Jacobs, op. cit., p. 119.

²⁰ Citado por Renato Rabelo, “Periodo 1910-1920”, en Jaime Salazar Adame, et. al., *Historia de la cuestión agraria mexicana, estado de Guerrero, 1867-1940*, México, Gobierno del Estado de Guerrero, UAG, CEHAM, 1987, p. 128.

²¹ “Informe militar del capitán Carlos V. Anderson y otros”, en Custodio Valverde, *Julián Blanco y la revolución en el estado de Guerrero*, México, Imprenta de J. Chávez, 1916, p. 10.

²² Vid. Wilfrido Fierro, *Monografía de Atoyac*, s.p.i., p. 25.

- ²³ Valverde, op. cit., p. 6.
- ²⁴ Ibid., p. 10. Los subrayados son nuestros.
- ²⁵ Vicecónsul Edwards, citado por Jacobs, op. cit., p. 132.
- ²⁶ Citado por Rabelo, op. cit., p. 177.
- ²⁷ Citado por Jacobs, op. cit., p. 136.
- ²⁸ Vid. Ugancio Martínez Rivera y Gabino Campos, "La lucha agraria en la Costa Grande, Guerrero, de la Revolución a la muerte de Juan R. Escudero, 1911-1921" (tesis), Chilpancingo, UAG, 1980, p. 143.
- ²⁹ Vid. Armando Bartra, "Cien años de lucha campesina", *Historias*, n. 8-9, enero-junio de 1985, México, INAH, pp. 41-9.
- ³⁰ Vid. Rabelo, *Juan R. Escudero, biografía política*, Chilpancingo, UAG, 1982, s.p.
- ³¹ Mario Gil, "Los Escudero de Acapulco", *Historia Mexicana*, n. 10, octubre-diciembre de 1953, México, p. 297.
- ³² Alejandro Martínez Carvajal, Juan. Escudero y Amadeo Vidales, *México, Revolución*, 1961, p. 59.
- ³³ Vid. "Carta a Álvaro Obregón, lo. de septiembre de 1923", en Martínez Rivera, op. cit., p. 284.
- ³⁴ Vid. facsimilar en Rabelo, *Juan R. Escudero...*, p. 40.
- ³⁵ Ibid., p. 41.
- ³⁶ Ibid., p. 43.
- ³⁷ Crescencio Otero Galeana, *El movimiento agrario costero y el líder agrarista profesor Valente de la Cruz*, México, edición del autor, 1979, p. 95.
- ³⁸ Citado en Salazar, et. al., op. cit., p. 249.
- ³⁹ Citado en Jacobs, op. cit., p. 148.
- ⁴⁰ Bartra, *Los herederos de Zapata*, México, Era, 1985, p. 25.
- ⁴¹ Citado en Salazar, et. al., op. cit., p. 288.
- ⁴² Ibid.
- ⁴³ Ibid., p. 271.
- ⁴⁴ Informe del agrarista Francisco Campos a Álvaro Obregón, mayo de 1923, citado en Rogelio Vizcaíno y Paco Ignacio Taibo II, *El socialismo en un solo país (1919-1923)*, México, Extemporáneos-Información Obrera, 1983, p. 59.
- ⁴⁵ "Carta al presidente Calles, 11 de febrero de 1928", citada en Martínez Rivera, op. cit., p. 25.
- ⁴⁶ Vid. Otero, op. cit., p. 222.
- ⁴⁷ Fierro, op. cit., p. 51.
- ⁴⁸ Citado en *Enciclopedia de México*, México, La Enciclopedia de México, 1988, t.III, p. 3717.

⁴⁹ Guerrero es también precursor en tener a una mujer como presidenta municipal. A partir de su éxito al frente de la junta de mejoras, en 1936 el gobernador del estado coloca al frente de la Alcaldía de Chilpancingo a Aurora Meza y Andraca. Vid. "La primera alcaldesa en la República mexicana", *Revista Todo*, 18 de febrero de 1936.

⁵⁰ Jacobs, op. cit., p. 163.

⁵¹ Ibid., p. 164.

⁵² Lázaro Cárdenas, *Obras I. Apuntes 1913-1940*, t.I, México, UNAM, 1972, p. 285.

⁵³ Ibid., pp. 282-5.

⁵⁴ Gustavo Casasola, *Seis siglos de historia gráfica de México, 1535-1979*, México, Ediciones Casasola, 1971, vol. III, p. 2342.

⁵⁵ Citado por Rafael Aréstegui Ruiz, "Campesinado y lucha política en la Costa Grande de Guerrero" (tesis), Chilpancingo, UAG, 1984, p. 26.

⁵⁶ Vid. Salazar Adame, et al., op. cit., pp. 337 y ss.

⁵⁷ Secretaría de Agricultura y Fomento, Regiones económico-agrícolas de la República mexicana. *Memorias descriptivas*, México, Talleres de las oficinas de publicidad y propaganda, 1936, pp. 352-60.

⁵⁸ Vid. Salazar, et. al, op. cit., pp. 337 y ss.

⁵⁹ Ibid., p. 427.

⁶⁰ La información sobre el PCM en Guerrero, en ibid., p. 407 y ss.

⁶¹ Secretaría de Agricultura y Fomento, op. cit., p. 353.

⁶² Citado por Francisco Gómezjara, *Aceites, jabones y multinacionales*. México, Ediciones Nueva Sociología, 1978, p. 41.

⁶³ Ibid., p. 42.

⁶⁴ La descripción de la huelga en Florencio Encarnación Ursúa, op. cit., pp. 69 y ss.

⁶⁵ Gómezjara, op. cit., p. 49.

⁶⁶ Ursúa, op. cit., p. 134.

⁶⁷ Ibid., p. 139.

⁶⁸ El POCM fue una organización política formada en 1950 por exmilitantes del PCM y de otros grupos socialistas. Uno de sus fundadores, y secretario general, fue el tlapaneco Miguel Aroche Parra, del que quizá provengan estas reflexiones. En todo caso, desde 1951 el POCM reclamó en el plano nacional que la organización de los comicios dejara de ser patrimonio gubernamental y pasara a manos de los partidos.

⁶⁹ Ursúa, op. cit., pp. 140 y 141.

⁷⁰ Bartra, *Los herederos...*, pp. 79-89.

⁷¹ Congreso nacional agrario de Toluca, organización, funcionamiento y resoluciones, Toluca, México, s.e., 1959.

⁷² Ursúa, op. cit., p. 221.

⁷³ Ibid., p. 203.

⁷⁴ Ibid., pp. 203-4.

⁷⁵ Los datos referentes a la primera organización de cafeticultores de Atoyac, en Aréstegui, op. cit., pp. 53-4, y Fierro, op. cit., pp. 197-8 y 252-5.

⁷⁶ Participante en la Revolución, obregonista y fundador del PNR, Melchor Ortega fue, también, callista contra Lázaro Cárdenas, almanista contra Ávila Camacho, y padillista contra Miguel Alemán; despiste político por el que, sin embargo, fue bien recompensado. En 1971 murió en una emboscada, precisamente en la Costa Grande, donde tenía fuertes intereses madereros.

⁷⁷ Sobre la explotación forestal en la Costa Grande, ver Gómezjara, op. cit., pp.149 y ss.

⁷⁸ Ejemplo de la abigarrada y exhaustiva composición del antiaburtismo es la membresía del Consejo Coordinador de las Organizaciones del Pueblo de Guerrero que se reunía en Chilpancingo: "Asociación Ganadera; Asociación de Agricultura; Asociación para el Agua Potable; Asociación de Charros; Aseadores de Calzado; Auténticos Copreros; Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo; Cafeticultores; Comité Cívico Guerrerense, Cámara de Comercio; Caminos; Delegación Agraria y de Colonización; Frente Democrático; Frente Zapatista; Frente Cívico de Ayotzinapa; Frente Reivindicador de Juventudes; Federación de Pequeños Comerciantes, Mecánicos y Choferes; Pequeños Comerciantes; Primera Delegación Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; representante del barrio de San Matea; representante del barrio de Santa Cruz; representante del barrio de San Francisco; representante del barrio de San Antonio; Salubridad y Asistencia; Sección XVIII de Catedráticos de la Universidad; Sección VII de Trabajadores al Servicio del Estado; Sección XII del Sindicato de Electricistas; Sociedad de Padres de Familia de la Universidad; Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Subsección de Chilpancingo; Subcomité de Huelga de la Universidad; Subconsejo de Zumpango del Río; Unión de Permisarios de Transportes Río Azul y presidente de los Barrios y Colonias". Citado por José C. Gutiérrez Galindo, *Y el pueblo se puso de pie*. La verdad sobre el caso Guerrero, México, s.p.i., p. 151.

⁷⁹ Para entender la furia popular contra el gobierno, es útil pasar de la calificación a la descripción, así sea puntual, de la barbarie aburtista. Este sórdido testimonio costero proviene de un periodista guerrerense:

“En Atoyac, cierto número de ciudadanos [...] unos cincuenta fueron consignados como enemigos del régimen caballerista. Se les metió en una cárcel de cuatro por cinco metros [...] donde [...] apenas si cabían de pie. Un rato, a modo de amenaza o de escarmiento, pudieron haber pasado aquellos hombres allí, apretados como cigarrillos. Pero no sucedió así [...] el carcelero, por órdenes expresas de Acapulco, se olvidó de [ellos] y así los tuvo, sin pan ni agua [...] durante cinco días con sus noches [...] Cuando pudieron ir saliendo, uno a uno, aquellos presos políticos, había cuatro muertos de pie [...] y tres más murieron al ser sacados [...]”, *ibid.*, p. 102.

⁸⁰ Fierro, *op. cit.*, p. 262. En el folleto “El Movimiento Estudiantil Guerrerense”, Octaviano Santiago Dionicio generaliza a todo el estado situaciones como la de Atoyac y se refiere a una suerte de dualidad de poderes: “Para aquellos tiempos de ‘nuevo gobierno’, los poderes municipales priistas habían sido pulverizados [...] y en su lugar comenzaron a instaurarse los Concejos Municipales y Populares, incluso antes de la caída de poderes. Con este panorama de [...] Concejos Autónomos, no sometidos a ningún poder superior, en Guerrero se presenta un cuadro político impropio de la Revolución Mexicana”, p. 20.

⁸¹ “El ‘gasquismo’ es la herencia caricaturesca del movimiento comenzado por Henríquez Guzmán en los años cincuenta, pero es también un ‘henriquismo’ desilusionado cuyas radicalizadas bases campesinas ya no creen en el cambio por vías electorales y pretenden tomar el poder por el camino de la insurrección, En este sentido, y sólo en éste, el gasquismo está emparentado con procesos de radicalización campesina como los de Chihuahua y Guerrero”. Bartra, *ibid.*, p. 85.

⁸² *Ibid.*, p. 89.

⁸³ Citado por Gómezjara, “Proceso político de Genaro Vázquez hacia la guerrilla campesina”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, n. 88, abril-junio de 1977, p.107.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 108.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Política*, año III, n. 67, 1 de febrero de 1963, p. 8.

⁸⁷ Fierro, *op. cit.*, p. 282.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 288.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 292.

⁹⁰ Publicado en *Política*, año IV, n. 74, 15 de mayo de 1963, p. 28.

⁹¹ Gómezjara, *art. cit.*, p. 112-3.

⁹² *Ibid.*, p. 116.

⁹³ *Política*, año VII, n. 147, 1 de junio de 1966, p. 26.

⁹⁴ El deslucido desempeño de los cívicos en las pocas posiciones de gobierno que ocuparon después de la caída de Caballero Aburto es un baldón para la A.C.G, y en el manifiesto de abril de 1966 ésta trata de justificarse: “[...] y por cuanto toca al estribillo falaz de la oligarquía de que los cívicos fallamos cuando tuvimos el poder, basta decir [que] nunca estuvimos en el poder, como falsamente se afirma: es de todos conocido que el gobierno del estado estaba en manos del gobernador sustituto, designado desde las altas esferas oficiales por el PRI. En cambio los cívicos revolucionarios propiciamos el flujo de hombres del pueblo hacia los ayuntamientos y de ello estamos satisfechos porque concuerda con nuestras convicciones ideológicas; pero estos elementos llevados a la dirección de algunos ayuntamientos no necesariamente fueron miembros de la ACG. Y si fallamos algunos, sin justificar a perversos que se colaron en algunos municipios aprovechándose del momento prevaleciente y de la nobleza de nuestro pueblo, aún así las equivocaciones que el pueblo y los cívicos pudieron haber cometido en esta etapa y por una sola vez no se comparan ni en la dimensión de los errores ni en las perversidades cometidas respectivamente a lo largo de 50 años, en que la oligarquía de caciques capitalistas y terratenientes feudales detentado el poder. *Ibid.*

⁹⁵ Fierro, *op. cit.*, p. 322.

⁹⁶ Daría Vasconcelos, *Madrazo, voz postrera de la revolución. Discursos y comentarios*. México, Costa-Amic, 1972, p. 281.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 214.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 222.

⁹⁹ Debiera decir “hacer imposible la imposición de los candidatos priistas a autoridades municipales”, pues la reforma se refiere a las elecciones internas. Pero en un militante del “invencible” el *lapsus* es casi inevitable.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 225.

¹⁰¹ Fierro, *op. cit.*, p. 326.

¹⁰² *Ibid.*, pp. 329-30.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 333.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pp. 316-7.

¹⁰⁵ Gómezjara, *art. cit.*, p. 118.

¹⁰⁶ Manifiesto reproducido en Antonio Aranda, *Los cívicos guerrerenses*, México, Luyse de México, 1979, p. 153.

¹⁰⁷ La presencia comunista en Atoyac se manifiesta, entre otras cosas, en la aparición, en 1967, del periódico *El Machete Costeño*, publicado por las Juventudes Democráticas vinculadas al PCM. Por esos mismos años aparece también un periódico antiabarquista anónimo, *El Huarachudo*.

¹⁰⁸ Vid. Hora Cero. *Testimonios de la Revolución Latinoamericana*, n. 1 y 2-3, México, 1967.

¹⁰⁹ La idea de que el “foco insurreccional” puede crear las condiciones para la revolución, proviene de la lectura guevarista de la experiencia cubana, y desde su formulación, en 1960, tiene una enorme influencia en los jóvenes de la izquierda latinoamericana. “Consideramos — escribe Guevara — que tres aportaciones fundamentales hizo la revolución cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios en América, son ellas:

“I. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. “II. No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas.

“III. En la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo.” Ernesto Che Guevara, “La guerra de guerrillas”, *Obra revolucionaria*, México, Era, 1967, p. 27.

Pero no se comprende la fuerza persuasiva de la propuesta guerrillera foquista sin ubicarla en la experiencia más amplia de la lucha liberadora cubana, donde el alzamiento aparece como la única salida cuando se cierran las puertas de la legalidad. En el “Manifiesto de la Sierra” del 12 de junio de 1957, el joven Fidel Castro escribe: “¿Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un gobierno constitucional? [...] Queremos elecciones, pero con una condición: elecciones verdaderamente libres, democráticas, imparciales. ¿Pero, es que puede haber elecciones libres, democráticas, imparciales con todo el aparato represivo del Estado gravitando como una espada sobre las cabezas de los opositores? ¿Es que el actual equipo gobernante, después de tantas burlas al pueblo, puede brindar confianza a nadie en unas elecciones libres, democráticas, imparciales?” Fidel Castro, *La Revolución cubana*, México, Era, 1972, p. 101.

En 1963, los guerrerenses acaban de participar en unas elecciones de las que han salido burlados y con “todo el aparato represivo del Estado” sobre ellos. ¿Cómo rechazar las fórmulas del Che? ¿Cómo no sentirse aludidos por el discurso de Fidel del 26 de julio de ese mismo año?: “El deber de los revolucionarios [...] latinoamericanos no está en esperar que el cambio de correlación de fuerzas produzca el milagro de las revoluciones sociales en América Latina, sino aprovechar cabalmente todo lo que favorece al movimiento revolucionario ese cambio de correlación de fuerzas y hacer revoluciones!” Guevara, op. cit., pp. 555-6.

¹¹⁰ La narración de estos hechos en Fierro, op. cit.; Hipólito Simón, *Guerrero, amnistía y represión*, México, Grijalbo, 1982, y José Natividad Rosales, *¿Quién es Lucio Cabañas? ¿Qué pasa con la guerrilla en México?*, México, Editorial Posada, 1974. *passim*.

¹¹¹ Luis Suárez, *Lucio Cabañas, guerrillero sin esperanza*, México, Editorial Roca, 1976, pp. 59-61.

¹¹² Las cifras varían según la fuente. Éstas provienen del libro de Suárez que transcribe numerosas grabaciones de Lucio Cabañas. En "Campesinado y lucha política en la Costa Grande de Guerrero" (tesis), Aréstegui calcula "una cantidad aproximada de 240 miembros en la columna entre guerrilleros fijos y transitorios", p.129.

¹¹³ *Por qué?*, n. 163, agosto de 1971.

¹¹⁴ Entrevista en *Por qué?*, n. 160-2, julio y agosto de 1971.

¹¹⁵ Suárez, op. cit., pp. 71-6.

¹¹⁶ Simón, op. cit., pp. 115 y ss.

¹¹⁷ Olga Cárdenas y Félix Hoyo, *Desarrollo del capitalismo agrario y lucha de clases en la costa y sierra de Guerrero*, Chilpancingo, UAG, 1982, p. 33.

¹¹⁸ *Por qué?*, *ibid*.

¹¹⁹ Suárez, op. cit., pp. 316-7.

¹²⁰ Entrevista realizada en 1961 y publicada en Froylán Manjarrez, *Rubén Jaramillo, autobiografía y asesinato*, México, Nuestro Tiempo, 1967, p. 152.

¹²¹ Entrevista publicada en *Excelsior* el 26 de abril de 1976 y reproducida por Gómezjara en *La explotación del hombre y los bosques de Guerrero*, México, Cuadernos para Trabajadores, 1979, p. 63.

¹²² *Ibid*.

¹²³ Fierro, op. cit., p. 375.

¹²⁴ Los juicios y propuestas de Fausto Cantú Peña, a la sazón director de Inmecafé, son buen ejemplo del discurso de los funcionarios echeverristas: "Las condiciones de extrema pobreza y la explotación de que se hacía víctimas a miles de familias en la zona [de Atoyac] apabullaban. A ello se añadía el hecho de que casi todo el café cultivado en la sierra guerrerense provenía de Atoyac, y únicamente seis familias, obviamente acaparadores, compraban a muy bajos precios la totalidad de la producción para abastecer a las trasnacionales [...] De ahí el descontento y la rebeldía...

"—De ahí la simpatía de esa gente por Lucio Cabañas ...

"—Sí, en parte, y de ahí el por qué Atoyac y toda esa región hervía de soldados. La represión contra la gente, fuera o no de Lucio, había provocado docenas de muertos y desaparecidos [...]

"A la rebeldía por la marginación y la injusticia social, encabezada por Lucio Cabañas, respondía el Ejército y no una acción gubernamental

definitiva que propiciara el desarrollo económico y social de los habitantes de la sierra. Lo repito: la labor del Instituto (Mexicano del Café) era ínfima.” Alberto Cabot, *Fausto Cantú Peña. Café para todos*, México, Grijalbo, 1988, pp. 101-102.

¹²⁵ Al respecto, vid. Bartra, “Crisis agraria y movimiento campesino en los setentas”, *Cuadernos Agrarios*, n. 11, diciembre de 1980.

¹²⁶ Iván Restrepo Fernández, “Costa Grande, Guerrero”, *Revista del México Agrario*, n. 3, s.f.

¹²⁷ Efrén Balanzar, et al., “La lucha coprera en la Costa Grande de Guerrero”, *Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero*, n. 9, noviembre-diciembre de 1982, p.37.

¹²⁸ Suárez, op. cit., pp. 199-200.

¹²⁹ Vid. *Diario de Lucio Cabañas*, 23 de marzo de 1974, *ibid*.

¹³⁰ Comunicado de la ACNR del 10 de febrero de 1972.

¹³¹ “Ideario del Partido de los Pobres. Sierra del Estado de Guerrero, marzo de 1973”, en *Expediente Abierto*, n. 2, febrero-marzo de 1992, p. 15.

¹³² Lázaro Cárdenas, op. cit., pp. 118-9.

¹³³ La historia en Lorena Paz Paredes, “Diagnóstico Socioeconómico de la Costa Grande de Guerrero”, 1984 (mecanoscrito).

¹³⁴ Max Arturo López Hernández, *Proyecto político y planeación estatal 1984-1987*, Chilpancingo, VAG, 1991, p. 46.

¹³⁵ Vid. Carlos García, “Atoyac, violencia e imposición”, *El Observador*; n. 16, Chilpancingo, 26 de junio de 1991.

¹³⁶ Las uniones de ejidos, como los sindicatos, se constituyen —en teoría— por la libre voluntad de sus miembros. En la práctica sólo existen si los reconoce el gobierno mediante el registro, otorgado por las autoridades laborales en el caso de los sindicatos y por la Secretaría de Reforma Agraria en lo tocante a las uniones de ejidos y otros organismos rurales. De esta manera, las autoridades pueden bloquear la constitución de una organización que los incordia, negando el registro o simplemente no asistiendo a la asamblea constitutiva. A la inversa, pueden también constituir organizaciones, elaborando por su cuenta el acta constitutiva y recabando, una por una, las firmas de anuencia.

¹³⁷ Alba Teresa Estrada Castañón, *Guerrero: sociedad, economía, política y cultura*; México, UNAM, 1994, *passim*.

¹³⁸ La historia de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil y de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, en Rosario Cobo y Lorena Paz Paredes, “El curso de la organización cafetalera en la Costa Grande de Guerrero”. Cafetaleros. *La construcción de la autonomía*, México, Cuadernos Desarrollo de Base, 1991, pp, 77-103.

¹³⁹ Antes de la cosecha, el Inmecafé adelantaba al productor una cierta cantidad de dinero, que éste reponía más tarde en especie. El grano acopiado por el Instituto era pagado inicialmente a un precio de referencia, monto que se completaba después con un sobre pago cuya magnitud dependía del precio final que hubiera alcanzado el café. Estos pagos remanentes, o finiquitos, por lo general no se entregaban oportunamente y eran reclamados por los productores.

¹⁴⁰ El sector terciario es, con mucho, el que más aporta al PIB guerrerense. Y la tendencia es al crecimiento del desbalance: en 1970 los servicios representaban 61.8 , y 18.7 y 19.4 los sectores secundario y primario, respectivamente; para 1985 la proporción era 70 , 16.1 , 13.8 . En cambio, la mayor porción de la mano de obra ocupada se encuentra en el sector primario, básicamente agrícola —67, en 1980— y la menor en la industria y los servicios: 12.4 y 16,2 respectivamente, Vid. Jorge Carlos Payán, “Elecciones en Guerrero, 1986-1989” (tesis), LAG, 1990, pp, 21-22.

¹⁴¹ Así como las UEPCI eran la contraparte del Inmecafé, los grupos de trabajo colectivo son las células básicas de la unión en los ejidos.

¹⁴² García, op, cit.

¹⁴³ La calidad del café depende, entre otras cosas, del tipo de industrialización primaria que reciba. A falta de beneficios húmedos que desprendan fresca la pulpa del fruto del cafeto, los granos se secan al sol, lo que ocasiona procesos de fermentación que merman la calidad del producto. El café beneficiado convenientemente —pergamino— es susceptible de exportación; el café capulín, en cambio, se destina al mercado nacional.

¹⁴⁴ Estrada, op, cit., passim.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ José Barberán, et. al., *Radiografía del fraude. Análisis de los datos oficiales del 6 de Julio*, México, Nuestro Tiempo, 1988, pp, 96-8.

¹⁴⁷ *El Mosquito Picudo*, 28 de julio de 1988.

¹⁴⁸ Carlos García, “La lucha por la democracia en Atoyac”, en *Lecturas previas para el seminario: La Coalición de Ejidos frente al umbral del siglo XXI*, s.p.i., p. 2.

¹⁴⁹ Tal es el caso de Tecpan de Galeana, donde gana la planilla del PRD encabezada por Flores Bello. El nuevo alcalde es un hombre de antecedentes guerrilleros y trayectoria radical que, sin embargo, a dos días de la cruenta represión gubernamental a los palacios municipales ocupados por la oposición, recibe con los brazos abiertos a Ruiz Massieu. El 18 de marzo, a menos de tres meses de su toma de posesión, la mayoría de los regidores, que se opone al acercamiento con el gobernador, acuerda expulsar a Flores Bello.

¹⁵⁰ Los datos provienen de un escrito presentado por el PRD a la Secretaría de Gobernación el 29 de enero de 1990.

¹⁵¹ Fotocopia propiedad del autor.

¹⁵² "Plan de los primeros seis meses de gobierno", Atoyac, 9 de mayo de 1990 (mimea).

¹⁵³ "Boletín de prensa de la Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande", 25 de mayo de 1991.

¹⁵⁴ Juan José Guadarrama, "Crónica de un desalojo", *El Observador*, 26 de junio de 1991.

¹⁵⁵ *El Mosquito Picudo*, nueva época, n. 32, 29 de junio de 1991.

¹⁵⁶ "Boletín del gobierno del estado", *La Jornada*; 22 de junio de 1991.

Armando Bartra

Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. Autor de los libros, *Cosechas de ira: economía política de la contrarreforma agraria* (2003); *Guerrero bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande* (2000); *Crónicas del sur: utopías campesinas en Guerrero* (2000); *El México bárbaro : plantaciones y monterías del sureste durante el porfiriato* (1996).

Descarga todas nuestras publicaciones en:

www.brigadaparaleerenlibertad.com

Este libro se imprimió en la Ciudad de México en el
mes de febrero del año 2015.

Distribución gratuita, cortesía de la
Rosa Luxemburg Stiftung y
Para Leer en Libertad A.C.

Queda prohibida su venta.
Todos los derechos reservados.